

DINÁMICA ELECTORAL EN EL VALLE DEL CAUCA 2022

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PUNTO 2 DEL ACUERDO DE PAZ

VOLUMEN 1
NOVIEMBRE DE 2022



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Paz Territorial
y Reconciliación



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali



OBSERVATORIO
para LA PAZ
VALLE

DINÁMICA ELECTORAL EN EL VALLE DEL CAUCA

VOLUMEN 1 - 2022

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 2 DEL ACUERDO DE PAZ

DIRECTIVOS

CLARA LUZ ROLDÁN GONZÁLEZ

Gobernadora del Valle del Cauca

ORLANDO RIASCOS OCAMPO

Secretario de Paz Territorial y
Reconciliación del Valle del Cauca

AUTORES

**SEMILLERO AWAMUY DE COMPORTAMIENTO
POLÍTICO - PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA CALI**

Alejandro Sánchez

Andrea Fierro

Andrés Neira

Ashly Paz

Carolina Arboleda

Catalina Güiza

David Aguiño

Jacobo Uribe

Natalia González

Nohra Palacios

Santiago Álvarez

**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN
PARA LA PAZ**

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Laura Alcázar

Penélope Escobar

Yovanny Daza

**OBSERVATORIO PARA LA PAZ DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACIÓN**

Johan Andrés Niño Calderón

María Isabel Cajas Cuadros

Melissa Ramírez Montoya

COMITÉ EDITORIAL

Daniela Manrique Salazar

Johan Andrés Niño Calderón

Laura Murgueitio Bustamante

María Isabel Cajas Cuadros

Melissa Ramírez Montoya

FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES

Carlos Alberto Díaz y Freepik.com

Dinámica electoral en el Valle del Cauca 2022.

Diseño: Andrea González Delgado

**Dinámica electoral en el Valle del Cauca
Volumen 1**

Noviembre de 2022

ISSN: 2981-7382 (en línea)

© Observatorio para la Paz del Valle del Cauca

Periodicidad: Trienal

Secretaría de Paz Territorial del Valle del Cauca.
Edificio Palacio de San Francisco, piso 2, carrera 6
entre calle 9 y 10, Cali, Valle del Cauca, Colombia.

Las propuestas, sugerencias y/o comentarios
pueden ser dirigidos a:

observatorioparalapaz@valledelcauca.gov.co

Consulte más publicaciones en:

<https://www.valledelcauca.gov.co/gestionpaz/>

El contenido de cada apartado es responsabilidad exclusiva de los autores del mismo.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

04

CAPÍTULO 1.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ

05

CAPÍTULO 2.

VIOLENCIA ELECTORAL EN EL VALLE DEL CAUCA 2010 — 2022.
UNA MIRADA DESDE LA EVOLUCIÓN DEL RIESGO ELECTORAL

12

APÉNDICE.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA (SISEP) EN EL VALLE DEL CAUCA

28

CAPÍTULO 3.

TRANSPARENCIA EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN EL VALLE DEL CAUCA 2022

34

CAPÍTULO 4.

RESULTADOS ELECTORALES EN EL VALLE DEL CAUCA 2022

49

INTRODUCCIÓN

El 2022 fue un año electoral para Colombia; el 13 de marzo se realizaron las elecciones legislativas en las cuales los colombianos eligieron a los representantes al Senado de la República, y a la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026. Así mismo, fue la primera vez que se escogieron los representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, producto de la implementación de lo establecido en el Punto 2 del Acuerdo de Paz de 2016, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Igualmente, se llevó a cabo la elección presidencial, la primera vuelta realizada el 29 de mayo y la segunda, el 19 de junio.

Teniendo en cuenta este contexto, el presente informe pretende ofrecer una aproximación al panorama actual del estado de implementación del Punto 2 del Acuerdo de Paz a nivel territorial, alusivo a la participación política, tomando como referencia la dinámica electoral en el Valle del Cauca durante las elecciones de 2022.

El informe se divide en cuatro capítulos:

CAPÍTULO 1

"PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ"

Escrito por María Isabel Cajas del Observatorio para la Paz del Valle del Cauca, tiene como objetivo realizar una contextualización del punto 2 del Acuerdo de Paz y la implementación de los puntos asociados con la apertura democrática a los que hace referencia el mismo. A nivel territorial, este capítulo se enfoca en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en el Valle del Cauca, y las cuotas de género en las listas al Congreso de la República en el departamento.

CAPÍTULO 2

"VIOLENCIA ELECTORAL EN EL VALLE DEL CAUCA 2010 — 2022. UNA MIRADA DESDE LA EVOLUCIÓN DEL RIESGO ELECTORAL"

Escrito por el Semillero Awamuy de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, tiene como objetivo caracterizar la violencia política y electoral en el departamento del Valle del Cauca entre el 2010 y el 2022. Posterior a este capítulo, se encuentra el apéndice, elaborado por Johan Andrés Niño Calderón del Observatorio para la Paz del Valle del Cauca, el cual se enfoca en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política en el Valle del Cauca, y una breve contextualización de la Alerta Temprana electoral 2022, emitida por la Defensoría del Pueblo.

CAPÍTULO 3

"TRANSPARENCIA EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN EL VALLE DEL CAUCA 2022"

Escrito por el Instituto de Investigación e Intervención para la Paz de la Universidad del Valle, tiene la intención de reflexionar acerca de las condiciones y los aspectos que caracterizaron, desde la perspectiva de la transparencia y cumplimiento a las reglas de juego democrático, las elecciones legislativas del año 2022 en el Valle del Cauca.

CAPÍTULO 4

"RESULTADOS ELECTORALES EN EL VALLE DEL CAUCA 2022"

Escrito por Melissa Ramírez Montoya del Observatorio para la Paz del Valle del Cauca, tiene el propósito de describir cómo votó el Valle del Cauca en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, tanto en primera como en segunda vuelta.



CAPÍTULO 1

PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ

MARÍA ISABEL CAJAS

Observatorio para la Paz del Valle del Cauca
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PUNTO 2, PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR LA PAZ

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante AP), fue un acuerdo para poner fin a la violencia armada en Colombia, firmado entre el Estado y la guerrilla más grande del país, las FARC-EP, y en el que se buscaba, igualmente, reunir esfuerzos para la construcción de una paz estable y duradera.

En el marco de las negociaciones de La Habana, se estableció que el AP debía contener puntos que se relacionaran entre sí, para precisamente trabajar sobre las causas estructurales de la violencia, y en esa medida, asegurar la consolidación de la paz.

En medio del establecimiento de los 6 puntos del AP, se encuentra el Punto 2, denominado como “Participación política: apertura democrática para construir la paz”, el cual marcó un precedente significativo para el sistema político colombiano, en la medida que reconoció el carácter político del conflicto, y por ende, la necesidad de ampliar el espectro político que permitiera el surgimiento de nuevas fuerzas democráticas, y en esa medida, la necesidad de fortalecer la diversidad y la representación de diferentes sectores sociales, con las debidas garantías para su participación e inclusión.

La implementación del AP, específicamente del Punto 2, se pensó como una oportunidad para ampliar la democracia, ya que implicaría la dejación de armas y de la violencia como método de acción política, con la finalidad de transitar a un escenario con plenas garantías para quienes participaran en política (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2016).

Por esto, las partes en negociación acordaron que, con el objetivo de erradicar las causas políticas que perpetúan el conflicto armado, y contribuir con la consolidación de la paz, este punto debía contener los siguientes ejes estructurales:

TABLA 1
EJES ESTRUCTURALES DEL PUNTO 2 DEL ACUERDO DE PAZ

EJES ESTRUCTURALES DEL PUNTO 2	
I. DERECHOS Y GARANTÍAS PARA LA OPOSICIÓN Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA	Creación del estatuto de la oposición
	Sistema integral para quien ejerce la política
	Garantías de seguridad para líderes, lideresas y defensores de DDHH
II. MECANISMOS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Garantías para la protesta
	Plan nacional de control y veedurías ciudadanas
III. MEDIDAS PARA PROMOVER MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	Creación de una misión electoral especial, que tenía como objetivo hacer recomendaciones sobre las reformas electorales del sistema
	Consolidación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz-CTEP, dispuestas para los sectores más golpeados por la violencia armada
	Garantías para el acceso a los medios de comunicación, como televisión y emisoras de carácter comunitario

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de CINEP/PPP - CERAC (2022).

Ahora bien, de acuerdo con el Instituto Kroc, en su informe trimestral (1 de enero - 31 de marzo de 2022) sobre el estado de implementación del AP, específicamente del Punto 2, indican pendientes en todos sus ejes.

Sobre el eje de (i) “derechos y garantías para la oposición y la participación política”, señalan que falta asegurar la implementación territorial y nacional del Estatuto de Oposición, particularmente, en la disponibilidad del espectro electromagnético y asignación de presupuesto para acceder a medios de comunicación (Programa Matriz de Acuerdos de Paz: Iniciativa Barómetro et al., 2022).

Respecto a los (ii) “mecanismos democráticos de participación ciudadana”, indican que falta aprobar la reforma a la Ley 152 de 1994; otorgar garantías para la participación ciudadana, la movilización y la protesta pacífica, en consonancia con los lineamientos de la Comisión Nacional de Diálogo; y aprobar e implementar la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización (Programa Matriz de

Acuerdos de Paz: Iniciativa Barómetro et al., 2022).

Y relativo a las **“medidas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local”**, expresan la necesidad de impulsar la reforma política-electoral de acuerdo con lo sugerido por la Misión Electoral Especial; y de articular las iniciativas institucionales de pedagogía en temas de cultura política democrática (Programa Matriz de Acuerdos de Paz: Iniciativa Barómetro et al., 2022).

Ahondando sobre las garantías de seguridad, es necesario indicar que, si bien el Punto 2 estableció la creación de un Sistema Integral de Seguridad para proteger la vida de quienes ejercen la política, así como de líderes de movimientos políticos y organizaciones sociales (Cancillería, 2016), el Instituto Kroc (2022) señala que las afectaciones contra estos grupos poblacionales y de personas en proceso de reincorporación no cesan, y por el contrario, se han intensificado en el primer trimestre del presente año, pues se han presentado 52 homicidios, concentrados en los departamentos del Cauca, Putumayo, Nariño, Arauca y Norte de Santander.

Además, basados en los reportes de la Defensoría del Pueblo, indican que el balance de afectaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos en el 2021 es preocupante, en tanto se registraron 145 asesinatos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de DDHH, de los cuales 120 fueron hombres y 25 mujeres (Programa Matriz de Acuerdos de Paz: Iniciativa Barómetro et al., 2022).

Otra fuente que ratifica la falta de garantías de seguridad para el ejercicio de la política, es la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC (2022), pues en su undécimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, señalan, sobre el Punto 2, que continúan los retrasos en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política-SISEP, lo que ha dificultado que las actividades de esta instancia sean continuas, y que haya una articulación institucional efectiva para garantizar la seguridad.

Asimismo, mencionan las falencias alrededor del Sistema de Prevención y Respuesta Rápida, de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad-CNGS; dificultades en la promulgación del programa de seguridad y protección con enfoque diferencial para miembros de organizaciones políticas declaradas en oposición; así como retrasos en la

implementación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, y el Sistema de Planeación, Información y Monitoreo (CINEP/PPP - CERAC, 2022).

Respecto al SISEP, señalan el traslape de funciones con el Plan de Acción Oportuna-PAO, impulsado por el gobierno Duque, pues si bien se orienta a la prevención y protección de liderazgos sociales, existe una duplicidad de funciones, siendo una expresión de desconocimiento del SISEP tras haber sido promulgado por el AP, y por tanto, generando desgastes institucionales en tanto son dos entidades haciendo lo mismo. De igual forma, el documento CONPES de política pública para las garantías y el respeto a la labor de defensa de los DDHH y el liderazgo social, cuenta “con vacíos en el diseño de acciones, no reconoce el SISEP, y no establece una hoja de ruta clara en materia de articulación con las zonas PDET” (CINEP/PPP - CERAC, 2022, p. 72).

En esta línea de ideas, el CINEP/PPP-CERAC (2022), indica que ve con preocupación la falta de concordancia entre el número de alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, y la intensidad de la violencia a nivel nacional, y donde, además, esta entidad no advirtió situaciones de riesgo en 122 municipios donde hubo homicidios a defensores y defensoras de DDHH y demás liderazgos sociales, lo cual implica serios problemas para la prevención de riesgos.

Por su parte, teniendo en cuenta que este año se eligieron las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (en adelante CTEP), el Instituto Kroc (2022) reportó hechos de violencia contra el electorado y sus candidatos, debido a que en semanas previas a las elecciones de Congreso, como el mismo día de las justas legislativas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil documentaron obstáculos para elegir y ser elegidos con transparencia y seguridad, especialmente en Montes de María, Arauca, Catatumbo, Urabá, Aracatá, Sierra Nevada-Serranía del Perijá, Santa Marta, Tumaco, San Vicente del Caguán y la Macarena.

Y añaden que, revisando la trayectoria de las personas elegidas para representar estas circunscripciones, se presentaron cuestionamientos sobre 12 de los 16 candidatos, debido a su relacionamiento con partidos políticos tradicionales, clanes políticos, o por ejercicios previos como servidores públicos (Programa Matriz de Acuerdos de Paz: Iniciativa Barómetro et al., 2022), siendo una situación contradictoria, respecto a escoger personas con trayectoria en liderazgo social.

Igualmente, el CINEP/PPP-CERAC (2022), indica que si bien la expedición del marco normativo fue importante para la implementación efectiva de las CTEP, se identificaron falencias en las garantías de participación, como por ejemplo, requisitos adicionales para la postulación de candidatos con temporalidades que no tuvieron en cuenta las particularidades de las regiones; que el Decreto 107 de 2021 estableció la figura de silla vacía cuando se comprueba que un candidato electo no cumple con requisitos previos, lo que implica la privación de representación de una región; y que no se evidenciaron aspectos concernientes al fortalecimiento de las organizaciones sociales en los territorios, de cara a su participación en las CTEP.

Sobre este punto, se debe decir, además, que si bien es un avance tener representantes en estas 16 circunscripciones que permitan reivindicar a los territorios más afectados por la violencia, también es cierto que el trabajo debe seguirse fortaleciendo. No solo por lo evidenciado anteriormente, sino, también, por la baja inclusión del enfoque de género y étnico en la elección de las CTEP. De acuerdo con el Instituto Kroc (2022), de 16 personas candidatas, solo hubo tres mujeres (ninguna postulada por algún colectivo de mujeres), y únicamente la organización “Narrar para Vivir” obtuvo curul en Montes de María. Y en cuanto al enfoque étnico, el Informe resalta que solo se eligieron tres hombres afrodescendientes, de los cuales dos fueron postulados por Consejos Comunitarios del Chocó y Pacífico Medio, mientras que ninguna de las candidaturas de los resguardos indígenas obtuvo curul.

A pesar de lo anterior, lo dicho hasta ahora es relevante para la coyuntura que vive actualmente el país, relativa a la elección y nueva composición del Congreso y la Presidencia de la República. Pues para este cuerpo colegiado se eligieron 108 senadores, incluidos 5 del Partido Comunes, y 186 representantes a la Cámara, contando con las 16 CTEP, y en el que se presentó un aumento del 30% (83 mujeres) de la participación electoral de las mujeres. Asimismo, se evidenció el liderazgo del Pacto Histórico, y el debilitamiento de partidos como Cambio Radical, el Partido de la U, y el Centro Democrático (Programa Matriz de Acuerdos de Paz: Iniciativa Barómetro et al., 2022).

Finalmente, respecto a la Presidencia de la República, se debe indicar que es la primera vez que en Colombia se elige un gobierno de izquierda, en cabeza de Gustavo Petro, y Francia Márquez como la primera vicepresidenta negra y feminista, lo cual marca un hito para la historia y el sistema

político colombiano, y por ende, para la apertura democrática de la cual se habla en el AP y justamente, en el Punto 2.

1.2 ESTATUTO DE OPOSICIÓN

Tal como se indicó anteriormente, el Punto 2 permitió reconocer el carácter político del conflicto, y por tanto, la necesidad de aperturar el sistema para que nuevas fuerzas pudieran entrar en la escena política, sin la utilización de la violencia.

En este contexto, se acordó la creación del Estatuto de la Oposición, con el objetivo de fortalecer las garantías para las fuerzas políticas opositoras, y cumplir con la alternancia del poder. Además, se dijo que sería creado con la participación de todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, para precisamente, fortalecer la participación de las voces contradictoras al gobierno (Cancillería, 2016), tanto nacional, como autoridades departamentales y municipales.

Así,

Para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición, las garantías estarán consignadas en un estatuto para su ejercicio, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares es necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino, también, promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2016, p. 25)

Si bien se ha avanzado en la creación de este estatuto con medidas de enfoque de género, y se han gestado las declaraciones políticas necesarias a nivel territorial para cumplir con esta medida, el Instituto Kroc (2022), exhorta la implementación del Estatuto de la Oposición, específicamente, en lo que respecta al espectro electromagnético y asignación de presupuesto para el acceso a medios de comunicación.

En otras palabras, se busca que, a través del Estatuto, los partidos y movimientos declarados en oposición puedan acceder a los medios de comunicación social del Estado, que hacen uso del espectro electromagnético, para que la autoridad electoral pueda asignar espacios adicionales en dichos medios, y en donde, además, las organizaciones políticas garanticen la participación paritaria (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018).

Ahora bien, respecto a su aplicación en el Valle del Cauca, el Partido Verde y el Partido

Colombia Justa Libres, fueron los únicos que se declararon como independientes (Consejo Nacional Electoral, n.d.), mientras que 7 restantes se declararon partidos de gobierno.

Igualmente, es interesante analizar que, debido a las disposiciones que brinda el Estatuto de la Oposición, le permitió a Griselda Janeth Restrepo, ocupar una curul en la Asamblea Departamental, y declararse en oposición a la administración de Clara Luz Roldán, tras haber obtenido la segunda votación más alta en las justas electorales por la gobernación.

1.3 NÚMERO DE PARTIDOS POLÍTICOS Y/O MOVIMIENTOS POLÍTICOS CREADOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ

Debido a las disposiciones del Punto 2, en lo referente a la necesidad de aperturar el sistema político democrático que permitiese a nuevas fuerzas políticas participar de las contiendas electorales, es que posterior a la firma del AP se han creado 12 partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica.

TABLA 2
LISTA DE PARTIDOS-MOVIMIENTOS POLÍTICOS CREADOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ

LISTA DE PARTIDOS Y/O MOVIMIENTOS POLÍTICOS CREADOS DESPUÉS DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ	
ORGANIZACIÓN POLÍTICA	RESOLUCIÓN QUE OTORGA PERSONERÍA JURÍDICA
1. PARTIDO COMUNES	2691 de 2017
2. PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES	3198 de 2018
3. PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE	575 de 2019
4. MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA - A.D.A	1748 de 2019
5. PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD	1291 de 2021
6. MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	7417 de 2021
7. PARTIDO NUEVO LIBERALISMO	7822 de 2021
8. MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL	8804 de 2021
9. PARTIDO VERDE OXÍGENO	8805 de 2021
10. PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO	*no hay registro
11. PARTIDO LIGA GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN-LIGA	3750 de 2022
12. PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO	4033 de 2022

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del CNE (n.d).

1.4 CIRCUNSCRIPCIONES TRANSITORIAS ESPECIALES DE PAZ EN EL VALLE DEL CAUCA

En el Punto 2.3.6 del AP, denominado “Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”, surge por primera vez el concepto de Circunscripción Transitoria Especial de Paz, producto de la necesidad de darle voz a las víctimas del conflicto armado y reducir la brecha asociada al acceso a escenarios de toma de decisiones.

De esta manera, se estableció que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el mismo, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también, como una medida de reparación y de construcción de la paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 CTEP para la elección de 16 Representantes a la Cámara, de manera temporal y por 2 períodos electorales (Acuerdo de Paz, 2016).

No obstante, solo hasta el año 2021, después de pasar por un arduo debate en el Congreso de la República, a través del Acto Legislativo 02 de 2021, es que se crean las 16 circunscripciones que involucran a 167 municipios, dispuestas para los sectores más afectados por la violencia, en el marco del conflicto armado, permitiendo que las personas reconocidas por el Registro Único de Víctimas, aspiren a ser representantes a la Cámara durante los periodos electorales de 2022-2026 y 2026-2030.

De esta forma, el Consejo Nacional Electoral-CNE dispuso que para las CTEP, podían postularse candidaturas de organizaciones sociales, víctimas, campesinas, de mujeres, así como Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas. Y que sólo población mayor de edad y habitantes de zonas rurales de los municipios que hacen parte las circunscripciones, sin contar con las cabeceras municipales, son quienes pueden votar (CEPDIPO, 2022).De igual forma se destaca que, de acuerdo con lo establecido en el AP, los partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso de la República, no podrán inscribir candidatos ni candidatas para dichas circunscripciones.

Respecto al número y distribución de circunscripciones, la CEPDIPO (2022) señala que en total son 16 CTEP repartidas en todo el territorio nacional, por lo que el Valle del

Cauca se encuentra acogido en la **circunscripción 1 - Alto Patía** con los municipios de **Pradera** y **Florida**, y en la **circunscripción 9 - Pacífico Medio**, con Buenaventura, junto con el Cauca, con los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí.

Recordando lo dicho anteriormente sobre la baja implementación del enfoque de género y étnico en las CTEP, se encontró que para las circunscripciones por las cuales se acoge al departamento, el representante electo por la **circunscripción 1 - Alto Patía** fue Juan Pablo Salazar Rivera de la organización ASOINTEC, y que para la **circunscripción 9 - Pacífico Medio**, aunque fue candidato del Consejo Comunitario del Río Naya, se escogió a señor Orlando Castilla Advíncula (Caribe afirmativo, 2022).

Lo anterior demuestra, entonces, el señalamiento que hace el Instituto Kroc (2022) respecto a las limitaciones de las medidas adoptadas para la inclusión de los enfoque transversales en la elección de las CTEP; así como lo expresado por Caribe afirmativo (2022), respecto a la necesidad de que estas instancias haya un compromiso legislativo que le apunte al reconocimiento de los actores sociales en los territorios, que puedan garantizar el ejercicio pleno de los derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como las mujeres, las cuales, como se sabe, sufrieron de manera diferenciada la violencia en el marco del conflicto.

Las cabezas de lista que se disputaron los escaños a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca fueron 11, de las cuales tres fueron encabezadas por mujeres y ocho por hombres.

De lo anterior, vale la pena indicar que, tal como sucede con la elección de las CTEP, la cuota de género en la lista al Congreso de la República por el Valle del Cauca es baja, al representar apenas el 27% del total de personas electas. Y a pesar de que, el aumento de la participación de las mujeres en las contiendas electorales al Congreso fue de 9,6 puntos porcentuales, mayor que en las elecciones del 2018 (Programa Matriz de Acuerdos de Paz: Iniciativa Barómetro et al., 2022), se sigue evidenciando brechas de género en lo que respecta a la participación en política por parte de las mujeres.

Finalmente, es importante indicar que a nivel general, y en cuanto al cumplimiento de las 130 disposiciones que tiene el AP en temas de género, el Instituto Kroc (2022) señala que apenas el 12% ha sido completado en su totalidad, mientras que el 17% tiene un nivel de ejecución intermedio, el 52% se encuentra en estado mínimo de avance, y el 19% restante no ha iniciado.

1.5 CUOTAS DE GÉNERO EN LAS LISTAS AL CONGRESO POR EL VALLE DEL CAUCA

TABLA 3
LISTA DE CONGRESISTAS POR EL VALLE DEL CAUCA 2022

LISTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR EL VALLE DEL CAUCA	
NOMBRE CABEZA DE LISTA	PARTIDO POLÍTICO O MOVIMIENTO
GLORIA PEÑA	Coalición Centro Esperanza
ADRIANA GÓMEZ	Partido Liberal Colombiano
JUANA CATAÑO	Cambio Radical
JOSÉ TEJADA	Coalición Pacto Histórico
DUVALIER SÁNCHEZ	Partido Alianza Verde
JESÚS GALLEGÓ	Coalición MIRA-Colombia Justa Libres
GUSTAVO VÉLEZ	Partido Conservador
LUIS ALBÁN	Partido Comunes
CHRISTIAN GARCÉS	Centro Democrático
JULIÁN LÓPEZ	Partido de La U
DORIAN MARULANDA	El Cambio Soy Yo Movimiento Digital

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de CEPDIPO (2022).

REFERENCIAS

Cancillería. (2016). *ABC DEL ACUERDO FINAL*. Cancillería.
<https://www.cancilleria.gov.co/>

Caribe afirmativo. (2022, marzo 17). *Conclusión de la elección de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz*. Caribe afirmativo.
<https://caribeafirmativo.lgbt/conclusion-de-la-eleccion-de-las-16-circunscripciones-transitorias-especiales-de-paz/>

CINEP/PPP - CERAC. (2022, agosto). *Undécimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia*. Verificación Internacional del Acuerdo de Paz. Retrieved August 29, 2022, from
<https://www.verificacion.cerac.org.co/>

CEPDIPO. (2022). *INFORME: MAPA ELECTORAL 2022*. CEPDIPO, CENTRO DE PENSAMIENTO Y DIÁLOGO POLÍTICO.
<https://cepdipo.org/portfolio/informe-mapa-electoral-2022-3/>

Consejo Nacional Electoral. (n.d.). *ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN*. Consejo Nacional Electoral Colombia. Retrieved August 23, 2022, from
<https://www.cne.gov.co/elecciones/estatuto-de-la-oposicion-en-colombia>

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2016). *Acuerdo Final de 2016*. Función Pública. Retrieved August 18, 2022, from
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79893>

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2018). *Ley 1909 de 2018*. Función Pública.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87302>

Programa Matriz de Acuerdos de Paz: Iniciativa Barómetro, Instituto Kroc, Escuela Keough, & Universidad de Notre Dame. (2022, junio). *Informe Trimestral, Estado Efectivo de la Implementación del Acuerdo Final*. University of Notre Dame.
<https://curate.nd.edu/show/mg74qj76422>



CAPÍTULO 2

VIOLENCIA ELECTORAL EN EL VALLE DEL CAUCA 2010 — 2022.
UNA MIRADA DESDE LA EVOLUCIÓN DEL RIESGO ELECTORAL

**SANTIAGO ÁLVAREZ, CAROLINA ARBOLEDA,
DAVID AGUIÑO, ANDREA FIERRO, CATALINA
GÜIZA, NATALIA GONZÁLEZ, ANDRÉS NEIRA,
NOHRA PALACIOS, ASHLY PAZ, ALEJANDRO
SÁNCHEZ, JACOBO URIBE**

Semillero Awamuy de Comportamiento Político
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Este capítulo tiene como objetivo caracterizar la violencia política y electoral en el departamento del Valle del Cauca entre el 2010 y el 2022. Se utilizó una matriz de datos para leer cualitativamente los cambios en la intensidad del tipo particular de violencia relevante. El producto es un análisis descriptivo de los cambios en la violencia política y electoral en el departamento en una coyuntura especialmente significativa. Los diez años que delimitan el estudio son particularmente complejos porque son considerados como una década de transición entre la guerra y la paz, con el 2016 como el año de inflexión con el plebiscito y la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC-EP.

La unidad de análisis territorial son los 42 municipios que componen el departamento del Valle del Cauca. Se estudia el fenómeno en un lapso de tiempo que cubre tres elecciones de autoridades nacionales: Presidencia, Congreso de la República (realizadas en año par: 2010, 2014, 2018); y tres de autoridades departamentales y municipales: Gobernación, Asamblea Departamental, Alcaldía, y Concejo Municipal (realizadas en año impar: 2011, 2015, 2019).

La caracterización del fenómeno se realiza a partir de los datos sobre riesgo por violencia, producidos por la Misión de Observación Electoral (en adelante MOE), en sus informes periódicos. Adicionalmente, se utilizan datos extraídos de las Revistas Noche y Niebla del Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (en adelante CINEP) para el período estudiado para afinar la descripción de los cambios previamente identificados. Vale la pena indicar, que no se pretende realizar afirmaciones probabilísticas sobre correlaciones entre variables asociadas a la violencia y variables asociadas a la calidad del ejercicio democrático en el período estudiado. La caracterización de las trayectorias de la violencia permite hacer inferencias de naturaleza descriptiva sobre la forma en que esta ha cambiado y sus relaciones con la competencia electoral.

Así pues, se entiende la violencia política

como toda aquella que busca generar obediencia ciudadana (Kalyvas, 2003; Wickman-Crowley, 1990), encontrando en la categoría de violencia, la tipificación de Johan Galtung, que sirve para analizar sucesos que van desde lo general a lo específico. Según este autor, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La primera es aquella que es ejercida por un ser humano sobre otro u otros seres humanos e incluye acciones como el homicidio, las agresiones verbales y gestos violentos. En la segunda, no es tan sencillo identificar quien la ejerce, pero se expresa principalmente a través de la exclusión política, económica y simbólica. Y, por último, la violencia cultural es aquella que es ejercida por la sociedad sobre ella misma (Galtung, 2003). De esta manera, la violencia política puede ser ejercida en cualquiera de estas formas; sin embargo, este apartado se centrará en la violencia directa, ya que está es la única en la que se puede fácilmente identificar un autor o grupo de autores.

En el marco de la violencia política, este capítulo se enfocará en la violencia electoral, entendida como una estrategia utilizada por los actores políticos para influir en el curso y el resultado de las contiendas electorales. Esta implica actos coercitivos, es decir, toda forma de acción o amenaza organizada -sicológica, física y estructural- orientada a intimidar hacer daño o amenazar un "political stakeholder" (votantes, candidatos, observadores, autoridades electorales) antes, durante y después de una elección, con miras a determinar, demorar o influir de alguna manera en el proceso electoral (Daxecker, 2020; IFF, 2011).

Existen diferentes manifestaciones de violencia electoral que pueden estar relacionadas con las múltiples formas de violencia organizada, producto del narcotráfico y del conflicto interno armado en Colombia. Por esta razón, se delimita el concepto de violencia electoral para el estudio de los últimos diez años en el Valle del Cauca. En términos operativos, se incluye en la base de datos utilizada, cualquier acto de violencia directa contra candidatos, líderes de partidos políticos, funcionarios públicos electos o no electos, y servidores públicos. También se consideró en la violencia electoral, cualquier acto de violencia directa cometido contra cualquier individuo el día de las elecciones, o en el periodo de entre tres meses anteriores a la primera elección del año, y la última elección de ese año contra líderes sociales.

A continuación, se describen los datos utilizados por la MOE en la construcción de sus mapas de riesgo, y el por qué resultan útiles para exponer los cambios en la intensidad, la frecuencia y la distribución

geográfica de la violencia electoral en el Valle del Cauca. El capítulo inicialmente usará estos datos para caracterizar las tendencias generales de la distribución geográfica del riesgo por violencia asociado a elecciones en el departamento entre 2010 y 2022. Posteriormente, se revisan los itinerarios de 12 municipios en los que se concentra el riesgo por violencia, con miras a analizar el efecto del proceso de paz sobre la violencia electoral. Finalmente, se realizará una caracterización sincrónica de casos de violencia electoral utilizando datos extraídos de las Revistas Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP.

2.1 LA MEDICIÓN DEL RIESGO POR VIOLENCIA EN LAS ELECCIONES

Trabajar con la información producida por la MOE, es pertinente en virtud de la amplitud y diversidad de datos que agrega, así como por la confiabilidad de sus fuentes. Desde 2007, el Grupo Técnico de Mapas de Riesgo Electoral de esta instancia, desarrolló una metodología de análisis que pondera los datos históricos en cada elección para poder distinguir estadísticamente aquellos lugares en los que existe la probabilidad de que se estén presentando manipulaciones indebidas al elector o al material electoral. Los resultados se agregan al nivel municipal para producir análisis que permitan distinguir aquellos municipios que estaban en riesgo medio, riesgo alto o riesgo extremo.¹

El análisis del riesgo electoral se construye a partir de variables pasivas y activas. Las primeras incluyen el comportamiento electoral en elecciones pasadas para calcular estadísticamente sus niveles de atipicidad. Se trata de anomalías que por su atipicidad estadística y su recurrencia en el tiempo, permiten sostener que existe una probabilidad considerable de que en un municipio se cometa fraude electoral. Las segundas se utilizan para identificar la existencia de organizaciones criminales cuya presencia en el territorio, pueda suponer una amenaza para la adecuada, libre y transparente expresión del juicio ciudadano que debe tener parte durante las elecciones. Las variables activas o variables de riesgo por violencia, son las que se analizan en este capítulo.

La batería de indicadores para el análisis del riesgo por violencia, pretende dar cuenta de

las diferentes dinámicas de violencia que vive la sociedad colombiana, que no están solamente en función del proceso electoral, pero que inevitablemente lo afectan. La batería completa de variables usada desde 2007, mide la presencia de grupos armados ilegales, sus acciones unilaterales, el desplazamiento forzado, las violaciones a la libertad de prensa, y las víctimas de violencia política.

La presencia de grupos armados ilegales es especialmente relevante para el análisis diacrónico del comportamiento de la violencia electoral en el Valle del Cauca, pues al revisar los 7 informes producidos por la MOE en la década en mención, es posible, en primera instancia, identificar los cambios en los actores violentos que hacen presencia en el departamento. Para 2022, la complejidad de la tipología de las estructuras criminales de distinto tipo es evidente. En el informe se monitorea la presencia de Grupos Armados Ilegales (GAI), Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), el ELN, las disidencias de las FARC, y la organización “Los Pelusos”.

Durante buena parte de la década, el monitoreo de la presencia se realizó a partir de la base de acciones unilaterales y combates del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, (en adelante CERAC). Se consideró que un grupo armado hacía presencia si realiza actos violentos con una finalidad política, independientemente de su intensidad, en un municipio (MOE, 2011 y 2015). En 2018 se modificaron las variables con miras a distinguir la presencia en el territorio de las acciones unilaterales. Las primeras se consideraron de carácter dicotómico (1= hay presencia y 0= no presencia) y se les asignó un nivel de riesgo medio. El nivel de riesgo de las acciones unilaterales pasó a depender de su intensidad. El cambio no alteró significativamente los resultados.

Aunque inicialmente la caracterización de la presencia se complementó con un análisis de las estrategias de injerencia del actor armado (MOE, 2011), realizado por la Corporación Nuevo Arcoiris, este no se volvió a realizar en el período estudiado. Desde 2015, los datos agregados en las bases de organizaciones aliadas en la medición del riesgo se complementaron con información aportada por las 35 plataformas regionales, por medio de la presencia de la MOE en distintos departamentos.

En las últimas dos elecciones consideradas, las locales de 2019 y las legislativas de 2022, se utilizó como fuente de información el monitor de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Esta base registra

1. Más recientemente la MOE y el Semillero Awamuy de Comportamiento Político de la PUJ Cali desarrollaron una metodología para evaluar el nivel de riesgo en los municipios al nivel del puesto de votación. Esto permitió identificar, en la ciudad de Cali, los lugares donde se concentraba el riesgo en función de las variables pasivas y activas. Para la medición del riesgo por violencia se optó por analizar la presencia de grupos delictivos organizados, entendiendo que su presencia y su acción continuada sobre el territorio pueden tener un efecto sobre el comportamiento electoral de las personas que habitan estos espacios.

hechos violentos en el país a partir de reportes que hace el Departamento de Seguridad y Salvaguardia de la ONU con base en información recopilada por el sistema de Naciones Unidas en Colombia, así como por reportes de fuentes abiertas. Para 2022, la información se contrastó con información recolectada a través de grupos focales coordinados por las regionales en distintas partes del país.

El reporte de **violaciones a la libertad de prensa** es elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) a partir de la información que publica desde 2006. Los reportes utilizan la información disponible en el año inmediatamente anterior a las elecciones. En los informes de la MOE publicados entre 2011 y 2018, se cita como fuente la red de alerta y protección de periodistas de la FLIP. En 2018, se incluyó un análisis de 8 casos de desequilibrio en el cubrimiento periodístico por posibles abusos en publicidad oficial. Buenaventura fue una de las ciudades incluidas en este estudio.

Para evaluar el riesgo por **desplazamiento forzado** se combinan datos de agencias oficiales sobre víctimas individuales de desplazamiento y la información que compila la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). A partir de allí, se construye una tasa por habitantes que permite evaluar la intensidad del riesgo.

En las dos primeras elecciones consideradas en este análisis, los datos oficiales fueron producidos por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. A partir de 2014, la información oficial considerada es aquella producida por la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV).

Finalmente, la MOE mide en sus mapas de riesgo la variable **violencia política**, a partir del registro de los hechos de violencia contra candidatos y servidores públicos, cuya actividad está relacionada con el proceso electoral. Entre los hechos considerados se incluye la amenaza, el asesinato, el atentado, el intento de secuestro y el secuestro contra candidatos, funcionarios públicos electos o directivos de partidos y movimientos políticos.

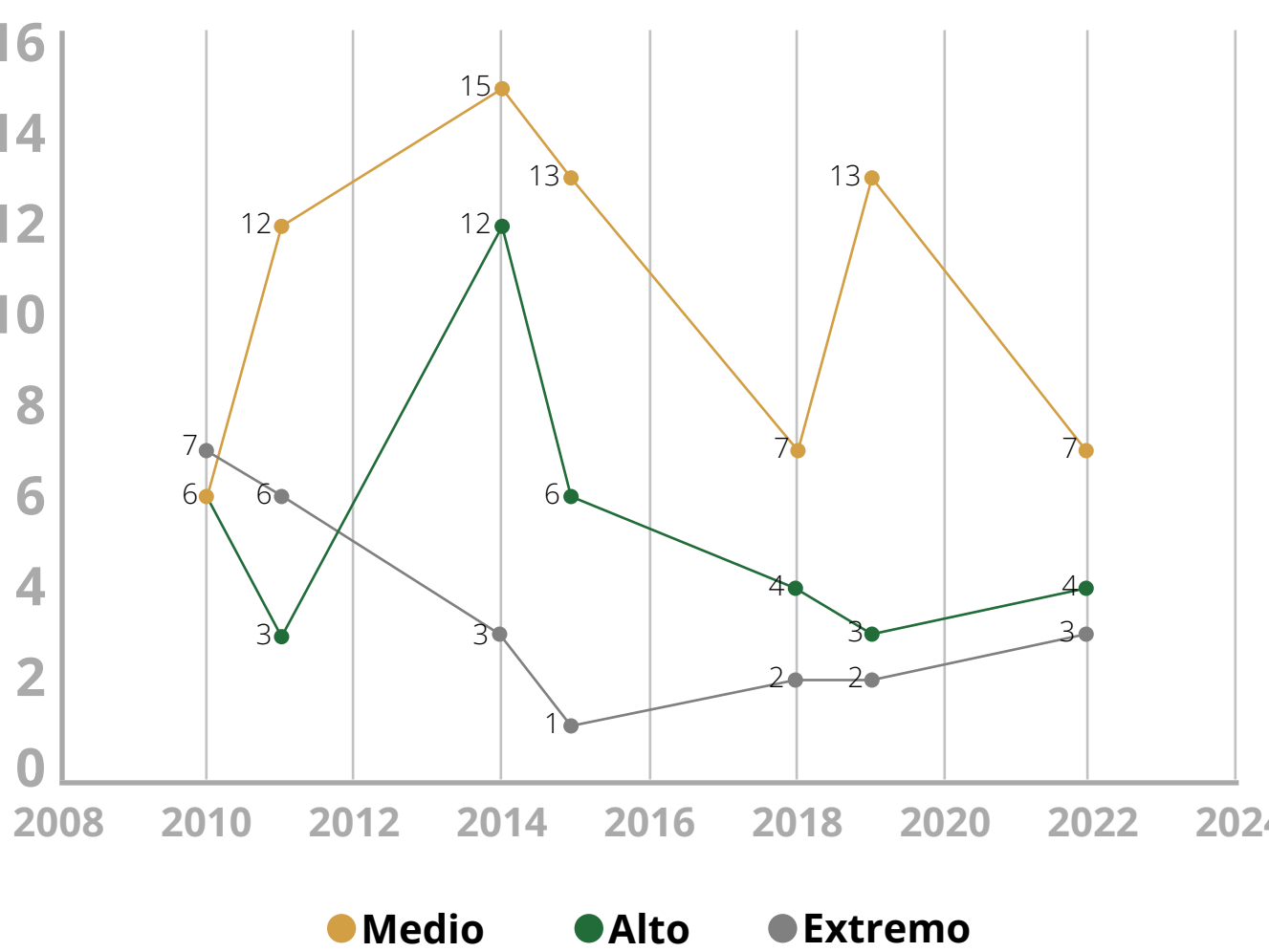
Desde mediados de la década, el análisis y la recolección de información está a cargo del Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE, y a partir del 2016, la medición incluye violencia contra líderes sociales, incluido el monitoreo de distintas formas de violencia en contra de líderes sociales y miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC).

La base de datos recurre a tres fuentes principales. En primer lugar, se hace seguimiento a 365 sitios web, 59 revistas mensuales, 102 periódicos impresos de todo el país, 83 emisoras nacionales y regionales, y 37 canales de televisión (nacionales, regionales e internacionales). La información recolectada es compartida con distintos actores de la sociedad civil y agencias estatales para garantizar un proceso de contraste. En segundo lugar, se utiliza la Red de Observación Electoral de la MOE, compuesta por 35 organizaciones regionales, para adquirir información sobre hechos de violencia política. Desde 2019, finalmente, el análisis del riesgo por violencia política ha podido ser complementado con una metodología de investigación-acción participativa a través de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (MOE, 2019).

2.2 TENDENCIAS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN DEL RIESGO ELECTORAL POR VIOLENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA.

A grandes rasgos, entre 2010 y 2022, el número de municipios con algún nivel de riesgo por violencia fluctuó de manera significativa. Entre el 2010 y el 2014 aumentó notablemente, al pasar de 19 a 30 municipios, para luego descender a 20 en 2015, y 13 en 2018. En el 2019 se evidenciaron 18 municipios en riesgo por violencia, lo que encendió las alertas de la MOE ante la posibilidad de un aumento en la violencia electoral. Sin embargo, para 2022, solo 14 municipios volvieron a estar en riesgo.

FIGURA 1
MUNICIPIOS EN RIESGO POR VIOLENCIA E INTENSIDAD DEL RIESGO 2010 – 2022



Nota. La 1 figura muestra la cantidad de municipios en riesgo por violencia, e Intensidad del riesgo en el periodo 2010-2022. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la MOE (2022).

La MOE clasifica el riesgo en tres categorías: medio, alto y extremo. En el caso de los municipios con un nivel de riesgo medio, se observa un aumento entre 2010 y 2014 al pasar de 6 municipios en 2010, a 12 en 2011, y a 15 en 2014. En 2015, la cantidad de municipios en riesgo disminuyó a 13, y en 2018 a 7. Finalmente, en 2019 aumentó a 13 municipios en riesgo, para luego disminuir a 7 en 2022.

En cuanto a los municipios que presentaron un nivel de riesgo alto, esta cantidad evidenció un patrón inverso, pues disminuyó entre 2010 y 2011, pasando de 6 a 3 municipios. En 2014 hubo un aumento a 12 municipios para después presentar una disminución entre 2015 y 2019, al pasar de 6 en 2015 a 4 en 2018, y finalmente a 3 municipios en 2019. En 2022, se presentó un leve aumento a 4 municipios. En aquellos que tuvieron un nivel de riesgo extremo, se observó una disminución entre 2010 y 2015 al pasar de 7 municipios en 2010 a 6 en 2011, luego a 3 en 2014, y finalmente a 1 en 2015. En 2018 y 2019, la cantidad de municipalidades en riesgo permaneció estable con 2, mientras que en 2022 aumentó a 3 municipios.

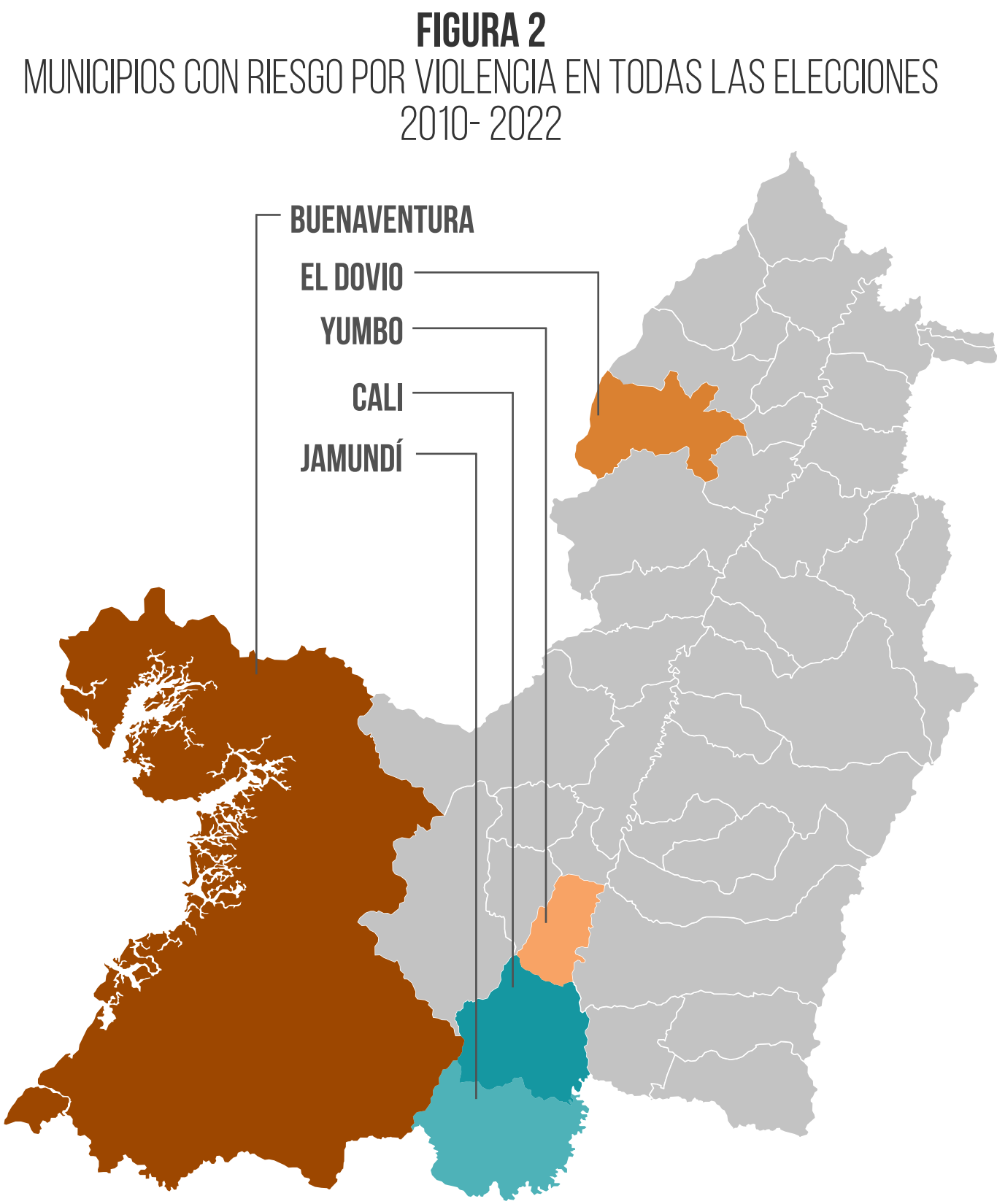
Es importante señalar que de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, solo Ginebra, La Unión y Vijes no estuvieron en riesgo por violencia en el periodo de tiempo analizado. La diversidad de situaciones que generaron riesgo por violencia asociada a las elecciones en la región, da cuenta de los múltiples actores y procesos a los que se encuentra asociada.

Hubo 10 municipios que presentaron riesgo por violencia solamente en uno de los años electorales considerados. Estos son Andalucía (2022) con riesgo medio; Ansermanuevo (2010) con riesgo alto; Argelia (2014) con riesgo medio; El Águila (2010) con riesgo medio; La Cumbre (2014) con riesgo medio; Restrepo (2014) con riesgo alto; Toro (2019) con riesgo medio; Ulloa (2014) con riesgo alto; Versalles (2019) con riesgo extremo; y Yotoco (2011) con riesgo medio. Aunque en estos municipios se pudo evidenciar violencia electoral en el período en cuestión, esta se asocia a episodios que deberían estudiarse en clave sincrónica.

Los municipios que han mantenido algún nivel de riesgo por violencia en todo el periodo son Buenaventura, Cali, El Dovio, Jamundí y Yumbo. De estos, Buenaventura es el más preocupante debido a que en todos los años presentó un nivel de riesgo extremo. Cali, por su parte, pasó de tener un nivel de riesgo extremo entre 2010 y 2014, a tener riesgo medio en 2015, para después volver a tener riesgo extremo en 2018,

riesgo alto en 2019 y extremo en 2022.

El Dovio pasó de riesgo medio en 2010 a riesgo extremo en 2011, y luego volvió a tener un riesgo medio en 2014 y 2015. En 2018, el riesgo por violencia volvió a ser alto y luego medio en 2019 y 2022. Jamundí tuvo un nivel de riesgo medio por violencia en 2010 y 2011 y luego alto en 2014; para luego volver a tener riesgo medio en 2015. En 2018, el riesgo volvió a ser alto y se mantuvo así en 2019 y 2022. Finalmente, Yumbo tuvo un nivel de riesgo extremo en 2010 y 2011. En 2014 pasó a ser medio, y en 2015 tuvo un riesgo alto. En 2018 volvió a ser medio y continuó con ese mismo nivel en 2019 y 2022.



Nota. La figura 2 evidencia los municipios con riesgo por violencia en las elecciones en el periodo 2010-2022. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la MOE (2022).

2.3 COINCIDENCIA DEL RIESGO POR VIOLENCIA Y EL RIESGO POR FRAUDE EN LAS ELECCIONES RECIENTES EN EL VALLE DEL CAUCA.

Durante el período estudiado, 25 municipios (59%) presentan afectación por la coincidencia de riesgo electoral y riesgo por violencia. Estos son: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Buenaventura, Caicedonia, Cali, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Guacarí, Jamundí, Palmira, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Yumbo, La Victoria, Obando y Tuluá. Aunque todos presentan riesgo electoral por la coincidencia de violencia y factores electorales, la intensidad de este riesgo varía significativamente de una elección a otra.

A pesar de esta oscilación, es posible agrupar o categorizar los municipios de acuerdo con la intensidad del riesgo, es decir, si este es medio, alto o extremo, así

como los años que presenta cierta intensidad u otra.

Un primer grupo lo integran aquellos municipios que presentan solo riesgo con intensidad media, y solo en un año de todos los siete años de estudio. Estos son la Victoria en el 2015, El Águila en el 2010, Argelia en el 2014 y Obando en el 2019. Los cuatro municipios pertenecen a la subregión norte del Valle.

El segundo grupo lo integran aquellos municipios que presentan solo intensidad media, y en dos años diferentes. Estos dos son El Cerrito en el 2011 y en el 2019, Guacarí en el 2010 y en el 2014, y San Pedro en el 2010 y el 2015. Los dos primeros municipios pertenecen a la subregión centro, y el segundo a la subregión sur. Los cuatro representan el 16% del total de municipios en riesgo, y aunque la intensidad media solo se presenta en dos años diferentes y no consecutivos, para cada uno de estos municipios, son los únicos en los cuales es posible evidenciar la ausencia de oscilaciones respecto a la intensidad a través de la época estudiada.

En el resto de los municipios que presentan en algún momento una intensidad media a través de la década es posible notar oscilaciones entre alto y medio y entre medio y extremo. Jamundí, Tuluá, Caicedonia y Dagua son los cuatro municipios que presentan un año en intensidad media y un año en intensidad alta, siendo así, el tercer grupo de análisis. Tanto Caicedonia como Jamundí experimentaron intensidad media en el 2011 y después alta en el 2019, lo cual quiere decir que en ambos casos la menor intensidad precedió la mayor intensidad, mientras que en el caso de Tuluá y Dagua se dio el fenómeno contrario. Tuluá presentó intensidad alta en el 2011 y media en el 2019, mientras que Dagua presentó intensidad alta en el 2011 y media en el 2015. Jamundí y Dagua pertenecen a la subregión sur, mientras que Tuluá y Caicedonia a la Subregión Centro. Los cuatro representan un 16% del total de los municipios en riesgo, y se considera importante destacarlos en tanto hay una presencia recurrente de violencia electoral.

Palmira es el único municipio que presenta intensidad media un año e intensidad alta dos años. El riesgo por violencia y fraude tiene una intensidad alta en el año 2011, una intensidad media en el año 2015, y de nuevo una intensidad alta en el año 2019. Cartago es otro caso particular, pues es el único municipio que oscila entre alto y medio, manteniendo la primera intensidad durante tres años y la segunda, alto en el 2011, medio en el 2014, alto en el 2015 y en el

2018. Cartago presenta una característica especial que no se había evidenciado hasta el momento, relativo al riesgo por coincidencia de factores electorales y violentos se presenta por tres años consecutivos. Debido a que Palmira y Cartago son los únicos casos que obedecen a características particulares, cada uno será tratado como un cuarto y quinto grupo respectivamente. Palmira pertenece a la subregión sur, mientras que Cartago pertenece a la subregión norte.

Un sexto grupo se encuentra compuesto por aquellos municipios que presentan en un año durante la década riesgo medio y en otro año riesgo extremo. Estos son Ansermanuevo, que presenta riesgo extremo en el 2010 y riesgo medio en el 2014; El Cairo, que presenta riesgo medio en el 2014 y extremo en el 2018; y Yumbo que presenta riesgo extremo en el 2011 y medio en el 2019. El primero y el segundo pertenecen a la subregión norte, y el tercero a la subregión sur, y representan el 12% del total de los municipios en riesgo. Mientras que Ansermanuevo y Yumbo presentan un año riesgo extremo, y en otro año riesgo medio de forma no consecutiva, el Cairo presenta riesgo medio y después extremo de forma no consecutiva.

Un grupo adicional lo componen los municipios en donde el riesgo por violencia y fraude son constantes en el período estudiado. Cali, por ejemplo, tiene un itinerario particularmente alarmante dado que es el único municipio que presenta riesgo extremo en el 2011, medio en el 2015, extremo en el 2018 y alto en el 2019. El Dovio, por su parte, es el único municipio que presenta riesgo medio en el 2010, extremo en el 2011, medio en el 2014, alto en el 2015, alto en el 2018 y medio en el 2019. El caso de El Dovio es significativo dado que el municipio presenta riesgo en todos los años de estudio de forma consecutiva, excepto en el 2022. El grupo lo completaría Buenaventura, el único municipio que presenta riesgo extremo en cuatro ocasiones.

Finalmente, se pudo identificar municipios que experimentaron picos violentos y atipicidades importantes en el comportamiento electoral en coyunturas específicas, pero luego dejaron de estar en riesgo según la MOE. La victoria, Alcalá y Trujillo presentaron una vez riesgo alto o extremo entre 2010 y 2022. La Victoria en el 2015, Alcalá en el 2019 y Trujillo en el 2010. Los primeros dos pertenecen a la subregión norte, mientras que el tercero pertenece a la subregión centro. Sevilla, por su parte, es el único municipio que experimenta riesgo solo una vez en el año, y de intensidad extrema, en 2011.

A partir de lo dicho, es posible afirmar que la mayoría de municipios presenta por lo menos una vez riesgo medio por fraude, y violencia durante los años de estudio. De hecho, el 80% presenta en algún momento riesgo medio, el 44% presenta riesgo alto, y solo un 20% presenta riesgo extremo. De aquellos que no presentan riesgo medio en algún momento, un 12% presenta solo riesgo alto, y un 8% presenta solo riesgo extremo. El Dovio es el único municipio que presenta en tres ocasiones riesgo medio, y es, por tanto, el municipio con más intensidad durante la década. Cartago es único que en los siete años presenta tres veces riesgo alto, siendo el que más presenta esta intensidad durante la época de estudio. Y Buenaventura es el único municipio que presenta riesgo extremo cuatro años diferentes, siendo el que representa más intensidad durante el periodo.

En el 2018, por su parte, es posible evidenciar el mayor porcentaje de municipios en riesgo extremo por coincidencia de fraude y violencia con respecto al total de municipios en riesgo ese año (66%). Sin embargo, el 2011 es el año en el que se presenta la mayor cantidad de casos de riesgo extremo durante los años estudiados (5 municipios). Por último, el mayor porcentaje de municipios en riesgo alto con respecto al total de municipios en riesgo en un año particular, es el 2019 (53%), pues hubo 7 municipios en el que se presentaron riesgo por fraude y violencia en un año particular.

2.4 EL ANTES Y EL DESPUÉS DEL PROCESO DE PAZ. QUÉ PARECE DECIRNOS EL CAMBIO EN LA INTENSIDAD DEL RIESGO POR VIOLENCIA ASOCIADO A ELECCIONES

Con el propósito de poner punto final a las dinámicas de violencia histórica en Colombia, el gobierno Nacional, encabezado por Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, establecieron en 2012 diálogos en la Habana. Después de 4 años en proceso de negociación, se firmó el Acuerdo Final de Paz, el cual sentó bases para los arreglos institucionales que buscarían el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad del Estado, y la no repetición en la reproducción de estructuras violentas que durante décadas han afectado a las zonas más vulnerables del territorio. De esta forma, puntos del AP como el 1 que habla sobre Reforma Rural Integral y el 2, sobre participación política como apertura democrática, establecen unas pautas de reparación a estos territorios históricamente

golpeados por la violencia. Si bien la firma del AP trajo consigo una reducción generalizada de las dinámicas violentas, este derivó en una reconfiguración de nuevos actores armados y contextos violentos.

El Acuerdo estableció mecanismos inéditos de planificación y gestión como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se concibieron como pilares de una política de gobernanza multinivel que buscaba impedir el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales como consecuencia de los vacíos de poder dejados por las FARC. Los PDET se entendieron como instrumentos para la creación de condiciones de bienestar para la población rural. Adicionalmente, el Acuerdo buscó garantizar la mejora en la representación política de estos territorios. El punto 2.3.6 del AP, busca garantizar la integración, inclusión y representación óptima de las poblaciones víctimas, por medio de la adhesión de 16 curules más en la Cámara de Representantes, como las CTEP.

Además, el AP buscó garantizar unas nuevas reglas de juego para el funcionamiento de la democracia y la promoción de la estatalidad en Colombia, que necesariamente redundaría en la reducción de la violencia electoral. Se intenta “recuperar” por intermediación de los PDET, los espacios dejados por el actor violento, al tiempo que se desarrolla una reconfiguración de actores que compiten por cooptar los territorios y aprovechar las oportunidades que ofrecen distintas economías ilícitas. Al analizar los cambios en el riesgo electoral por violencia, se busca evaluar en qué medida las apuestas públicas asociadas a la construcción de una paz estable y duradera se materializaron en una reducción de la violencia asociada a las elecciones en el Valle del Cauca.

En primer lugar, interesa exponer las variaciones de los niveles de riesgo dentro del departamento después de la firma del AP. Las cifras permiten afirmar que existe una variación del comportamiento de los actores dependiendo del tipo de elección. En segundo lugar, se seleccionaron los municipios que mantienen un riesgo por violencia en el tiempo (aun después del Acuerdo), con miras a destacar dónde las promesas de la paz no parecen haberse cumplido.

Pese a que es evidente una disminución en el número de municipios en riesgo entre 2015 y 2018, pasando de 13 a 7 municipios en riesgo medio y de 6 a 4 municipios en riesgo alto, conviene proceder con cautela. Es claro que el riesgo por violencia varía significativamente dependiendo del tipo de

elección. Debido a que en una elección local hay intereses más cercanos en vista a la autonomía de estos, en comparación a un congresista o un presidente, los niveles de riesgo aumentan en una elección local y disminuyen o se mantienen en una elección nacional. Esta afirmación es consecuente con los datos y la teoría referida.

Así, al comparar elecciones locales se aprecia que para el 2019 existió un repunte de municipios con riesgo medio, (de 7 a 13), una reducción marginal de municipios con riesgo alto de 4 a 3, y la continuidad de dos municipios en riesgo extremo. Empero, si se compara las elecciones nacionales, de congreso y presidenciales, se evidencia una reducción significativa del riesgo por violencia en todos los municipios. En cuanto al riesgo medio, se pasó de 15 municipios en 2014 a 7 en 2018. En riesgo alto por violencia se pasó de 12 municipios en 2014 a 4 en 2018, y, finalmente, en riesgo extremo el cambio entre 2014 y 2018 fue la disminución de 3 municipios a 2.

Ahora, si se realiza el mismo contraste pero con elecciones locales (2015 y 2019), se evidencia que la disminución del riesgo es mucho más leve. En este orden de ideas, la variable de riesgo medio mantuvo el número de municipios en el período y si bien hubo una disminución en los municipios en riesgo alto -de 6 en 2015 a 3 en 2019- hubo un aumento en los municipios en riesgo extremo por violencia, que de ser solo uno en 2015, pasó a dos en 2019.

TABLA 1
MUNICIPIOS EN RIESGO POR VIOLENCIA EN EL VALLE DEL CAUCA, 2010 – 2022

TABLA CONSOLIDADO VIOLENCIA							
RIESGO	2010	2011	2014	2015	2018	2019	2022
MEDIO	6	12	15	13	7	13	7
ALTO	6	3	12	6	4	3	4
EXTREMO	7	6	3	1	2	2	3

Nota. Fuente:Elaboración propia a partir de datos tomados de la MOE (2022).

Ahora bien, el porcentaje de municipios en riesgo por violencia en el Valle tiende a ser más alto que el de municipios en riesgo por violencia a nivel nacional. En ambos casos, este desciende después del Acuerdo, aunque en el Valle del Cauca, este descenso es menos pronunciado.

Los datos de la MOE permiten identificar municipios del departamento que poseen dinámicas preocupantes, independientemente del Acuerdo, y que se expresan en los niveles de riesgo por violencia. En la tabla 5, se sigue el itinerario del riesgo por violencia en 12 municipios (Bugá, Cali, El Cairo, El Dovio, Buenaventura, Tuluá, Jamundí, Yumbo, Bolívar, Palmira, Florida, El Cerrito y Calima - El Darién) en el periodo 2010-2022.

Bolívar, Palmira, Florida, El Cerrito y Calima - El Darién) en el periodo 2010-2022.

Los municipios pueden clasificarse en 3 grupos; municipios con disminución en intensidad del riesgo por violencia posterior al Acuerdo; municipios con aumento en la intensidad del riesgo por violencia posterior al Acuerdo, y municipios que mantuvieron una intensidad del riesgo por violencia constante antes y después del Acuerdo.

Si bien en este documentos solo se propone una primera caracterización, conviene indicar la relación que sugieren los datos entre el riesgo por violencia, y la ubicación geográfica, los actores armados participantes en la reproducción de la guerra, así como su reconfiguración y la presencia de economías ilícitas. Análisis posteriores permitirían analizar las posibles fallas de los arreglos institucionales que erigió el Acuerdo en los puntos 1, 2, 3 y 4, para hacerle frente al contexto de guerra y los nuevos desafíos para transformar las dinámicas de la violencia.

TABLA 2
CAMBIOS EN EL NIVEL DE RIESGO EN 12 MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA, 2010-2022

TABLA DE FRECUENCIA VIOLENCIA							
MUNICIPIO	2010	2011	2014	2015	2018	2019	2022
BUGA	Extremo	Medio	Medio	Medio	Medio		Alto
CALI	Extremo	Extremo	Extremo	Medio	Extremo	Alto	Extremo
EL CAIRO			Medio		Medio	Medio	
CALIMA- EL DARIÉN			Alto		Medio	Medio	
EL CERRITO		Medio	Medio		Alto	Medio	
EL DOVIO	Medio	Extremo	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio
FLORIDA	Medio	Medio	Alto	Medio		Alto	Alto
JAMUNDÍ	Medio	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto
PALMIRA	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Medio	
TULUÁ	Extremo	Alto	Alto	Medio		Medio	Extremo
YUMBO	Extremo	Extremo	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio
BUENAVENTURA	Extremo	Extremo	Extremo	Extremo	Extremo	Extremo	Extremo
BOLÍVAR		Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto

Extremo Alto Medio

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la MOE (2022).

2.5 MUNICIPIOS CON AUMENTO EN LA INTENSIDAD Y FRECUENCIA RIESGO POR VIOLENCIA POSTERIOR AL ACUERDO FINAL DE PAZ.

Seis municipios en la Tabla 5 se distinguen por el riesgo por violencia asociada a elecciones tras la firma del AP. Claramente hay diferencias que deben explicar sus

trayectorias, pero una característica esencial está relacionada con el aumento de la violencia en las tres elecciones siguientes a la firma del Acuerdo. Estos municipios son Cali, Tuluá, Florida, Jamundí, Buga y Bolívar. Y vale la pena indicar que, la institucionalidad diseñada por el Acuerdo, la desmovilización y la promesa de paz, parecieron tener poco o ningún efecto en la reducción de la violencia electoral.

Cali es un municipio en el que el nivel de riesgo por violencia se mantiene en niveles preocupantes. Al repasar la conducta de riesgo por violencia, es posible ver que esta se sostuvo de 2010 a 2014 en riesgo extremo, y repuntó nuevamente en ese mismo grado tanto en 2018 como en 2022. Solo en 2015 (riesgo medio) y 2019 (riesgo alto) disminuyó el nivel de riesgo por violencia. Al igual que Cali, Tuluá es un municipio que ha alcanzado gran oscilación en su rango de riesgo por violencia, alcanzando niveles extremos. La ciudad del centro del Valle no ha tenido una tendencia clara en su riesgo por violencia durante estos 7 periodos electorales. En las elecciones presidenciales de 2010 exponía un riesgo por violencia extrema que luego bajó a nivel alto para las elecciones locales de 2011 y las nacionales de 2014. Más adelante, durante el periodo 2015-2018, el nivel de riesgo por violencia disminuyó aún más, pero aumentó significativamente para las elecciones de 2022.

Algunas de las similitudes entre estos dos municipios son la alta tasa de homicidios, la presencia en 2022 de diferentes grupos delincuenciales organizados, así como la presencia de grupos armados organizados y disidencias de las FARC (MOE, 2022). En el caso de Cali, la ciudad es epicentro de múltiples economías ilícitas, mientras que Tuluá tuvo presencia histórica de las FARC hasta la firma del AP, y la desaparición de la organización guerrillera sólo tuvo un impacto pasajero sobre la violencia electoral.

Florida y Jamundí, por su parte, son municipios con presencia histórica de la guerrilla en su territorio, por lo que sorprende que su nivel de riesgo por violencia se mantuviera constante. En 2014, así como en 2018 y 2022, el nivel de riesgo por violencia fue alto, mientras en los demás años electorales (2010, 2011 y 2015) presentó un nivel medio. Ambos tuvieron, en 2010, presencia del Bloque Móvil Arturo Ruiz, organizaciones que fueron reemplazadas, en 2019 y 2022, por la organización denominada “Los Pelusos”, El Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC, así como otros grupos delincuenciales organizados. A diferencia de Jamundí, Florida es

considerado un territorio PDET, aunque la implementación del programa debe evaluarse y fortalecerse.

Finalmente, Buga y Bolívar exhiben trayectorias menos claras, si bien caracterizadas por un aumento en el riesgo por violencia asociado a elecciones tras el AP. El primero tuvo riesgo extremo en 2010, medio hasta 2019 y alto en 2022. Bolívar tiene una trayectoria parecida, al tener riesgo alto antes del Acuerdo, en las elecciones de 2015 y después del mismo, en 2022. Este, al igual que Buga, es un municipio caracterizado por un nivel significativo de riesgo por violencia en el marco de las elecciones.

2.6 MUNICIPIOS CON INTENSIDAD Y FRECUENCIA ESTABLES EN SUS NIVELES DE RIESGO POR VIOLENCIA ANTES Y DESPUÉS DEL ACUERDO FINAL DE PAZ

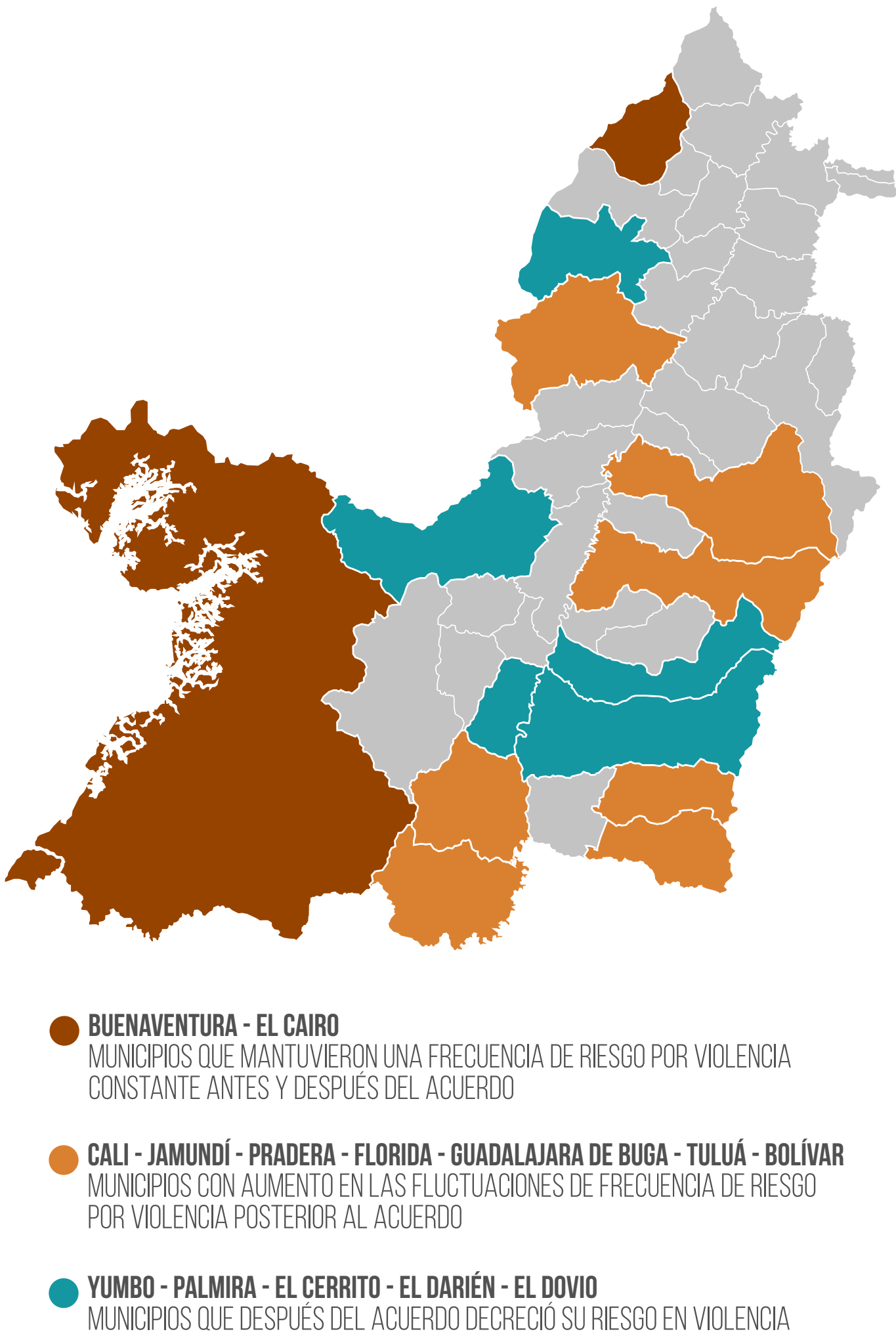
Dos municipios tienen niveles de riesgo por violencia que no se alteraron por la firma del AP: El Cairo, que se mantiene con riesgo medio, y Buenaventura, con un nivel extremo antes y después del Acuerdo. El primero está ubicado en una posición estratégica para diversas economías ilegales. Mientras que en Buenaventura, por su parte, los reportes de la MOE sugieren que la intensificación del conflicto y el desplazamiento forzado masivo, se relaciona con el intento por copar espacios de poder dejados por las FARC-EP (MOE, 2019).

2.7 MUNICIPIOS EN LOS QUE DESPUÉS DEL ACUERDO FINAL DE PAZ DISMINUYÓ LA INTENSIDAD Y LA FRECUENCIA DEL RIESGO POR VIOLENCIA

Finalmente, se evidencia un grupo de municipios en los que el riesgo disminuyó significativamente. Y aunque no se pueden hacer conjeturas sobre las razones que explican este fenómeno, es importante destacar lo ocurrido en Calima-El Darién, El Cerrito, El Dovio, Palmira y Yumbo.

En el siguiente mapa se pueden apreciar las principales tendencias del cambio en la intensidad y la frecuencia del riesgo por violencia asociado a elecciones en el Valle del Cauca, entre 2010 y 2022.

FIGURA 3
INTENSIDAD Y LA FRECUENCIA DEL RIESGO POR VIOLENCIA
EN EL VALLE DEL CAUCA, 2010 - 2022



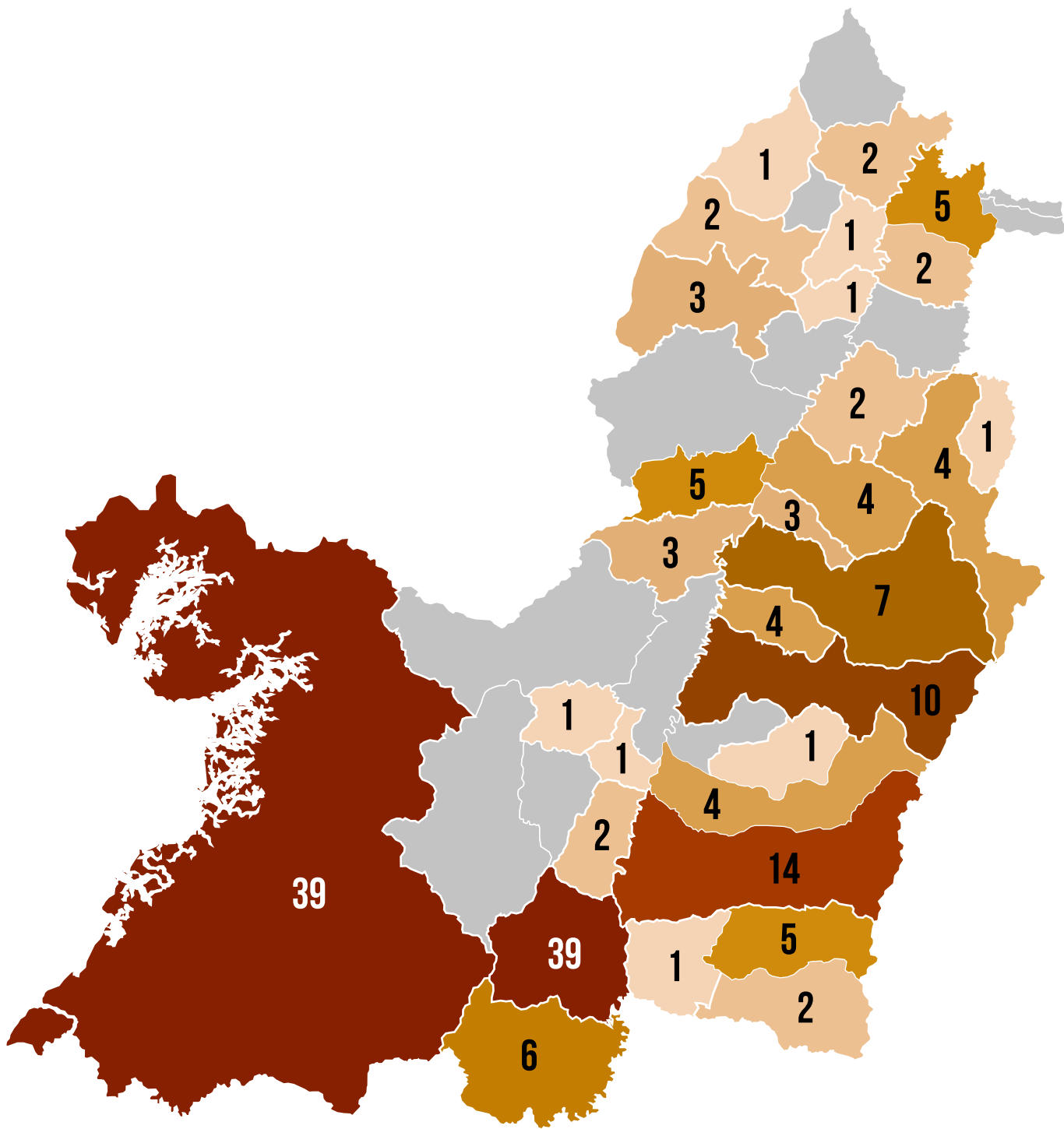
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Misión de Observación Electoral 2010 – 2022.

2.8 UNA MIRADA SINCRÓNICA A CASOS DE VIOLENCIA ELECTORAL EN EL VALLE DEL CAUCA, 2010-2021.

A partir de los datos extraídos de las Revistas Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP, y siguiendo la definición de violencia electoral expuesta al inicio de este capítulo, para el Valle del Cauca se registran 176 casos de violencia electoral entre 2010 y 2021, en los que se registran 433 víctimas.

De los 42 municipios del departamento, 30 municipios presentaron al menos un caso en este periodo de tiempo, representando un 71% del total. Cuatro de estos municipios (Buena Ventura, Buga, Cali y Palmira) concentran más de 10 episodios cada uno, y en conjunto suman más de la mitad de los casos en el departamento. Destacan de manera importante Buena Ventura y Cali como focos de la violencia electoral, puesto que cada uno presenta casi 3 veces la cantidad de casos de Palmira, el siguiente municipio con mayor cantidad. Otros municipios que acumulan 4 o más casos de violencia electoral para el periodo 2010-2021 son Bugalagrande, Cartago, El Cerrito, Florida, Jamundí, Pradera, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Tuluá.

FIGURA 4
CASOS DE VIOLENCIA ELECTORAL POR MUNICIPIO
EN EL VALLE DEL CAUCA, 2010-2021

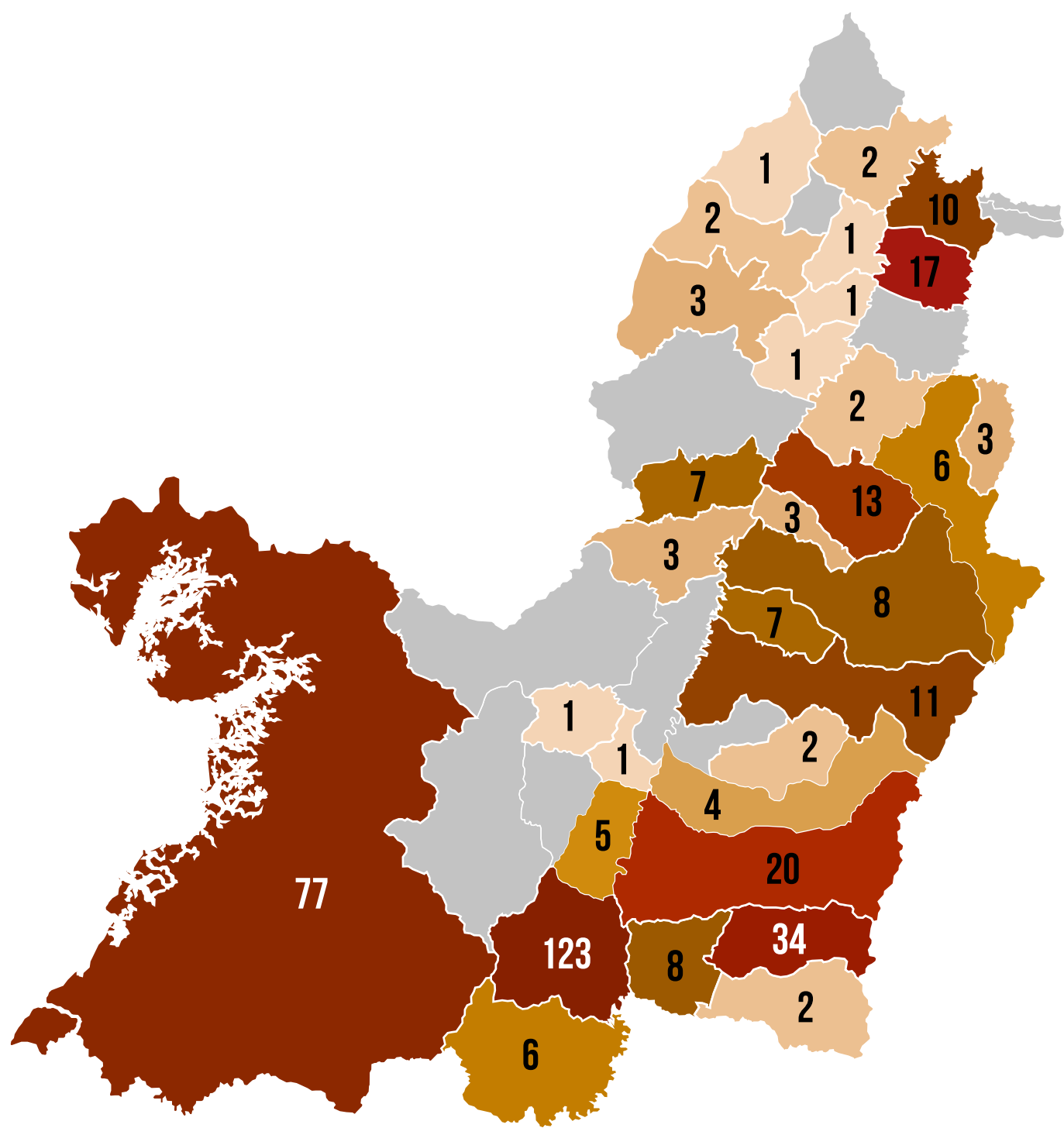


Nota. La figura 4 evidencia la concentración de casos de violencia electoral por municipio en el departamento del Valle del Cauca, en el periodo 2010-2021. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP (2021).

El registro de víctimas de hechos violentos asociado a estos casos permite elaborar una imagen similar. Aunque el panorama coincide a grandes rasgos con el de casos por municipio, existen divergencias relevantes. En primer lugar, aunque Buena Ventura y Cali siguen siendo focos destacados, Cali presenta una mayor cantidad de víctimas que Buena Ventura a pesar que registran la misma cantidad de casos. La explicación para este contraste no es clara, pero es posible que un factor que incide en el dato, sea la mayor presencia de liderazgos colectivos y miembros de cuerpos colegiados en la capital del departamento.

Por otro lado, aunque la diferencia en número de víctimas entre el resto del departamento y los casos de Buena Ventura y Cali es más marcada que la diferencia en casos, existen 7 municipios donde se registraron 10 o más víctimas de violencia electoral. Entre estos municipios, Pradera figura como el tercer municipio con mayor número de víctimas en todo el departamento a pesar de sólo presentar 5 casos. Y los 6 municipios restantes son Buga, Bugalagrande, Cartago, Jamundí, Obando y Palmira.

FIGURA 5
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ELECTORAL POR MUNICIPIO EN EL VALLE DEL CAUCA, 2010-2021

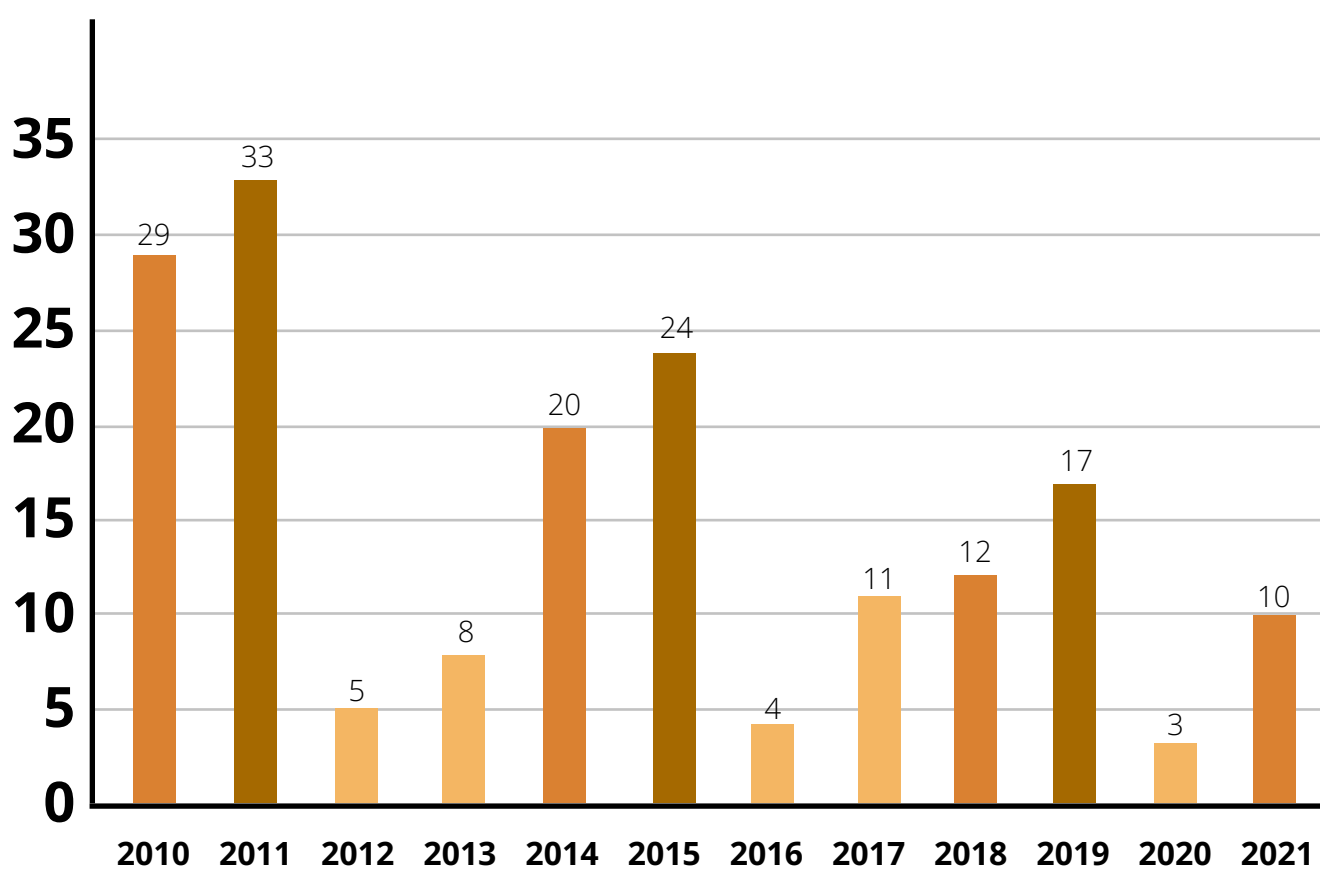


Nota. La figura 5 revela las víctimas de violencia electoral por municipio en el Valle del Cauca en el periodo 2010-2021. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados por la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP (2021).

De lo anterior, se resalta la tendencia al aumento en los casos de violencia electoral en las elecciones locales, respecto a las elecciones presidenciales inmediatamente anteriores. A saber, entre 2010 (29 casos) y 2011 (33 casos), y 2014 (20 casos) y 2015 (24 casos), hubo un aumento de 4 casos. Mientras que de 2018 (12 casos) a 2019 (17 casos) el aumento fue de 5 casos.

Por su parte, los años con menor número de casos corresponden a aquellos inmediatamente después de las elecciones locales. Estos son 2012 (5 casos), 2016 (4 casos) y 2020 (3 casos). Atendiendo a este patrón de aumento en años electorales, pico máximo en elecciones locales y disminución en los años inmediatamente siguientes a época electoral, se puede afirmar que sí existe una disminución en el tiempo de los casos por violencia electoral. Esto se nota al comparar el año 2011 (33 casos) con el año 2019 (17 casos), siendo un posible punto de inflexión la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Sin embargo, es necesario resaltar que el 2017 (11 casos), es el año no electoral con mayor número de casos.

FIGURA 6
CASOS DE VIOLENCIA ELECTORAL EN EL VALLE DEL CAUCA CADA AÑO, 2010-2021

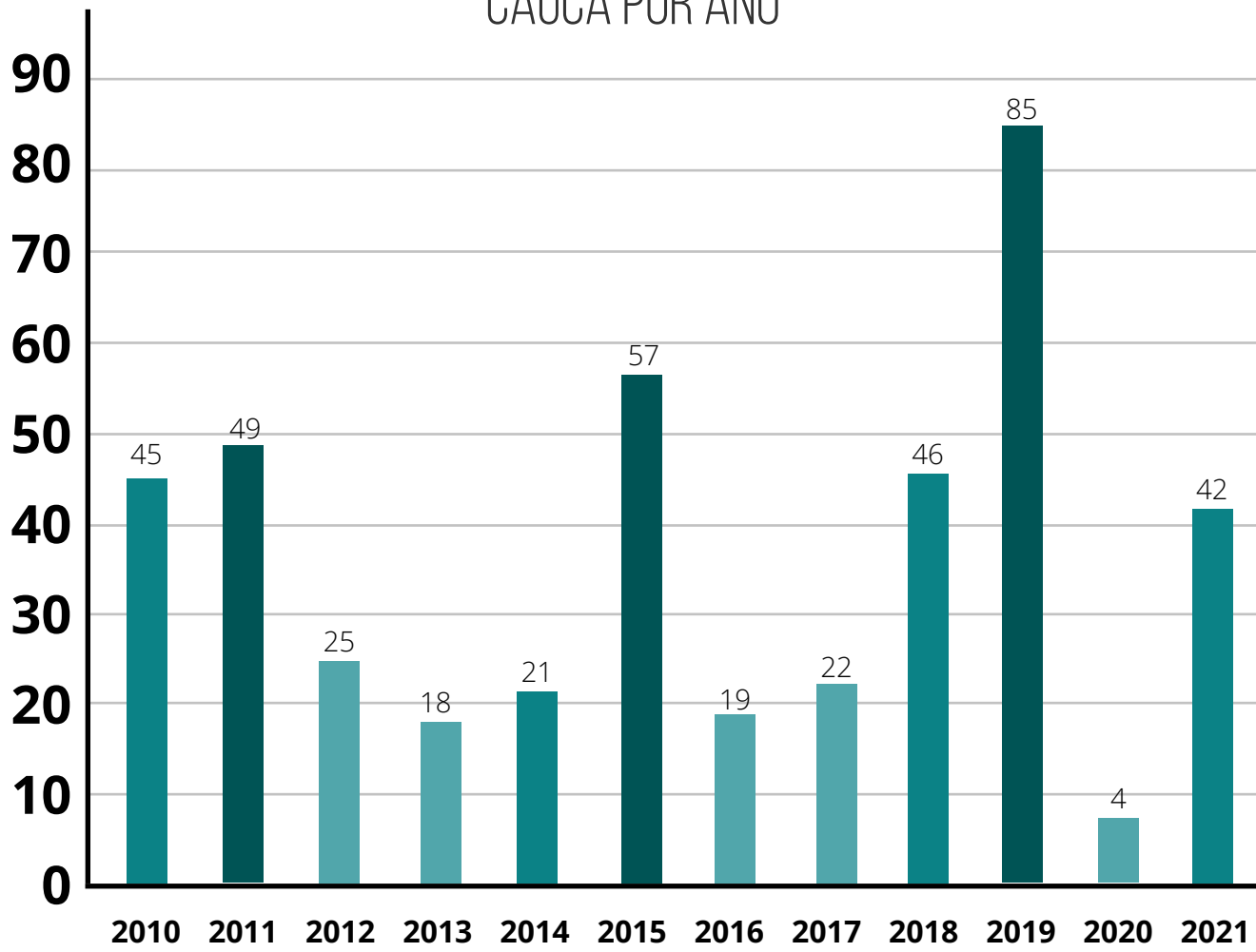


Nota. La figura 6 evidencia los números de casos de violencia electoral en el periodo estudiado. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP (2021).

Si bien existe una tendencia al aumento en el número de víctimas de violencia electoral en los años de elecciones locales, siendo éstos 2011 (49 víctimas), 2015 (57 víctimas) y 2019 (85 víctimas), esto no ocurre para los años de elecciones presidenciales. Por ejemplo, en el año 2012 (25 víctimas) hay mayor número de víctimas que en 2014 (21 víctimas). Algo similar ocurre con el año 2021 (42 víctimas) que solo tiene 4 víctimas menos que el año 2018 (46 víctimas).

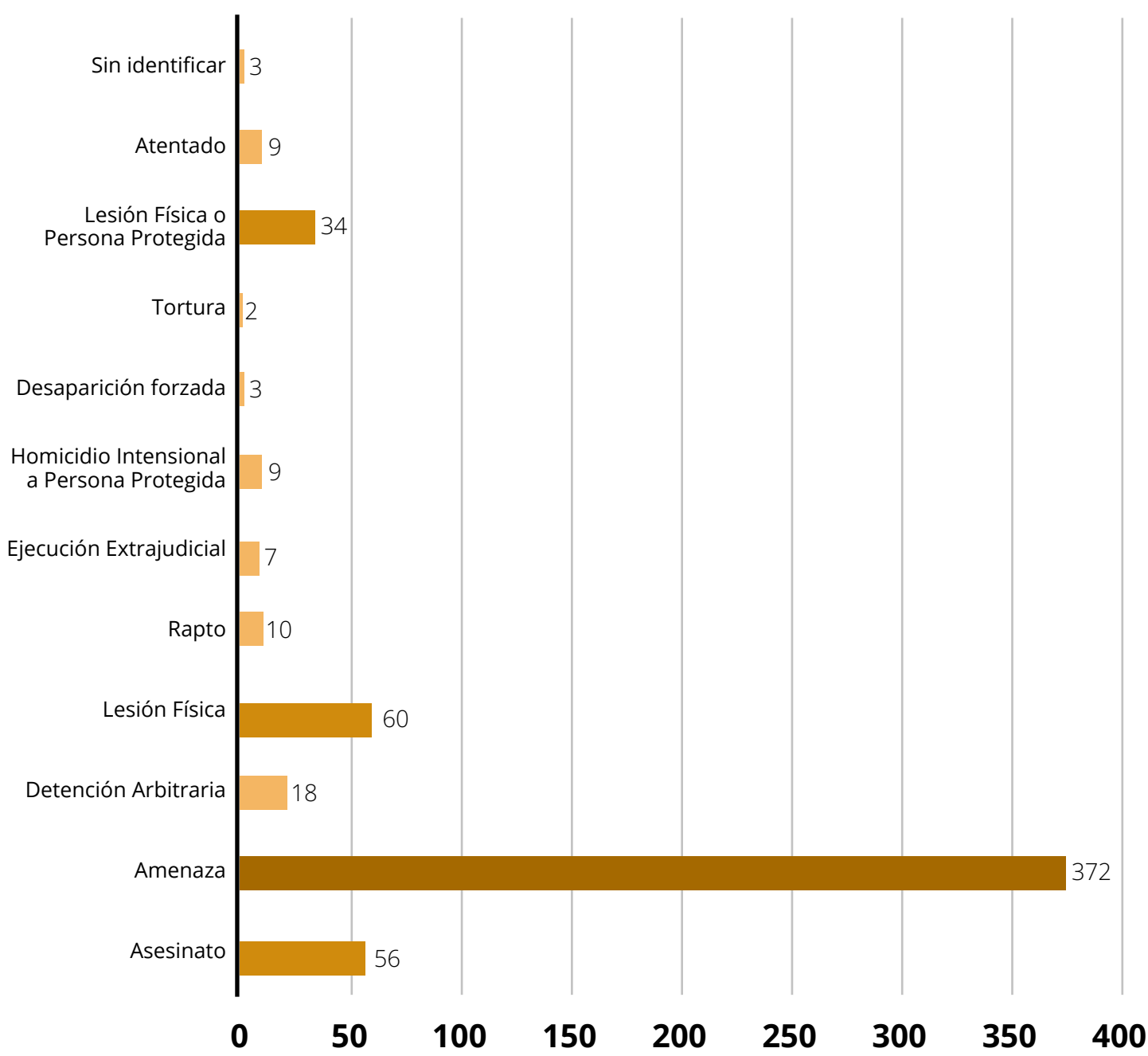
Existen dos años especialmente atípicos que son 2019 (85 víctimas) y 2020 (4 víctimas). Para el primer caso es necesario remontarse al tipo de hecho, correspondiente al alto número de amenazas (78 víctimas), pero contrario a años anteriores, no se presentaron lesiones físicas, atentados, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extraoficiales, ni homicidios intencionales a personas protegidas. Para el segundo dato atípico, podría existir una relación entre este y la situación de salud pública causada por el COVID-19. La cuarentena obligatoria puede ser la explicación a la reducción de 85 víctimas a 4 hechos registrados en 2020.

FIGURA 7
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ELECTORAL EN EL VALLE DEL CAUCA POR AÑO



Nota. La figura 7 revela el número de víctimas de violencia electoral por año, en el periodo 2010-2022. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP (2021).

FIGURA 8
VIOLENCIA ELECTORAL EN EL VALLE DEL CAUCA POR TIPO DE HECHO, 2010-2021



Nota. La figura 8 muestra evidencia la violencia electoral en el Valle del Cauca por tipo de hecho victimizante en el periodo 2010-2021. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP (2021).

Al agrupar los hechos de violencia electoral en el Valle del Cauca en el periodo 2010-2021 se encuentra que el tipo de hecho victimizante más frecuente son las amenazas (372), seguido de las lesiones físicas (60 casos) y los asesinatos (56 hechos). Al analizar estos datos desagrupados por año, se encuentra que el 2012 (1 hecho), 2016 (1 caso), y 2020 (2 reportes) son los que presentan menor número de asesinatos, siendo todos estos, posterior a la época electoral.

Por otro lado, resalta la lesión física, cuyos picos se concentran en 2011 (11 casos) y 2015 (24 casos), ambos años de elecciones locales. Situación que disminuye en los años posteriores al 2016, lo que puede coincidir con la firma del AP. Además, se puede concluir que la amenaza es la forma de violencia electoral predominante a través de los diez años analizados, en tanto se presenta al menos un asesinato por año, lo que no ocurre con las variables restantes.

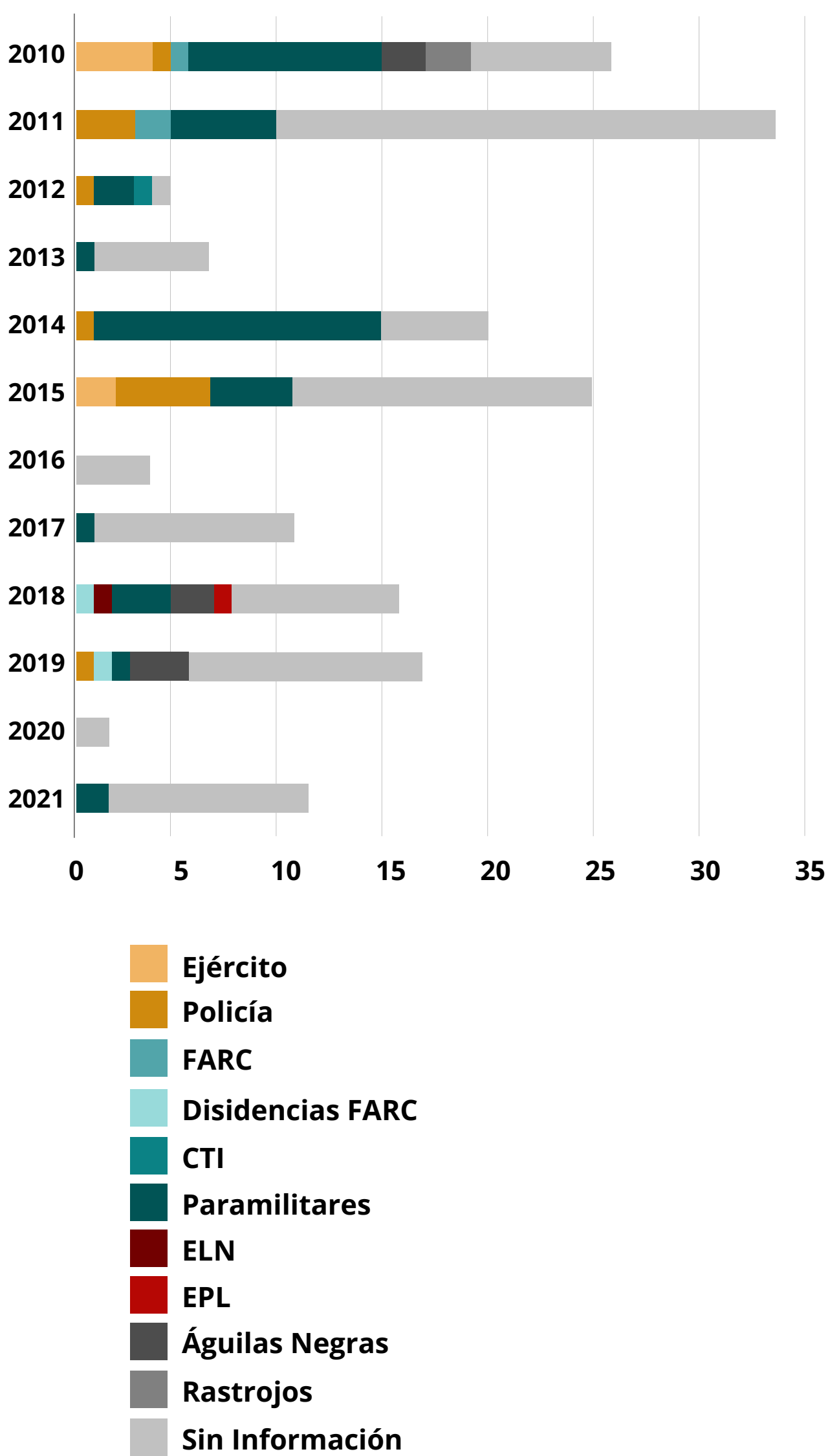
Al discriminar los casos de violencia electoral de cada año según el actor al que se le atribuye los hechos victimizantes, es posible evidenciar algunas tendencias generales. En primer lugar, resalta la proporción y la frecuencia de casos en los que se desconoce el actor involucrado, además del carácter constante a través de los años de este predominio.

En segundo lugar, es importante señalar a los paramilitares como el actor con más hechos victimizantes, llegando a superar el número de casos sin actor identificado en los años 2010, 2012 y 2014. También destacan por su constancia y permanencia

en el tiempo, pues sólo dejan de aparecer en los años 2016 y 2020.

En tercer lugar, llama la atención la cantidad decreciente de casos atribuidos a la fuerza pública a lo largo de los años. Con excepción de un solo caso en 2019, la totalidad de los episodios de violencia electoral atribuidos a este tipo de actor (Policía o Ejército) se registran hasta el 2015. Este último también fue el año en el que se dió el mayor número de episodios violentos en conjunto entre Policía y Ejército, alcanzando un total de 7 casos y dejando en segundo lugar a 2010 con 5 casos.

FIGURA 9
CASOS POR AÑO SEGÚN ACTOR AL QUE SE LE ATRIBUYEN, 2010-2021



Nota. La figura 9 reporta los casos de violencia electoral por año por actor, durante el periodo 2010-2021. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados por la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP (2021).

La distribución de los casos de violencia electoral atribuidos a los actores que aparecen en la figura 9, permite evidenciar que los dos actores con mayor número de hechos victimizantes son los paramilitares y aquellos de los cuales no se registra información. Vale la pena resaltar que para Buenaventura, la mayoría de casos se atribuyen a las FARC y sus disidencias, mientras que en Cali se registran casos a nombre de las Águilas Negras, los Rastrojos e incluso el único caso atribuido al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI); pero ningún caso adjudicado a grupos insurgentes.

TABLA 3
CASOS SEGÚN ACTOR AL QUE SE LE ATRIBUYEN EN CADA MUNICIPIO, 2010-2021

MUNICIPIO	EJÉRCITO	POLICÍA	FARC	DISIDENCIAS FARC	ELN	PARAMILITARES	ÁGUILAS NEGRAS	EPL	CTI	RASTROJOS	SIN INFORMACIÓN
Alcalá											
Andalucía											2
Ansermanuevo											2
Argelia											
Bolívar											
Buenaventura	2	4	1	1		18					17
Buga	2					2					5
Bugalagrande							1				2
Caicedonia											1
Cali	1	4				13	1		1	2	18
Calima - El Darién											
Candelaria											1
Cartago						1					5
Dagua											
El Águila											
El Cairo											1
El Cerrito											4
El Dovio						1					1
Florida			1				1	1			1
Ginebra											1
Guacarí											
Jamundí				1		1	1				3
La Cumbre											
La Unión						1					
La Victoria											
Obando											2
Palmira	1	2				1					6
Pradera						1	1				3
Restrepo											1
Riofrío											3
Roldanillo											
San Pedro											4
Sevilla						1					2
Toro											1
Trujillo						2					4
Tuluá		2	1				1				5
Ulloa											
Valle del Cauca							1				
Versalles					1						1
Vijes											1
Yotoco											
Yumbo											2
Zarzal											2
Total general	6	12	3	2	1	42	7	1	1	2	101



Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP (2021).

A lo largo del periodo de estudio se observa que a los grupos paramilitares se les atribuye un total de 13 asesinatos –17 si se incluyen los asesinatos cometidos por las Águilas Negras (dos) y los Rastrojos (dos)– asociados a violencia electoral en el Valle del Cauca, un número significativo, si se tiene en cuenta la utilización de esta modalidad de violencia por parte de otros actores armados en el territorio. No obstante, es menester resaltar la cantidad de asesinatos asociados a violencia electoral (57 asesinatos) para los cuales no se tiene información del presunto responsable, y por tanto, no es posible atribuir la autoría de los mismos a un actor en particular. Finalmente, se reportan asesinatos asociados a violencia electoral cometidos por la Policía (dos) y el Ejército (tres), así como por las FARC y sus disidencias (dos).

En 18 de los 30 municipios que presentaron casos de violencia electoral, se registraron candidatos o ex candidatos a cargos públicos entre las víctimas de estos episodios. Cali y Palmira destacan al ser los dos municipios con mayor cantidad de este tipo de hechos en el periodo 2010-2021, cada uno con personas violentadas. Cabe aclarar que esto no significa que estos candidatos estuvieran inscritos a una elección local en ese municipio, pues se registra es el lugar en donde aconteció el hecho violento. Los demás municipios sólo presentaron ya sea dos víctimas pertenecientes a este grupo (Cartago, El Cerrito, El Dovio y Jamundí), o una sola (Andalucía, Buenaventura, Bugalagrande, El Cairo, Florida, Restrepo, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Versalles y Yumbo).

número de municipios en riesgo por violencia, para el 2019 hay un repunte significativo. Así, al comparar 2019 y 2015 se puede apreciar que aumentó el número de municipios con riesgo medio (de 7 a 13), se redujo marginalmente el número de municipios con riesgo alto (de 4 a 3) pero sigue existiendo dos municipios en riesgo extremo. Al revisar el número de casos, en la parte final del capítulo, se evidenció como hay una tendencia al aumento en el número de víctimas de violencia electoral en los años de elecciones locales, siendo éstos 2011 (49 víctimas), 2015 (57 víctimas) y 2019 (85 víctimas).

Con miras a ofrecer información útil para analizar el potencial efecto del proceso de paz, se realizó un seguimiento a la trayectoria del riesgo por violencia en 12 municipios del departamento. Esto permitió reconocer que los municipios pueden clasificarse en 3 grupos: municipios con disminución en intensidad del riesgo por violencia posterior al AP; municipios con aumento en la intensidad del riesgo por violencia posterior al AP; y municipios que mantuvieron una intensidad del riesgo por violencia constante antes y después de la firma del AP. Esta caracterización inicial podrá ser objeto de análisis y conjeturas adicionales sobre los efectos del proceso de paz.

A partir de los datos extraídos de las Revistas Noche y Niebla del Banco de Datos del CINEP, y siguiendo la definición de violencia electoral expuesta al inicio de este capítulo, se puede construir una lectura sincrónica de los casos de violencia electoral para el período estudiado. Si bien no se pretende identificar tendencias definitivas, la caracterización permite una aproximación a la magnitud del fenómeno y sus manifestaciones. Conviene destacar que el ejercicio permite indicar que en el Valle del Cauca se registran 176 casos de violencia electoral entre 2010 y 2021, entre los que suman 433 víctimas.

De los 42 municipios del departamento, 30 presentaron al menos un caso en este periodo de tiempo, representando un 71% del total. Cuatro de estos municipios (Buenaventura, Buga, Cali y Palmira) concentran más de 10 episodios cada uno, y en conjunto suman más de la mitad de los casos en el departamento. La amenaza es la forma de violencia electoral predominante a través de los diez años analizados, a la vez que se presenta al menos un asesinato por año, lo que no ocurre con todas las variables.

La violencia electoral ha estado dirigida principalmente contra líderes sociales, pero también contra quienes compiten por votos. En 18 de los 30 municipios que presentaron

casos de violencia electoral, se registraron candidatos o ex candidatos a cargos públicos entre las víctimas de estos episodios. Cali y Palmira destacan al ser los dos municipios con mayor cantidad de este tipo de víctimas en el periodo 2010-2021, cada uno con cinco candidatos o ex-candidatos violentados.

Finalmente, la radiografía presentada ofrece herramientas para seguir pensando la violencia electoral y proponer análisis que establezcan relaciones entre esta y las condiciones en las que se desarrolla la competencia por votos en el departamento. No basta con ofrecer lecturas generales sobre las condiciones de violencias que se comparten con otras regiones del país, ni refugiarse en una falsa singularidad producto de una historia especialmente compleja. Este trabajo espera contribuir al esfuerzo por localizar y distinguir las violencias en el Valle del Cauca.

REFERENCIAS

Daxecker, U. (2020). Unequal votes, unequal violence: Malapportionment and election violence in India. *Journal of Peace Research*, 57(1), 156-170.

Galtung, J. (2003). Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bakeaz.

Kalyvas, S. N. (2003). The Ontology of “Political Violence”: Action and Identity in Civil Wars. *Perspectives on Politics*, 475-494.

MOE. (2010). Mapas de Riesgo por Anomalías e Irregularidades Electorales 2010. Bogotá: Misión de Observación Electoral.

MOE. (2011). Mapas de Riesgo por Anomalías e Irregularidades Electorales Elecciones locales y regionales, octubre 2011. Bogotá: Misión de Observación Electoral.

MOE. (2014). Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones nacionales 2014. Bogotá: Misión de Observación Electoral.

MOE. (2015). Mapa y factores de riesgo electoral Elecciones de autoridades locales Colombia 2015. Bogotá: Misión de Observación Electoral.

MOE. (2018). Mapa y factores de riesgo electoral Elecciones nacionales Colombia 2018. Bogotá: Misión de Observación Electoral.

MOE. (2019). Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones de autoridades locales Colombia 2019. Bogotá: Misión de Observación Electoral.

MOE. (2022). Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones Nacionales Colombia 2022. Bogotá : Misión de Observación Electoral.

Wickham-Crowley, T. P. (1991). *Exploring Revolution: Essays on Latin American Insurgency and Revolutionary Theory*. New York: M.E. Sharpe Inc. Publishers.

Yorks, L. (2008). What We Know,What We Don't Know,What We Need to Know—Integrative Literature Reviews Are Research. *Human Resource Development Review*, 139-141.

CINEP. Revista Noche y Niebla, 1996-2019. Revista impresa CINEP/PPP. Marco conceptual de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. Bogotá: Cinep/PPP. 2016.
https://www.nocheyniebla.org/?page_id=621.



APÉNDICE

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA (SISEP) EN EL VALLE DEL CAUCA

JOHAN ANDRÉS NIÑO

Observatorio para la Paz del Valle del Cauca
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación

En el marco del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, surge el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (en adelante SISEP). Este sistema se encuentra en el punto 2.1.2.1.² de dicho Acuerdo, reglamentado mediante el Decreto Ley 895 de 2017.³

De tal manera, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2022), el SISEP es un conjunto de normas, planes, programas, proyectos, y de instancias nacionales y territoriales implementadoras de garantías de seguridad, que tiene por objeto disminuir el riesgo de afectación, y propender por la protección de quienes ejercen la política.

Estratégicamente se trata de la contribución en la creación y garantía de una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de estigmatización y persecución. A su vez, está fundamentado en el respeto a la dignidad humana, promoción y respeto de los derechos humanos y del ejercicio de la política (Presidencia de la República, 2017).

En tal sentido, en los niveles nacionales y territoriales se cuenta con medidas de prevención, protección y seguridad, las cuales contemplan garantías de derechos para quienes hayan sido elegidos popularmente, para quienes se declaren en oposición, para el nuevo movimiento o partido político que surja del AP, para líderes comunitarios, comunidades rurales, organizaciones sociales, de mujeres y/o defensoras de derechos humanos, líderes de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales, así como de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2022).

Por lo tanto, el despliegue del Sistema supondría un avance en términos generales hacia la ausencia de la violencia en el ejercicio de la política y de las libertades democráticas, el liderazgo social de todo tipo, así como de la reincorporación de las y los excombatientes.

Ahora bien, el SISEP contiene en el desarrollo de tales medidas de seguridad, una serie de instancias que se resumen en:

1. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en el desmantelamiento de las organizaciones criminales incluyendo las sucesoras del paramilitarismo.
2. La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, para la implementación del SISEP, funcionamiento, articulación y supervisión, así como seguimiento e interlocución a las medidas de seguridad para la población objetivo.
3. El delegado presidencial, siendo este el Alto Comisionado para la Paz.
4. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección que, a través de un sistema de planeación, información y monitoreo, realiza el seguimiento y evaluación de desempeño y de resultados del SISEP incluyendo los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales con el fin de realizar recomendaciones.
5. El Comité de Impulso a las Investigaciones de los delitos pertinentes al SISEP que opera al interior de la Fiscalía General de la Nación.
6. Los Programas de Protección contemplados en el presente decreto ley.
7. Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida, el cual presenta el componente de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, para advertir oportunamente los riesgos y amenazas a los derechos. El segundo componente denominado Respuesta Rápida, bajo potestad del Ministerio del Interior, en aras de articulación institucional entre las entidades nacionales y autoridades territoriales para una respuesta rápida y oportuna ante los riesgos identificados.⁴

En estas instancias, participan distintas entidades del Estado colombiano, tales como el Ministerio de Defensa, Justicia, Interior, Fuerza Pública, la Fiscalía General

2. Presidencia de la República. 2016. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

3. Presidencia de la República. 2017. Decreto Ley 895 de 2017. "Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política".

4. Presidencia de la República. 2017. Decreto Ley 895 de 2017. "Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política".

de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Unidad Nacional de Protección y la sociedad civil.

Por su parte, los programas de protección contemplados en el Decreto Ley 895 de 2017 están conformados por:

- Mesa técnica de Seguridad y Protección: desarrollar, coordinar, hacer seguimiento y sugerencias a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección- Decreto 299 de 2017. Implementa esquemas de seguridad para personas en proceso de reincorporación, sus colectividades y familias que así lo requieran.
- Decreto 300 de 2017: Subdirección especializada de Seguridad y Protección- la cual adopta medidas de seguridad y protección- Unidad Nacional de Protección.
- Decreto 660 de 2018: Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios- Protección colectiva- Ministerio del Interior.
- Plan Estratégico de Seguridad y Protección: políticas, programas, acciones y medidas integrales que se están ejecutando, las que se lleguen a ejecutar por parte de las entidades públicas, incluidas las medidas materiales e inmateriales destinadas a prevenir y generar un ambiente de confianza, y las de carácter material que definen los protocolos de seguridad y protección, destinadas a brindar garantías de seguridad para población reincorporada de las FARC-EP - DAPRE - Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
- Programa de Protección Integral de Seguridad para las y los integrantes del Partido COMUNES y personas en proceso de reincorporación.

AVANCES Y RETROCESOS

En el portal web de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se puede encontrar de manera cuantitativa el número de sesiones plenarias y territoriales que se han realizado a partir del SISEP. Sin embargo, no existe evidencia o información que permita poder determinar impactos reales y cuantificables.

La Comisión Nacional de Garantías lleva ochenta y tres (83) sesiones adelantadas en sus diferentes modalidades: sesión plenaria (7), sesión territorial (12), sesiones temáticas

con enfoque étnico y de género (36), sesión técnica (27) y subcomisión técnica (1 sesión). La instancia de Alto Nivel informa 21 sesiones en sus diferentes modalidades: plenaria (4), comité operativo de implementación (6), comité operativo de mujer y género (8) y comité operativo de adecuación normativa (4 ocasiones) (Alto Comisionado para la Paz, 2022).

La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño informa el funcionamiento de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección en la UNP, así como de la mesa técnica de seguridad y protección. De igual manera, el cuerpo élite de la Policía Nacional, y finalmente, la promulgación del Decreto 1581 de 2017, como política pública de prevención para el desarrollo del programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2022).

Ahora bien, tras seis años de la firma del AP, se evidencia una violencia sistemática contra las personas en proceso de reincorporación, así como ausencia del programa integral de seguridad para firmantes del mismo. En tal sentido, la Jurisdicción Especial para la Paz (2021), ordenó a autoridades estatales diseñar este plan, teniendo en cuenta las nuevas áreas de reincorporación, incluido el pacífico colombiano, así como el departamento del Valle del Cauca.

De igual manera, sigue ausente la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, y las sucesoras del paramilitarismo. Respecto a esto, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad informa que, se sigue trabajando en la construcción de acciones específicas que permitan brindar lineamientos de política pública para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas punibles a las que hace referencia el artículo 1 del Decreto 154 de 2017 (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2022).

Teniendo en cuenta que la Jurisdicción Especial de Paz, mediante el Auto SAR AI 067 de 2021 dio un plazo de 60 días, al Alto Comisionado para la Paz, en su condición de Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Garantías, deberá remitir a dicha jurisdicción tales lineamientos (Jurisdicción Especial para la Paz, 2021).

También se encontró un rezago en la adopción del Protocolo de Seguridad y Protección, el cuál debió adoptarse en el marco de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, en el que sólo se registran acciones aisladas de seguridad y protección, sin que se expidiera el decreto correspondiente a dicho protocolo (Instituto KROC, 2022).

PENDIENTES

De acuerdo con el último informe trimestral del Instituto KROC (2022), se evidenció las siguientes acciones que siguen pendientes por implementar del SISEP:

- Formular e implementar la política pública para combatir y dismantelar las organizaciones y conductas ilícitas.
- Implementar los cuatro componentes del Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios (Programa 660).
- Llevar a cabo sesiones plenarias de la Instancia de Alto Nivel (IAN) del SISEP, para aprobar e implementar instancias de seguridad estipuladas en el Decreto 895 de 2017.
- Reevaluar la metodología de desarrollo de las sesiones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).

EN LO TERRITORIAL

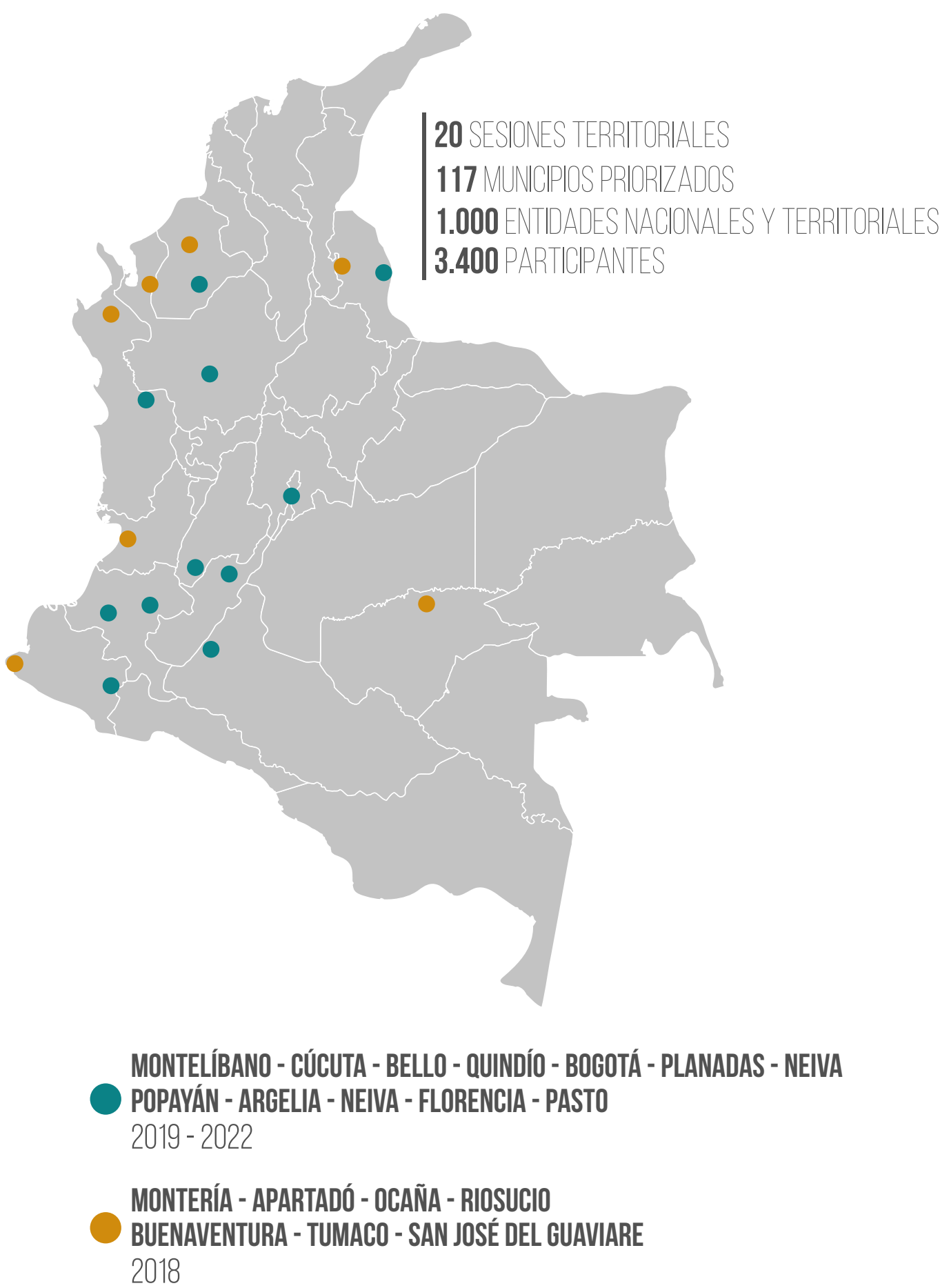
Las sesiones territoriales son espacios de interlocución entre las entidades del gobierno mencionadas y la población objetivo del SISEP. A la fecha, 16 de agosto de 2022, según reporte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y como se aprecia en la figura 12, se han realizado 20 sesiones territoriales en 117 municipios priorizados, y en el Valle del Cauca, la única sesión realizada fue en el año 2018 en el municipio de Buenaventura.⁵

El Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660 de 2018), solo contó con un piloto para cuatro comunidades durante el primer año de implementación del AP. Se alcanzó la fase de concertación de medidas de prevención y fortalecimiento a comunidades, sin su implementación los años siguientes.

A su vez, carecen de funcionamiento las instancias nacionales como el Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguimiento y protección y del protocolo para territorios rurales, y el Comité Técnico de los componentes de promotores/as comunitarios de paz y convivencia y de apoyo a la actividad de denuncia. Además, tal como se indicó anteriormente, sigue pendiente la implementación de los cuatro

componentes del Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios (Instituto KROC, 2022).

FIGURA 12
TIPO Y NÚMERO DE SESIONES TERRITORIALES REALIZADAS ENTRE INSTITUCIONES ESTATALES Y POBLACIÓN OBJETIVO SISEP EN EL PERIODO 2018-2022



Nota. La figura 12 evidencia el tipo y número de sesiones territoriales realizadas entre instituciones estatales y población objetivo SISEP en el periodo 2018-2022. Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2022).

Ahora bien, tras seis años de la firma del AP, en los últimos meses las entidades del orden nacional y territorial del Pacífico medio y en especial en el departamento del Valle del Cauca, bajo el mandato del Auto SAR AI 067 de 2021 de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha venido avanzando en torno a la construcción y socialización de respuesta inmediata para la seguridad de las personas en reincorporación del departamento y la ciudad de Santiago de Cali, la cual se fundamenta en las líneas del Plan Estratégico de Seguridad y Protección.⁶ Lo anterior, en cabeza del Ministerio del Interior desde el CIPRAT,⁷ a través de las sesiones de seguimiento en el Valle del Cauca.

Igualmente, la Mesa de Seguridad Física y Jurídica del Valle de Cauca la cual nace de la Mesa Territorial de Reincorporación y Reconciliación del Valle del Cauca, realizó dos ejercicios de socialización de la ruta de respuesta inmediata para la seguridad de las personas en reincorporación en dicho departamento, en el mes de agosto.

5. Es decir, durante el gobierno del presidente Iván Duque fue incipiente el avance del SISEP en el departamento del Valle del Cauca.

6. Secretaría de Seguridad y convivencia del Valle del Cauca.2022.
7. Objetivo: Atender y hacer seguimiento a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y amenazas allegadas a la Secretaría Técnica de la CIPRAT, de manera específica para la mitigación de riesgos a población en proceso de reincorporación identificados por la Defensoría del Pueblo de conformidad con el Decreto 2124 de 2017, para el Departamento de Valle. Cumplimiento a órdenes judiciales del Auto 044 de 2021 de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP.

A partir de estos ejercicios, se destaca la ampliación de las rutas de protección y prevención a todas las colectividades e individualidades de las personas en proceso de reincorporación presentes en el territorio, sin distinción de filiación política, y con garantías de participación vinculantes.

En todo caso, resulta importante avanzar en una articulación sólida y una planificación sectorial y multinivel, involucrando actores con capacidad de incidencia, para ampliar la oferta institucional, y superar las barreras de acceso para crear condiciones favorables en la garantía de los derechos fundamentales e integrales, así como para generar impactos positivos en los territorios.

ALERTA TEMPRANA ELECTORAL

La Defensoría del Pueblo (2022) emitió una Alerta Temprana Electoral de carácter nacional en el marco de las elecciones del año 2022, identificada con el código No. 004 de febrero 17 de 2022, asociada a los certámenes electorales:

1. Elección de 16 Circunscripciones Especiales Temporales de Paz, 13 de marzo de 2022 para 167 municipios en 19 de los 32 departamentos.
2. Elecciones a Congreso de la República (108 Senado y 172 Cámara de Representantes), 13 de marzo de 2022.
3. Elecciones Presidenciales (primera y segunda vuelta), 29 de mayo de 2022 y 19 de junio de 2022.

Se debe aclarar que, por medio de este tipo de Alerta Temprana, la Defensoría del Pueblo advierte acerca del aumento de los riesgos por el incremento de las acciones tendientes a la vulneración de los derechos fundamentales de la población. Igualmente, se busca activar mecanismos de prevención y/o mitigación de los riesgos advertidos, antes, durante y después de los certámenes electorales, en torno a los siguientes riesgos:

- Control social y territorial de grupos armados ilegales (principalmente el desarrollo de economías ilegales.
- Disputas entre diversos grupos armados ilegales por el control territorial y corredores estratégicos de movilidad.
- Amenazas a líderes sociales o candidatos cuyas propuestas políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses.

- Continuidad del conflicto armado interno, con una fuerte influencia del narcotráfico.

A nivel nacional, la Alerta Temprana Electoral No. 004 de 2022 monitoreó a 521 municipios de los cuales 79 se encontraban en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo.

A nivel territorial, en el Valle del Cauca la Alerta Temprana Electoral No. 004 de 2022, involucró a 23 municipios del departamento, 3 en riesgo extremo, 12 en riesgo alto y 8 en riesgo medio:

- En riesgo extremo: Buenaventura, Cali y Jamundí;
- En riesgo alto: Buga, Bolívar, Bugalagrande, El Cerrito, Dagua, El Dovio, Florida, Sevilla/Caicedonia, Trujillo, Tuluá, Palmira, Pradera.
- En riesgo medio: Restrepo, Yumbo, Guacarí, Ginebra, San Pedro, Cartago, La Unión, Calima Darién.

REFERENCIAS

Alto comisionado para la paz.2021. ABC Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).

<http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/legalidad-convivencia/sisep>

Alto comisionado para la paz.2022. ABC Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política -SISEP.

<http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oficina/sisep>

Jurisdicción Especial para la Paz (2021).

<https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-ordena-nuevas-medidas-para-proteger-a-los-firmantes-del-Acuerdo-de-Paz-y-sus-familias.aspx>

Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 2022. Acta 120. Mesa de Coordinación Interinstitucional para la seguridad de personas en reincorporación. Construcción ruta de respuesta inmediata para la seguridad de las personas en reincorporación del Valle del Cauca y Santiago de Cali.

Defensoría del Pueblo. 2022. ALERTA TEMPRANA N° 004-2022. Documento de Advertencia por Proceso Electoral 2022. Recuperado de

<https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/004-22.pdf>

Presidencia de la República. 2022. Mesa de Seguridad Física y Jurídica del Valle del Cauca. Socialización de la ruta de respuesta inmediata para la seguridad de las personas en reincorporación en el departamento del Valle del Cauca.

Ministerio del Interior. 2022. Comisión intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas -ciprat.



CAPÍTULO 3

TRANSPARENCIA EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS EN EL VALLE DEL CAUCA 2022

LAURA ALCÁZAR, YOVANNY DAZA, PENÉLOPE ESCOBAR

Instituto de Investigación e Intervención para la Paz
Universidad del Valle

INTRODUCCIÓN

Los procesos electorales son eventos cruciales dentro de la vida de las democracias modernas, en tanto como procedimiento, siendo esto una visión minimalista, permite la renovación de las figuras de gobierno, la construcción y contraste entre agendas programáticas e ideológicas que se espera sean claramente diferenciadas, concentra la mayor parte del tiempo, los recursos y las estrategias que definen a las opciones partidistas en competencia, y por supuesto, confiere sentido de mandato al ciudadano. De aquí que, dentro de la amplia literatura científica discutida por décadas, se establece que, como criterios esenciales para señalar la naturaleza democrática de dichas contiendas electorales, estas deban, por lo menos, desarrollarse bajo condiciones que permitan considerarlas libres, periódicas, universales y justas (Bobbio, 1987; Bovero, 1989; Dahl, 1999; Liphart 2000; Sartori, 2002).

Es decir, las elecciones deben ocurrir bajo una serie de normas estandarizadas, ininterrumpidas y acatadas por los actores que conforman el sistema de partidos. Además, las reglas deben ser respetadas, difundidas e internalizadas por todos aquellos que deciden participar. Para Michel Angelo Bovero (2012), se trata de que exista claridad y legitimidad en torno a *quiénes participan y cómo lo hacen*. En consecuencia, es preciso decir que la democracia, de forma parcial, resulta ser en efecto, el conjunto de reglas formales de juego que suministran información a los actores sobre cómo desempeñarse, pero también, otorga certidumbre y autenticidad al proceso en sí mismo.

Es preciso comprender así que, ningún acontecimiento político ocurre sobre campos abstractos y vacíos, por el contrario, éstos son el producto del influjo de las fuerzas institucionales que estructuran las dinámicas e interacciones entre actores situados en contextos específicos. Los procesos electorales no son ajenos a este planteamiento e implican que su desarrollo está sujeto a la existencia de reglas pactadas (Escobar, 2020).

Es por ello la atención sobre el Sistema Electoral (en adelante SE), el cual es entendido como el conjunto de reglas y procedimientos que condicionan el

comportamiento de los actores en competencia, permitiendo la identificación de escenarios oportunos y/o limitados para la toma de decisiones (De Luca, 2006; Duque, 2011a; Freidenberg y Doseck, 2016). Por tanto, es clave para evaluar la calidad de las contiendas reflexionar acerca de ¿Qué sucede cuando existen cuestionamientos considerables sobre la desviación deliberada sobre las reglas de juego? y ¿Por qué resulta crucial que la ciudadanía tenga acceso oportuno, abierto y completo sobre la forma en la que estas reglas operan?

ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

Los vínculos que se establecen entre los partidos políticos, sus candidatos, los ciudadanos y el sistema electoral, resultan ser la expresión del nivel de consolidación del régimen democrático en el que estos tienen lugar (Duque, 2019). Por lo que se espera que en democracias saludables y con niveles de desarrollo aceptables los partidos en competencia tengan unos mínimos de institucionalización organizativa y actitudinal, es decir, un *enraizamiento*, de tal forma que la selección de candidaturas tenga estándares mínimos en los que la adhesión ciudadana no se encuentre condicionada por intercambios o retribuciones particularistas, se mitigue el riesgo de ingreso de dineros provenientes de fuentes ilícitas, y que las relaciones elector-electo no estén reducidas a la existencia de complejas redes de clientela (Duque, 2016). En oposición, como señala Duque (2016), en su estudio del fraude electoral en Colombia, las candidaturas en contextos partidistas de baja institucionalización y de laxa regulación, son susceptibles al desarrollo de entramado clientelares, donde cada facción, presidida por un jefe político, gestiona su propia base de electores recurriendo a estrategias que se alejan de la promoción de ideas programáticas, vínculos ideológicos o posicionamiento de *issues* en las agendas de opinión; en cambio, se recurre a intercambio transaccionales que buscan garantizar el éxito del político.

La combinación de partidos poco institucionalizados, reglas electorales que favorecen la personalización, tales como las listas abiertas con voto preferente que incentivan carreras individuales, la exposición a entornos con presencia de actores criminales y economías subterráneas de tipo ilícito, dan lugar a escenarios en los que la desviación de las reglas de juego es una posibilidad. En muchos casos, permitiendo la entrada de *políticos de negocio*, que son los que “viven de la política persiguiendo ventajas

materiales y que (la) ven no una actividad con fines colectivos, sino un medio para ascender en la escala social y concretar sus fines, se apropian de forma ilegal de los recursos públicos” (Della Porta, 2011, p. 11). De ahí que, de acuerdo con Duque (2019), los partidos políticos de muy baja institucionalización puedan terminar transformándose en agregaciones conflictivas de jefes locales o caciques políticos cuyos intereses pasan más por los negocios que por la política, dando pie a la adaptación de estrategias poco éticas y en algunos casos, que rozan con la ilegalidad.

Fraude electoral

Es entonces que se puede afirmar que la adopción de acciones deliberadas que buscan alterar de forma clandestina e ilegítima los resultados de una elección puede ser considerado fraude; Es así que, se trata de una manipulación irregular de las normas acordadas como válidas para el desarrollo libre y legal del proceso electoral (Lehoucq, 2007; Schedler, 2013). Sin embargo, frente a esta definición amplia, es preciso señalar dos consideraciones: *el criterio de legalidad y el criterio de incidencia*.

Frente al criterio de legalidad, se puede expresar que no todas las conductas que de forma incidental o no, causen una desviación sobre los procedimientos adoptados para el desarrollo de las jornadas electorales, pueden llegar a ser consideradas como son consideradas como ilegales, dado que, esto depende de las disposiciones de los códigos electorales vigentes. Un ejemplo de esto es la historia de la trashumancia electoral en Colombia, fenómeno mediante el cual grupos de ciudadanos eran movilizados hacia circunscripciones territoriales diferentes a la de donde había sido censado electoralmente, siendo una práctica recurrente y normalizada, pero también señalada como desleal. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 que se comenzó a considerar como delito electoral con la Ley 599, donde se explicita como motivo de sanción.

En segundo lugar, el criterio de incidencia hace referencia a la sistematicidad y capacidad de determinación última que causa dicha práctica sobre los resultados de determinada elección. Así bien, aunque existan irregularidades que permitan intuir una distancia momentánea de las normas pactadas, muchas veces esto no necesariamente incide en los resultados. En algunos casos, por ejemplo, estas se relacionan con la baja capacidad tecnológica o metodologías precarizadas durante los escrutinios. De manera que, si bien, el

fraude electoral está relacionado con la manipulación deliberada y sostenida de los procedimientos electorales, estos pueden ser determinantes o no de los resultados electorales (Duque, 2016). Dentro del contexto colombiano se podrían distinguir por lo menos las siguientes prácticas consideradas como ilegales y tipificadas en el código electoral:

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS MOMENTOS ELECTORALES

M1. PREELECTORAL	M2. ELECTORAL	M3. POSELECTORAL
Financiamiento de campañas de forma irregular (violación de topes o ingreso de dineros provenientes de fuentes ilegales)	Compra de votos.	Robo o destrucción de urnas.
Constreñimiento por medio del uso de la violencia hacia los votantes por terceros particulares o fuerzas del Estado.	Votantes emiten su voto más de una vez.	Número de papeletas mayor al número de electores participantes.
Amenazas dirigidas a jurados y testigos electorales.	Vulneración al derecho a emitir el voto en secreto.	Escrutinio realizado por personas no autorizadas o en condiciones que infringen el principio de transparencia.
Ausencia o manipulación injustificada del padrón electoral.	Suplantación de identidad.	Alteración o anulación de votos.
	No solicitar documentación correspondiente	
	Impedir acceso a puestos de votación	

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Duque (2016).

Pese a lo dicho, según la literatura académica y las investigaciones desarrolladas en América Latina, sugieren que el fraude casi nunca es determinante. Sin embargo, esto no resulta menos problemático, pues para Lehoc (2007), la manipulación de los procesos electorales o la sola intención de hacerlo puede afectar de manera significativa el porcentaje de participación ciudadana, alimenta la desconfianza por las instituciones democráticas y, en sistemas bipartidistas o escenarios muy cerrados, puede implicar que la balanza se incline en favor de uno de los competidores. De forma concreta, la sospecha misma de la existencia de prácticas desleales y/o ilegales, pone en cuestión la estabilidad democrática y afecta la credibilidad sobre las instituciones y los procesos mismos, ya que

Alienta a los funcionarios en el poder y a los miembros de la oposición a poner en duda las elecciones y sus resultados. Precisamente, debido a la dificultad extrema de determinar la eficacia de la manipulación del voto, el fraude electoral y su denuncia corroen al cuerpo político democrática. (Lehoc, 2007, p. 5)

Transparencia electoral

La sospecha, justificada o no, de prácticas orientadas a la afectación ilegal y clandestina de los resultados electorales, si bien es probable que no genere efectos definitivos sobre los resultados, sí causa afectaciones críticas sobre la cultura cívica. Para Colomer (2009), la *cultura cívica* determina en gran parte la continuidad de prácticas democráticas en tanto se trata del consenso entre líderes políticos y ciudadanos en el que, en torno a criterios mínimos para la toma de decisiones, construyen valores y creencias entorno a la defensa de dichas normas y en últimas, se pacten acuerdos sobre la vida en sociedad.

Desde esta perspectiva, la *transparencia electoral*, entendida como el conjunto de estrategias orientadas a mitigar la ocurrencia de irregularidades, pero también, que involucra de forma directa al ciudadano, suministrando información relevante, para evaluar, monitorear y darle seguimiento a los diferentes momentos electorales, es una herramienta irreductible frente a la integridad y la calidad de las instituciones democrática.

En últimas, la idea de *Transparencia* reclama un rol activo de la ciudadanía, más allá del ejercicio formal de emitir un voto. Frente a esto, se pueden considerar varias acciones afirmativas orientadas a fortalecer este aspecto. A continuación, se mencionan algunos elementos: el diseño y definición de un padrón electoral con criterios claros, difundidos y verificables.

- La existencia de jurados y testigos electorales frente a los cuales se han dirigido recursos institucionales para su cualificación.
- Acceso oportuno, libre y universal a los puestos de votación.
- Ejercicios de cedulação íntegros.

Alcances

A partir de estas consideraciones generales, el presente documento busca retomar la discusión sobre ¿cómo las reglas de juego condicionan el comportamiento de estos actores y qué tanto son acatadas, interiorizadas y cumplidas a cabalidad durante los diferentes momentos de las contiendas electorales, es decir, antes, durante y posterior a su realización? ¿Se evidenciaron irregularidades o desviaciones que afectan la calidad y estatus democrático de las contiendas? ¿Cuál es el rol de las ciudadanías en la denuncia, control y transparencia de los procesos electorales?

De esta forma este documento tiene la intención de reflexionar sobre las condiciones y los aspectos que caracterizaron, desde la perspectiva de la transparencia y cumplimiento a las reglas de juego democrático, las elecciones legislativas del año 2022 en el Valle del Cauca.

Dadas las limitaciones relacionadas con el acceso completo y oportuno a la información, así como por la ausencia de un acervo documental propio que permita hacer una lectura longitudinal del fenómeno, este acápite pretende ofrecer una mirada coyuntural sobre las elecciones legislativas del presente año, permitiendo, en algunos casos, enunciar generalidades acotadas al tiempo y espacio abordados, pero que pueden ser retomados en estudios posteriores de mayor amplitud. En suma, se trata de una fotografía muy puntual sobre las situaciones que podrían sugerir la existencia de conductas en las cuales los criterios de libertad y autenticidad de los resultados pudieron haber estado en riesgo, y que indican la necesidad de robustecer los mecanismos de transparencia electoral hoy existentes.

Contexto de la participación

Las elecciones del año 2022 se han desarrollado en el marco de situaciones que ponen en riesgo su transparencia, estabilidad y garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. Para INDEPAZ (2021), los riesgos reportados por la ciudadanía y advertidos en sus informes corresponden a:

1. El Cartel del Golfo, las Águilas Negras, grupos residuales de ex FARC y el ELN, no han declarado cese al fuego de cara a las elecciones del 19 de junio. Esta situación aplica para 237 municipios en el que tiene presencia el Clan del Golfo, y en 123 municipios para las disidencias y residuales de las extintas FARC.
2. Se destacan como sujetos de riesgo inminente a defensores de derechos humanos, personal de prensa, población víctima del conflicto armado ubicada en zonas PDET, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que desarrollen actividades de defensa DDHH y/o participación en procesos políticos, o como veedores de los mismos, en el Pacífico colombiano y la zona del Urabá.

8. Las fuentes recuperadas presentan poca información, información muy general, información desactualizada o con una categorización poca profunda.

3. Se destacan aumentos críticos en las víctimas de violencia durante el periodo preelectoral. Entre enero 1° y mayo de 2022 estas fueron las cifras recolectadas por INDEPAZ y la JEP:

TABLA 2
NÚMERO DE VÍCTIMAS POR HECHOS VIOLENTOS ENTRE ENERO Y MAYO DE 2022

HECHO VICTIMIZANTE	NÚMERO DE VÍCTIMAS
ASESINATO A LÍDERES SOCIALES	76
ASESINATO FIRMANTES DEL ACUERDO	21
MASACRES	42 (151 víctimas)
DESPLAZAMIENTO FORZADO	27.528
AMENAZAS	6.908
HOMICIDIO SELECTIVO	1.150
CONFINAMIENTO	48.331
DESAPARICIÓN FORZADA	53
ACCIDENTES CON MINA	20
ACCIONES PARO ARMADO ELN	65
ACCIONES PARO ARMADO AGC	176
VINCULACIÓN NNAS	46

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de INDEPAZ (2022), y JEP (2022).

Para la Defensoría del Pueblo (2022), el predominio de acciones armadas en territorios cercanos al Pacífico, ponen en riesgo el normal desarrollo de los comicios. Durante este año, tuvieron lugar dos paros armados: uno realizado por el ELN en marzo, y el último por los integrantes del Clan del Golfo a comienzos de mayo. Esto generó afectaciones en la participación electoral en los departamentos de Chocó, Cauca, el Pacífico nariñense, Arauca y municipios del Bajo Cauca antioqueño, donde se reportaron quemas de buses y bloqueos armados en la vías el pasado 29 de mayo. Para esta entidad, los municipios Del Valle del Cauca en riesgo extremos son Jamundí, Buenaventura y Cali; mientras que aquellos con riesgo alto corresponden a Tuluá, Bugalagrande, Trujillo, Bolívar, El Dovio, Sevilla, Caicedonia, Florida, Dagua, Buga, Palmira, El Cerrito, Pradera. Por parte de la MOE (2022), seccional Cali, se advierte que durante el año se han recibido 246 reportes sobre irregularidades frente al proceso electoral; 100 de estas irregularidades se reportaron de marzo a la fecha, y la mayoría de las denuncias están relacionadas con el comportamiento de los jurados, lo que explica el aumento en las solicitudes para participar como observadores electorales, a la vez que hubo denuncias sobre compra de votos y publicidad no permitida.

Acuerdo de paz y transparencia electoral.

Una de las tantas causas del conflicto armado en Colombia ha sido la falta de

representatividad de algunos sectores de la sociedad, así como las pocas garantías para el ejercicio de la política. Es por ello que en el AP, se estableció en el Punto 2, “Participación Política: Apertura democrática para construir la paz”, las condiciones por medio de las cuales se puede garantizar el ejercicio de la participación política de partidos, organizaciones y movimientos sociales:

TABLA 3
PUNTO 2. SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DEL ACUERDO DE PAZ DE 2016

DERECHOS Y GARANTÍAS PLENAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN GENERAL, Y EN PARTICULAR PARA LOS NUEVOS MOVIMIENTOS QUE SURJAN LUEGO DE LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL. ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	MECANISMOS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INCLUIDOS LOS DE PARTICIPACIÓN DIRECTA, EN LOS DIFERENTES NIVELES Y DIVERSOS TEMAS.	MEDIDAS EFECTIVAS PARA PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL DE TODOS LOS SECTORES, INCLUYENDO LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE, EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y CON GARANTÍAS DE SEGURIDAD.
DERECHOS Y GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN GENERAL *Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política	GARANTÍAS PARA LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES	PROMOCIÓN DEL PLURALISMO POLÍTICO. *Medidas para promover el acceso al sistema político *Medidas para promover la igualdad de condiciones en la competencia política
GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA *Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política Adecuación normativa e institucional Prevención Protección Evaluación y seguimiento *Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Adecuación normativa e institucional Prevención Protección Evaluación y seguimiento	GARANTÍAS PARA LA MOVILIZACIÓN Y LA PROTESTA PACÍFICA.	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS, INSTITUCIONALES Y REGIONALES.	PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA *Medidas para la promoción de la transparencia en los procesos electorales *Medidas de transparencia para la asignación de la pauta oficial
	GARANTÍAS PARA LA RECONCILIACIÓN, LA CONVIVENCIA, LA TOLERANCIA Y LA NO ESTIGMATIZACIÓN, ESPECIALMENTE POR RAZÓN DE LA ACCIÓN POLÍTICA SOCIAL EN EL MARCO DE LA CIVILIDAD.	REFORMA DEL RÉGIMEN Y DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL
	CONTROL Y VEEDURÍA CIUDADANA.	PROMOCIÓN DE UNA CULTURA POLÍTICA, DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA
	POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA.	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA DE LA MUJER EN EL MARCO DEL PRESENTE ACUERDO
		CREACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO PARA DAR ACCESO A MEDIOS A LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Acuerdo Final para la Paz (2016).

De la tabla 3 se puede observar que, aunque existe un apartado dedicado a la promoción de la transparencia, los demás puntos y sus contenidos se relacionan con este. Para comprender cómo funciona esta relación es indispensable analizar los diversos delitos electorales, así como las acciones que van en contravía de la promoción de la transparencia en las elecciones.

POSIBLES DELITOS ELECTORALES

El Valle del Cauca, en su historia reciente, ha evidenciado diferentes delitos electorales, donde los poderes locales y los grupos armados, ya sea en una actuación conjunta o por separado, son los principales responsables. Ejemplo de ello es el caso del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien fue condenado por Parapolítica en 2009, y en 2016 se le da una segunda condena por intento de fraude electoral en las elecciones atípicas de la Gobernación del Valle en 2012 (El Espectador, 2016).

Delitos preelectorales.

Muchos de los delitos preelectorales se encuentran directamente relacionados con el accionar violento de los diversos grupos armados y sus intereses. Cabe aclarar que desde finales de la década de los 90, la lógica de las actuaciones de los grupos armados en las contiendas electorales ha cambiado, es decir, pasaron de generar obstrucción y de impedir que se realicen las votaciones, a desarrollar lo que se conoce como clientelismo armado.

El término *clientelismo armado* hace referencia al accionar de un grupo armado como intermediario entre la población civil y un candidato. Esta “intermediación” surge de un acuerdo entre el actor armado y el contendor electoral, donde a partir del uso de la violencia, se obliga a la población a votar por el candidato que hace parte de la alianza que han concretado al inicio de la campaña electoral (Gallego, 2018). El fenómeno de la parapolítica es un ejemplo de ello, puesto que a partir de este modelo clientelar, los grupos paramilitares se introdujeron en la política local colombiana (Rodríguez, 2008).

A partir del año 2010 otros grupos armados, como las guerrillas, empezaron hacer uso de esta modalidad, donde permitían que se realizaran las elecciones de forma plena, para garantizar las votos al candidato aliado. Es así como logran que las autoridades políticas locales elegidas, no se inmiscuyan o les permitan desarrollar sus acciones como grupos al margen de la ley, e incluso, se mantengan estas relaciones después de la contienda electoral (Avila y Velazco, 2012).

Ahora bien, dentro de los delitos pre electorales cometidos por estos grupos alzados en armas, se encuentra la prohibición de algunos candidatos de hacer campaña en determinados territorios, así como amenazas a estos cuando intentan hacerlo. Esto es evidente en la alerta temprana N° 004-2022 de la Defensoría del Pueblo, donde se indica que diferentes

grupos armados han amenazado a militantes o sedes del partido Comunes en el Valle del Cauca.

Este delito entendido como *constreñimiento al sufragante*, busca por medio de la intimidación a ciudadanos o candidatos, no sólo privar al partido de conseguir electores a su favor, sino, también, demostrar el poder que aún mantienen ciertos actores armados sobre el territorio.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo que estipula el Punto 2 del AP acerca de la protección para el ejercicio político y electoral, existe un evidente incumplimiento de las garantías de seguridad de los y las excombatientes, ya que aunque existe un sistema de alertas tempranas, no se ha logrado dismantelar los grupos armados que amenazan el accionar político. Esto, a su vez, está afectando la transparencia electoral del departamento.

La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral-URIEL, instancia encargada de la recepción, análisis y traslado de las quejas y denuncias en contra de los procesos electorales a las autoridades competentes, que hacen parte de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales del Orden Nacional (2021), las cuales tienen competencia para realizar investigaciones penales, disciplinarias, fiscales, administrativas y otras acciones públicas por irregularidades en contra del proceso electoral, presentó en su último informe para el Valle del Cauca los siguientes delitos, que se pueden categorizar como pre electorales:

TABLA 4
DELITOS ELECTORALES 2021 EN EL VALLE DEL CAUCA

DELITO ELECTORAL	MUNICIPIOS
INTERVENCIÓN EN POLÍTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	Cali
	Candelaria
IRREGULARIDADES POR PARTE DE LOS REGISTRADORES	Cali
	Candelaria
CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE	Ulloa

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de URIEL (2021).

Dichos delitos indican la puesta en marcha de *maquinarias* locales para la manipulación electoral en función de sus propios intereses. Las maquinarias son un sistema de redes conformado por organizaciones políticas, cuyo objetivo principal es conseguir o movilizar votos por un candidato específico. Las redes son una cadena multidireccional que conecta a los individuos, grupos o instituciones en varias

esferas: la política, económica y social, y que de acuerdo a sus características crean vínculos (Gribaudo, 1998).

No obstante, la existencia de estas maquinarias o redes no representa un delito per se, el dilema se encuentra en cómo se constituyen y se utilizan. Muchas de estas se generan a partir del clientelismo, la compra de votos u otros mecanismos. En el caso colombiano, es muy común el intercambio de votos por servicios, lo que puede llevar a que se efectúen delitos electorales con tal de conseguir el servicio que se ha prometido.

Este tipo de redes trabajan con mucha antelación a las elecciones, buscando las personas adecuadas que les puedan ayudar a cumplir sus objetivos. Ejemplo de ello son los registradores, puesto que pueden cambiar los *padrones electorales*, es decir, que son capaces de inscribir una cantidad de votantes en ciertos puestos de votación de acuerdo a la necesidad de un candidato para adquirir más sufragantes. Este es el caso de la Resolución No. 5365 de 2019 del Consejo Nacional, con esta resolución se cancelaron un total de 37396 nuevas inscripciones de cédulas entre los municipios de Ansermanuevo, Bolívar, Buenaventura, Guadalajara de Buga, Caicedonia, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, Obando, Pradera, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Yotoco, Yumbo y Zarzal por inscripción irregular durante octubre el 2018 para las elecciones que se darían en octubre del año 2019; demostrando hasta dónde pueden llegar este tipo de maquinarias y cómo los votos se convierten en mercancía.

Teniendo en cuenta los delitos preelectorales en el Valle del Cauca, se puede observar que, el constreñimiento al sufragante es uno de los delitos que más afecta al AP y la transparencia electoral, debido al uso de la violencia, la intimidación y la prohibición de participación libre en el territorio. Esto, causado por la ineficacia estatal al no poder dismantelar los diferentes grupos armados y criminales que permanecen dentro de algunos municipios que limitan el ejercicio político, a la vez que persisten maquinarias con métodos fraudulentos para conseguir votos, lo que sugiere que las técnicas que se están utilizando para frenar este tipo de acciones son poco efectivas.

Delitos electorales.

Ahora bien, la MOE (2022) a través de su plataforma “Pilas con el voto” releva los datos de las denuncias realizadas en el Valle de Cauca durante el presente año en las

contiendas electorales. Cabe aclarar que estas son solo denuncias, por lo que no implican que sean delitos, investigaciones, o desarrollo de procesos legales.

TABLA 5
REPORTES POR TIPO DE IRREGULARIDAD

TIPO DE IRREGULARIDAD	REPORTES
QUEJAS CONTRA JURADOS DE VOTACIÓN	103
IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LOS ESCRUTINIOS	54
CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE	52
VIGILANCIA DEL PROCESO ELECTORAL	50
INTERVENCIÓN EN POLÍTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	48
TOTAL GENERAL	307

Nota. Fuente: URIEL (2022), sobre elecciones legislativas en el Valle del Cauca.

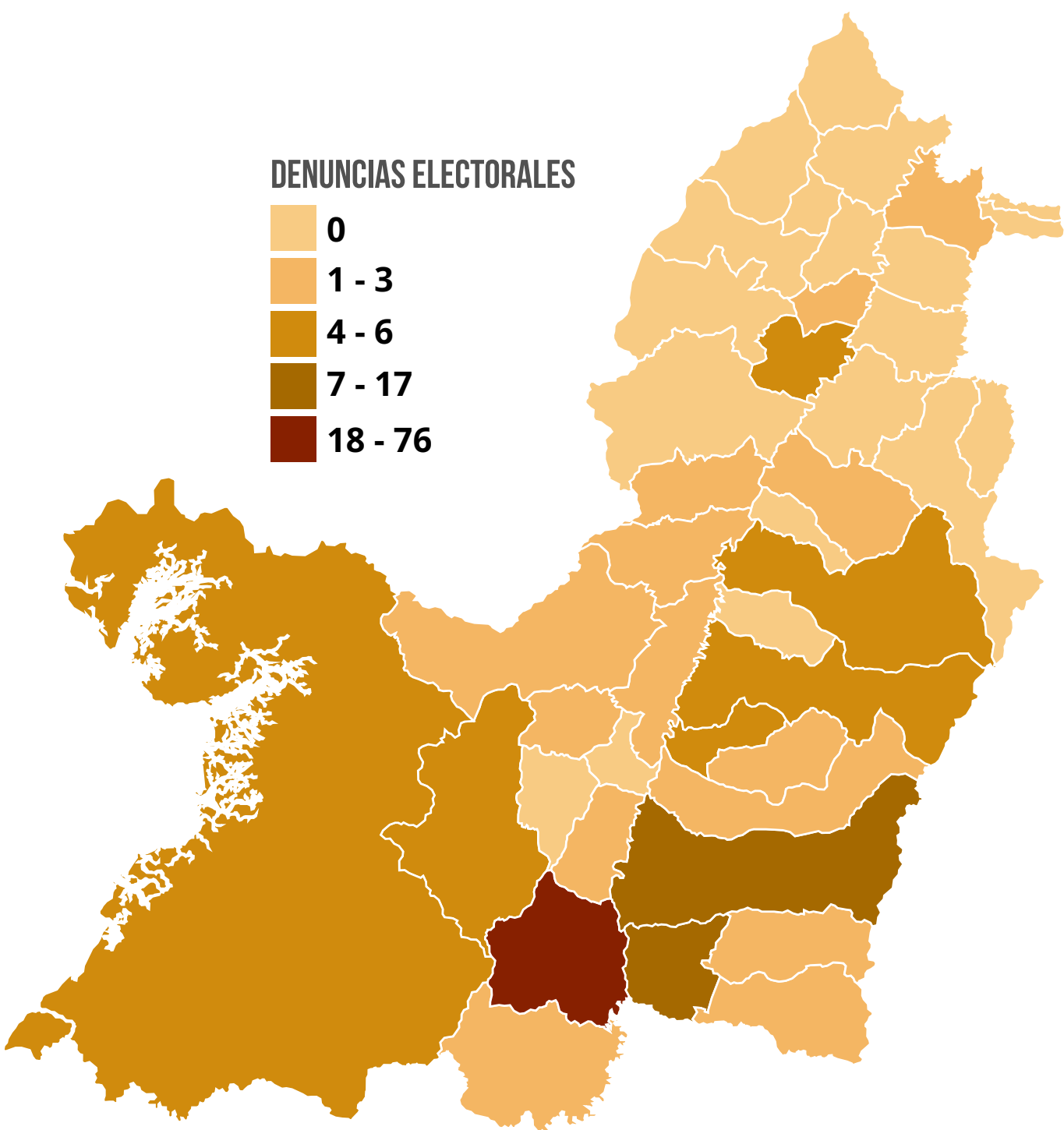
Teniendo en cuenta los datos suministrados por URIEL(2022) y el informe de la MOE (2022), existen tres fenómenos que constituyen el grueso de las denuncias en el Valle del Cauca:

- ✓ En términos de irregularidades de las autoridades electorales, se presentaron 3 fenómenos generales: incumplimiento de procedimientos electorales por parte de los jurados de votación; problemas en la conformación del censo electoral con ciudadanos que al llegar al puesto de votación encuentran que no están incluidos en el registro de votantes de su puesto; y obstáculos para el ejercicio del derecho al voto, como la negativa para entregar el tarjetón solicitado por el votante, o la entrega no deseada del mismo.
- ✓ Las irregularidades en el conteo de votos y escrutinios tienen que ver con los errores en la transmisión de datos de los E-14, así como errores en su diligenciamiento y en la suma aritmética de los votos.
- ✓ (Y) Las irregularidades en el voto libre comprenden 12 de constreñimiento al sufragante, y 18 de corrupción de sufragante, que en casi todos los casos se materializa a través de la compra de votos a cambio de una suma de dinero. (MOE, 2022, p. 2)

El primer fenómeno que presenta la MOE (2022), solo indica que se presentó el delito de *fraude al sufragante*, puesto que las denuncias revelan los obstáculos para el ejercicio del voto o la búsqueda de engañar al votante, entendiendo que estas solo reflejan que se intentó cometer este hecho, pero se desconoce el número total en las que la obstaculización o el engaño se realizaron y no fueron denunciados.

Lo mismo sucede en los casos de *constreñimiento al sufragante* y *corrupción al sufragante* en los que existe denuncia, pues solo demuestran que se mantienen los patrones de compra y venta de votos en los diferentes municipios del Valle del Cauca, pero resulta complejo determinar la magnitud del delito y cuántas personas participaron de esto.

FIGURA 1
MAPA DE CALOR DE ACUERDO CON NÚMERO DE DENUNCIAS ELECTORALES



Nota. La figura 1 muestra el mapa de calor de acuerdo a la cantidad de denuncias electorales en el Valle del Cauca. Fuente: Gobernación del Valle del Cauca (2022).

Por otra parte, las irregularidades en cuanto al conteo de votos pueden agrupar dos fenómenos: el delito de alteración de resultados por parte de los jurados, intentando beneficiar a un candidato en específico, y errores de diligenciamiento por posible falta de capacitación de los jurados. También, si se revisan los reportes por municipios que presenta la MOE y URIEL, se evidencia que la mayoría de las denuncias se dan en la ciudad de Cali.

Lo anterior no implica que en la ciudad sea donde se presentan más casos de delitos electorales, ya que la cantidad de denuncias puede deberse a factores como:

- Mayor cantidad de veedores.
- Mayor información en cuanto a los delitos electorales.
- Acceso a los canales de denuncias.
- Facilidad de acceso a los puntos de atención.

Igualmente, sugiere que las medidas de transparencia electoral descritas en el AP, no se están implementando correctamente, siendo poco eficaces, debido a la concentración de los mecanismos de prevención y denuncia en los cascos urbanos del departamento. Lo anterior, causado por diversos asuntos como: las voluntades políticas, maquinarias políticas, presencia de grupos armados, apatía institucional, entre otros, lo que lleva a la naturalización de delitos electorales en los municipios con menor acceso a los mecanismos mencionados, generando pocas denuncias.

CIFRAS RELEVANTES

Cedulación masiva

Dentro de los criterios relevantes que se deben tener en cuenta para un proceso electoral transparente, se encuentra el proceso de inscripción de las y los ciudadanos en los puntos de votación. Este proceso es realizado por la Registraduría Nacional un año antes de la contienda electoral y se extiende hasta dos meses antes de las mismas.

Conocer el número de personas que cambiaron su puesto de votación, ya fuese dentro del mismo municipio o hacia otros municipios del departamento, puede dar un atisbo sobre la existencia o no de delitos como la trashumancia electoral o también conocido como el trasteo de votos o electores, entendiendo esta como la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside o trabaja (CNE, 2019), con el fin de beneficiar a un candidato que haya promovido esta acción por beneficios cuando fuese elegido. Como se mencionó en apartados anteriores, este tipo de acciones se construyen a partir de redes o maquinarias que giran en torno al clientelismo. Cabe aclarar que para conocer más a fondo la existencia o no de un delito como este con base en datos de cedulación e inscripción, es importante analizar los puntos de votación que más movimiento tuvieron respecto al censo anterior.

Para las elecciones legislativas del presente año, en el Valle del Cauca, el porcentaje de cédulas inscritas en el periodo comprendido entre marzo 13 de 2021 y el 13 de enero de 2022, respecto al total del censo electoral corresponde al 7,71%. Cabe resaltar que esta cifra solo representa las cédulas que fueron inscritas en este periodo de tiempo por cambio de puesto de votación, y no da cuenta de las nuevas cédulas que se emiten por parte de la Registraduría y que se integran al censo electoral automáticamente.

Se puede observar que el número de cédulas inscritas para las elecciones legislativas, no supera el 15% del censo electoral de cada municipio, y se destacan municipios como Ulloa y Vijes, donde alcanzan el 7,38% y el 7,55% respectivamente, a pesar de su extensión territorial y censo electoral. Sin embargo, esta cifra no es representativa para ninguno de los municipios, ya que no supera el 10% de la población registrada para votar.

TABLA 6
INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS FINAL DESDE EL 13 DE MARZO DE 2021 HASTA EL 13 DE ENERO DE 2022

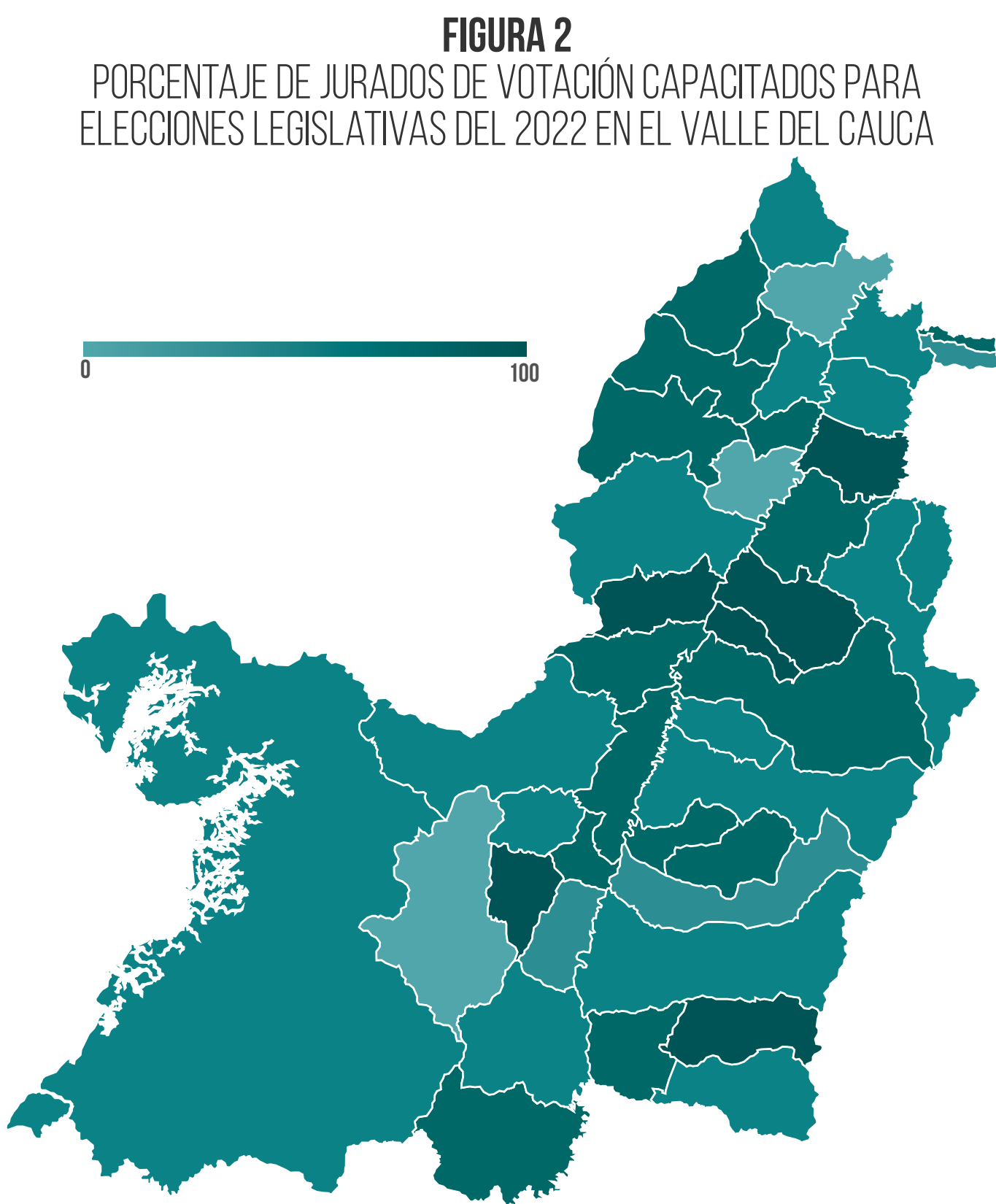
MUNICIPIOS	PAPEL	SISTEMATIZADO		TOTAL INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS	CENSO ELECTORAL	PORCENTAJE DE CÉDULAS INSCRITAS SOBRE CENSO ELECTORAL
		PRESENCIAL	WEB			
CALI	238	33.631	147.365	181.234	1.787.424	10,14%
ALCALÁ	0	231	292	523	12.061	4,34%
ANDALUCÍA	0	322	526	848	19.750	4,29%
ANSERMANUEVO	0	335	296	631	19.318	3,27%
ARGELIA	0	87	43	130	6.195	2,10%
BOLÍVAR	0	126	294	420	13.339	3,15%
BUENAVENTURA	3.763	2.020	4.512	10.295	233.197	4,41%
BUGA	52	1.850	2.942	4.844	106.876	4,53%
BUGALAGRANDE	0	299	1.013	1.312	20.295	6,46%
CAICEDONIA	15	294	421	730	28.065	2,60%
CALIMA (DARIÉN)	0	297	388	685	14.813	4,62%
CANDELARIA	227	970	4.557	5.754	76.381	7,53%
CARTAGO	37	2.673	3.312	6.022	118.733	5,07%
DAGUA	0	384	1.050	1.434	36.872	3,89%
EL ÁGUILA	0	107	97	204	7.883	2,59%
EL CAIRO	0	116	70	186	6.725	2,77%
EL CERRITO	0	413	1.664	2.077	54.230	3,83%
EL DOVIO	0	109	68	177	10.189	1,74%
FLORIDA	483	523	1.698	2.704	53.668	5,04%
GINEBRA	0	473	394	867	18.171	4,77%
GUACARÍ	0	371	421	792	29.434	2,69%
JAMUNDÍ	296	2.135	8.671	11.102	112.351	9,88%
LA CUMBRE	0	665	328	991	13.495	7,36%
LA UNIÓN	0	341	421	762	27.618	2,76%
LA VICTORIA	0	123	120	243	11.778	2,06%
OBANDO	0	212	179	391	11.310	3,46%
PALMIRA	44	5.975	17.565	23.584	279.796	8,43%
PRADERA	501	523	916	1.940	41.912	4,63%
RESTREPO	0	288	253	541	16.016	3,38%
RIOFRÍO	0	254	219	473	15.897	2,98%
ROLDANILLO	0	493	978	1.471	30.259	4,86%
SAN PEDRO	0	236	256	492	15.023	3,27%
SEVILLA	8	582	646	1.236	37.914	3,26%
TORO	0	146	131	277	12.849	2,16%
TRUJILLO	0	242	336	578	16.597	3,48%
TULUÁ	43	2.577	5.551	8.171	170.671	4,79%
ULLOA	0	216	149	365	4.944	7,38%
VERSALLES	1	130	105	236	7.827	3,02%
VIJES	0	309	514	823	10.903	7,55%
YOTOCO	0	371	420	791	14.998	5,27%
YUMBO	0	1.399	3.924	5.323	104.770	5,08%
ZARZAL	0	411	797	1.208	38.821	3,11%
TOTAL				282.869	3.669.369	
PORCENTAJE DE NUEVAS CÉDULAS INSCRITAS RESPECTO AL CENSO ELECTORAL				7,71%		

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

Jurados de votación

Como se explicó en puntos anteriores, la presencia de jurados de votación es un asunto relevante para la transparencia de los procesos electorales. De acuerdo con la Registraduría (2022), los jurados de votación son los protagonistas de las elecciones, ya que de ellos depende en buena parte la transparencia de los comicios, así como la velocidad en la información de los resultados.

Un número alto de jurados capacitados, se podría interpretar como mayor garantía en los comicios electorales, pues parte de sus funciones radica en la vigilancia del proceso para que la votación se realice de forma adecuada en cada una de las mesas y puntos. El número reducido de jurados capacitados puede incurrir en delitos electorales, ya que la falta de conocimiento sobre procedimientos, derechos y deberes del sufragante y del jurado en sí, puede representar una vulnerabilidad en el ejercicio del derecho al voto.



Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

Se puede observar en el mapa anterior, que el porcentaje de jurados capacitados en los municipios del Valle del Cauca no obedece a impedimentos en los factores geográficos, ya que en las principales ciudades del departamento, con mayor acceso y cantidad de puntos de capacitación, se observa un porcentaje no superior al 80% del total de jurados designados.

Al analizar este tipo de datos se puede interpretar que, aquellos municipios con un bajo índice de participación en las

capacitaciones por parte de los jurados, puede derivar en posibles irregularidades por errores humanos debido a la falta de conocimiento de los procedimientos electorales.

Al observar los tipos de irregularidades registrados en las elecciones legislativas de 2022, con base en los datos de URIEL (2022) (Ver tabla 5), en relación con la presencia y accionar de los jurados de votación, 103 de las 307 irregularidades registradas en el Valle del Cauca corresponden a quejas contra jurados de votación.

Ahora bien, teniendo en cuenta el informe de la MOE (2022), respecto a aquellas irregularidades ligadas al accionar de los jurados como la suma y conteo de votos, tiene en gran medida su causa en la falta de conocimiento sobre los procedimientos para registro de votos y número de votantes en los formularios E-11 y E-14. Las irregularidades al derecho del voto libre, se pueden ver representadas en acciones como entrega errónea del tarjetón que los electores solicitaban (en el caso de las circunscripciones especiales); la entrega del tarjetón ordinario y el de la circunscripción especial juntos; o en el caso de las consultas partidistas, se reportó la no entrega del tarjetón cuando se solicitaba, la entrega del mismo sin que el elector lo hiciera, así como la entrega del tarjetón de una consulta diferente a la solicitada.

Aunque todas estas irregularidades pueden estar ligadas a la falta de capacitación, se desconoce la intencionalidad de los jurados en el momento de cometer dichas acciones que fueron registradas por la MOE y URIEL, es decir, que no se puede concluir que fueron realizadas con la intención de cambiar los resultados electorales, o si solo fueron errores aleatorios causados por la falta de conocimiento. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, la existencia de este tipo de irregularidades por parte de los jurados, no promueven la transparencia del proceso electoral.

Al analizar el mapa sobre el número de irregularidades registradas y compararlo con el porcentaje de jurados capacitados, se puede observar la tendencia que, aquellos municipios con menor cantidad de registros, corresponden a aquellos con una mayor cantidad de jurados capacitados.

TABLA 7
JURADOS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
DEL 2022 EN EL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIOS	JURADOS	JURADOS CAPACITADOS	PORCENTAJE DE JURADOS CAPACITADOS
DAGUA	784	268	34,18%
ALCALÁ	326	144	44,17%
YUMBO	2.200	996	45,27%
ROLDANILLO	686	366	53,35%
EL CERRITO	1.085	594	54,75%
ANSERMANUEVO	438	255	58,22%
BOLÍVAR	296	184	62,16%
CARTAGO	3.205	2.006	62,59%
RESTREPO	278	176	63,31%
SEVILLA	760	504	66,32%
TORO	256	174	67,97%
CALI	32.875	23.000	69,96%
BUENAVENTURA	4.523	3.225	71,30%
EL ÁGUILA	189	138	73,02%
CALIMA	277	208	75,09%
OBANDO	131	100	76,34%
SAN PEDRO	343	270	78,72%
BUGA	2.151	1.702	79,13%
PALMIRA	5.468	4.334	79,26%
CAICEDONIA	582	468	80,41%
FLORIDA	948	767	80,91%
CANDELARIA	1.505	1.234	81,99%
JAMUNDÍ	2.107	1.730	82,11%
TULUÁ	3.305	2.799	84,69%
ULLOA	121	103	85,12%
LA UNIÓN	567	483	85,19%
ZARZAL	764	660	86,39%
EL CAIRO	163	141	86,50%
ARGELIA	126	109	86,51%
VERSALLES	199	174	87,44%
YOTOCO	331	293	88,52%
GUACARÍ	593	526	88,70%
RIOFRÍO	328	291	88,72%
VIJES	243	216	88,89%
EL DOVIO	250	224	89,60%
GINEBRA	374	336	89,84%
ANDALUCÍA	393	358	91,09%
TRUJILLO	362	331	91,44%
BUGALAGRANDE	442	409	92,53%
LA VICTORIA	248	231	93,15%
LA CUMBRE	289	273	94,46%
PRADERA	819	783	95,60%

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

Puestos de votación

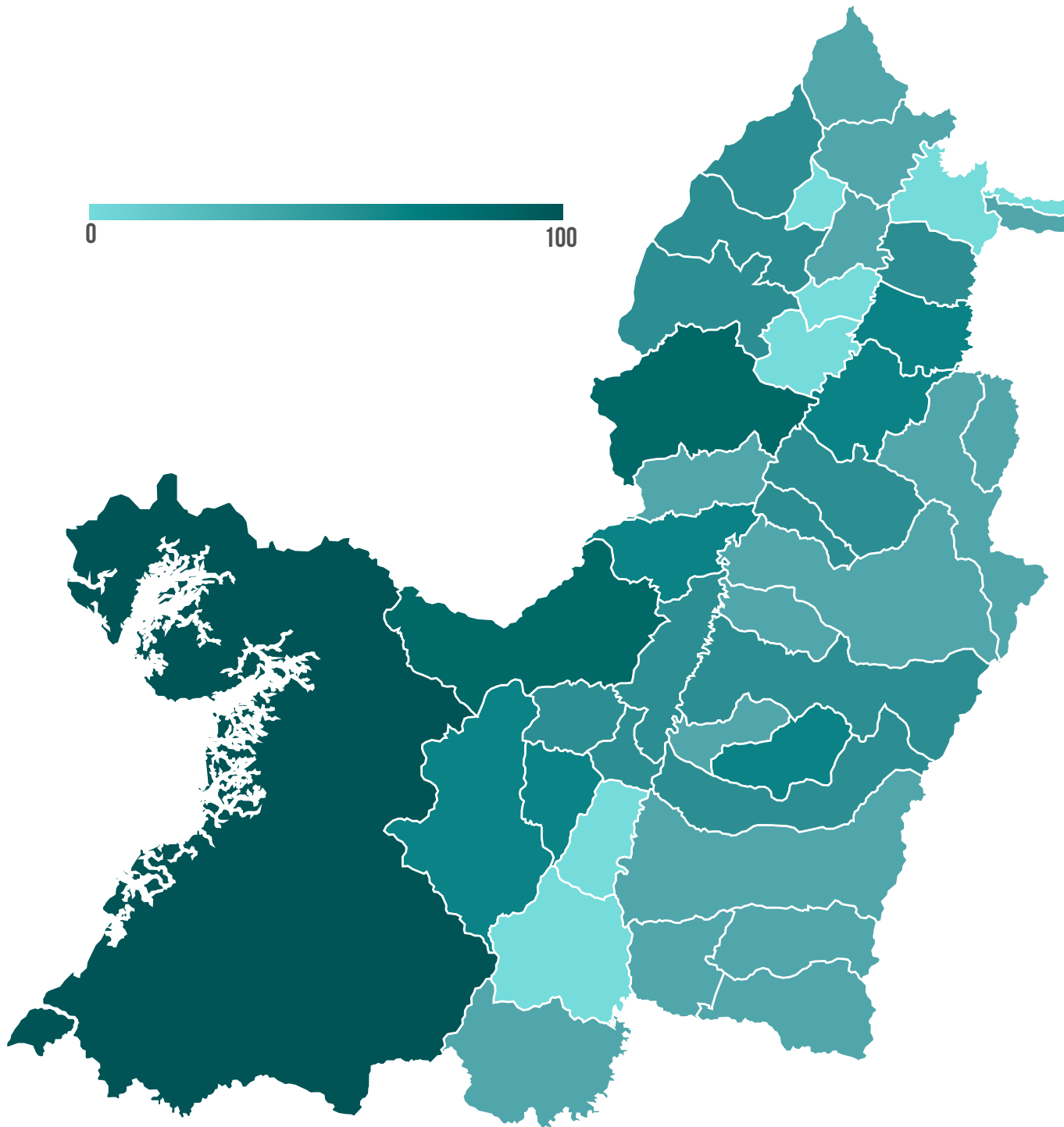
El acceso fácil y oportuno a los puestos de votación es un punto esencial para garantizar un proceso electoral transparente, ya que este puede ser un ámbito decisivo para promover la participación ciudadana, y también en la veeduría de los procesos electorales.

Tomando en cuenta lo mencionado en el AP para la promoción de la transparencia electoral se debe:

Apoyar la gestión que la organización electoral adelante para estimular y

facilitar la participación electoral de las poblaciones más vulnerables y más apartadas (rurales, marginadas, desplazadas y víctimas), y en particular: promover un ejercicio ampliamente participativo de diagnóstico con enfoque de género, de los obstáculos que enfrentan estas poblaciones en el ejercicio del derecho al voto, y adoptar las medidas correspondientes. O Adoptar mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas. (Acuerdo de Paz, p. 51, 2016)

FIGURA 3
RELACIÓN PUESTOS DE VOTACIÓN POR KM2 EN LOS MUNICIPIOS
DEL VALLE DEL CAUCA



Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

En el mapa se puede observar la concentración de los puestos de votación por Km² en los municipios del departamento, evidenciando que Cali y Yumbo, a pesar de ser dos de las ciudades más grandes, son las que menos cobertura tienen por Km², mientras que Buenaventura, siendo el municipio más extenso del territorio del Valle del Cauca, concentra mayor número de puestos de votación respecto a su área territorial.

TABLA 8
RELACIÓN PUESTOS DE VOTACIÓN POR KM² EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIOS	CENSO ELECTORAL	PUESTOS DE VOTACIÓN	MESAS	ÁREA DEL MUNICIPIO (KM ²)	PUESTOS DE VOTACIÓN POR KM ²
CALI	1.787.424	190	4969	619	3,3
YUMBO	104.770	34	304	228	6,7
ULLOA	4.944	6	18	42	7,1
ROLDANILLO	30.259	29	102	217	7,5
CARTAGO	118.733	33	347	279	8,5
LA UNIÓN	27.618	13	85	125	9,6
ARGELIA	6.195	9	21	87	9,7
EL ÁGUILA	7.883	19	34	199	10,5
CAICEDONIA	28.065	16	87	170	10,6
FLORIDA	53.668	31	158	378	12,2
PRADERA	41.912	32	127	407	12,7
TRUJILLO	16.597	17	56	221	13,0
PALMIRA	279.796	86	823	1123	13,1
GUACARÍ	29.434	12	89	167	13,9
CANDELARIA	76.381	21	217	303	14,4
JAMUNDÍ	112.352	37	323	577	15,6
ALCALÁ	12.061	4	36	64	15,9
TULUÁ	170.671	56	497	911	16,3
TORO	12.849	12	44	199	16,6
ANSERMANUEVO	19.318	19	64	346	18,2
SEVILLA	37.914	33	113	640	19,4
SAN PEDRO	15.023	14	51	279	19,9
OBANDO	11.310	10	36	213	21,3
VIJES	10.903	10	36	214	21,4
BUGA	106.876	38	310	832	21,9
VERSALLES	7.827	16	32	352	22,0
RESTREPO	16.016	14	55	325	23,2
ANDALUCÍA	19.750	7	59	168	24,0
EL CERRITO	54.230	19	163	466	24,5
YOTOCO	14.998	13	49	321	24,7
BUGALAGRANDE	20.295	15	66	374	24,9
EL CAIRO	6.725	11	24	283	25,7
EL DOVIO	10.189	14	37	383	27,4
ZARZAL	38.821	12	115	362	30,2
RIOFRÍO	15.897	9	49	280	31,1
LA CUMBRE	13.495	8	43	253	31,6
DAGUA	36.872	28	119	886	31,6
GINEBRA	18.171	9	56	313	34,8
LA VICTORIA	11.778	7	37	276	39,4
BOLÍVAR	13.339	15	46	780	52,0
CALIMA (DARIÉN)	14.813	19	52	1154	60,7
BUENAVENTURA	233.197	84	679	6078	72,4
TOTAL	3.669.369	1.081	10.628		

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

Si bien la distribución de los puntos de votación en el área de cada municipio es una muestra importante sobre el acceso a estos, es necesario conocer si tienen relevancia en la efectividad de la participación de las personas en el proceso electoral. Al examinar el porcentaje de participación de cada municipio, respecto a la distribución de los puestos de votación en el área de los mismos, se puede observar que no tienen una relación directa o proporcional.

Retomando el caso de las ciudades con menor cantidad de puestos de votación por Km², respecto a su participación (Ver tabla 9),

ambas se encuentran por encima del 40%, mientras que municipios con un alto porcentaje de puntos de votación, como Buenaventura, tienen una participación menor del 35%.

De esto se puede concluir que, aunque el acceso a los puntos de votación es parte de las garantías que se tienen para un proceso electoral transparente, la cantidad determinada de estos en el área de un municipio, no influencia el porcentaje de participación de los votantes.

TABLA 9
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL POR MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA EN LAS ELECCIONES
LEGISLATIVAS 2022

MUNICIPIOS	SENADO			CÁMARA		
	CENSO ELECTORAL	VOTANTES	PORCENTAJE DE VOTANTES	CENSO ELECTORAL	VOTANTES	PORCENTAJE DE VOTANTES
CALI	1.787.424	748.268	41,86%	1.787.424	780.873	43,69%
ALCALÁ	12.061	5.710	47,34%	12.061	5.920	49,08%
ANDALUCÍA	19.750	9.848	49,86%	19.750	9.732	49,28%
ANSERMANUEVO	19.318	6.680	34,58%	19.318	6.830	35,36%
ARGELIA	6.195	2.457	39,66%	6.195	2.417	39,02%
BOLÍVAR	13.339	5.913	44,33%	13.339	6.201	46,49%
BUENAVENTURA	233.197	79.976	34,30%	233.197	80.021	34,31%
BUGA	106.876	49.237	46,07%	106.876	51.932	48,59%
BUGALAGRANDE	20.295	10.572	52,09%	20.295	10.603	52,24%
CAICEDONIA	28.065	11.308	40,29%	28.065	11.051	39,38%
CALIMA (DARIÉN)	14.813	5.915	39,93%	14.813	5.767	38,93%
CANDELARIA	76.381	36.857	48,25%	76.381	39.742	52,03%
CARTAGO	118.733	52.248	44,00%	118.733	52.135	43,91%
DAGUA	36.872	14.039	38,07%	36.872	14.094	38,22%
EL ÁGUILA	7.883	3.152	39,98%	7.883	3.051	38,70%
EL CAIRO	6.725	2.519	37,46%	6.725	2.677	39,81%
EL CERRITO	54.230	23.523	43,38%	54.230	23.432	43,21%
EL DOVIO	10.189	3.457	33,93%	10.189	3.626	35,59%
FLORIDA	53.668	24.577	45,79%	53.668	26.028	48,50%
GINEBRA	18.171	8.895	48,40%	18.171	8.572	47,17%
GUACARÍ	29.434	14.743	50,09%	29.434	16.504	56,07%
JAMUNDÍ	112.352	48.004	42,73%	112.352	49.671	44,21%
LA CUMBRE	13.495	6.100	45,20%	13.495	6.1189	45,86%
LA UNIÓN	27.618	12.128	43,91%	27.618	12.186	44,12%
LA VICTORIA	11.778	5.146	43,69%	11.778	5.190	44,07%
OBANDO	11.310	5.478	48,44%	11.310	5.559	49,15%
PALMIRA	179.796	123.468	44,13%	179.796	127.274	45,49%
PRADERA	41.912	20.071	47,89%	41.912	20.107	47,97%
RESTREPO	16.016	5.946	37,13%	16.016	5.891	36,78%
RIOFRÍO	15.897	6.794	42,74%	15.897	6.955	43,75%
ROLDANILLO	30.259	15.164	50,11%	30.259	14.751	48,75%
SAN PEDRO	15.023	7.077	47,11%	15.023	7.100	47,26%
SEVILLA	37.914	15.389	40,59%	37.914	15.357	40,50%
TORO	12.849	5.865	45,65%	12.849	5.829	45,37%
TRUJILLO	16.597	6.870	41,39%	16.597	6.928	41,74%
TULUÁ	170.671	77.978	45,69%	170.671	77.908	45,65%
ULLOA	4.944	2.681	54,23%	4.944	2.617	52,93%
VERSALLES	7.827	2.996	38,28%	7.827	2.882	36,82%
VIJES	10.903	5.332	48,90%	10.903	5.567	51,06%
YOTOCO	14.998	6.730	44,87%	14.998	6,773	45,16%
YUMBO	104.770	50.817	48,50%	104.770	52.155	49,78%
ZARZAL	38.821	19.167	49,37%	38.821	19.657	50,63%

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

La relevancia de las veedurías y acciones ciudadanas

Para Mark Payne (2003), la consolidación de la democracia implica mayores beneficios para los derechos políticos, a la vez que propende por la participación ciudadana sobre la toma de decisiones y otros asuntos de índole pública. Se trata entonces de considerar que, cualquiera que sean los obstáculos o limitaciones en el diseño democrático, la ciudadanía debe tener la posibilidad de exigir a quienes ejercen o aspiran ejercer cargos públicos, la rendición de cuentas y la evaluación permanente de sus intereses en la competencia electoral.

Por este motivo es que las veedurías ciudadanas, así como los movimientos de observación electoral, se vuelven relevantes para la garantía de los procesos electorales. Ello también se reconoce en el AP, en el que se promueve la formación y pedagogía de los ciudadanos, así como la participación de movimientos y organizaciones sociales en la vigilancia y protección de los procesos de elección popular.

Durante el documento se ha dado cuenta de las irregularidades, redes y maquinarias de votos en el departamento que impiden el desarrollo transparente de las elecciones. Aunque existe un número representativo de

quejas registradas en URIEL para el Valle del Cauca, la vigilancia se encuentra concentrada en ciudades como Cali y Palmira (ver tabla 10), dando como resultado que en los municipios pequeños o con mayor zonas rurales y de difícil acceso sea mucho más complejo registrar o denunciar los delitos electorales, lo que se puede traducir en un falso imaginario de mayor transparencia electoral.

TABLA 10
LOS CINCO MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA CON EL MAYOR NÚMERO DE QUEJAS EN LAS ELECCIONES 2022

MUNICIPIO	NÚMERO DE QUEJAS
CALI	264
PALMIRA	35
CANDELARIA	24
BUENAVENTURA	17
TULUÁ	17

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del informe URIEL (2022).

Ahora bien, como parte del seguimiento al Punto 2 del AP, es importante recalcar que dentro de los instrumentos que hacen parte de la promoción para la transparencia, la habilitación de mecanismos para facilitar la denuncias y la creación de un sistema para su seguimiento es parte vital del proceso.

Se puede destacar que el medio por el cual se recibió la mayor cantidad de quejas requiere presencia física de una persona en el puesto de votación, es decir, a través de los observadores de la MOE (ver tabla 11), lo que da cuenta de una dificultad a la hora de realizar la denuncia donde no se encuentre el personal disponible, ya fuese por falta de acceso al punto de votación o por falta de observadores. Por otro lado, los medios magnéticos y digitales por los cuales se recoge la información de las denuncias, también presentan una limitación, ya que en municipios donde no haya internet o existe una conexión débil, el uso de estos se vuelve obsoleto.

TABLA 11
MEDIOS DE RECEPCIÓN DE QUEJAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MEDIOS DE RECEPCIÓN	NÚMERO DE QUEJAS
MOE	259
WEB	94
CORREO ELECTRÓNICO	67
TELEFÓNICO	49
APP MÓVIL	6
PQRS	2
TOTAL	477

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del informe URIEL (2022).

CONCLUSIONES

Para concluir, teniendo en cuenta el análisis realizado, se puede observar que la implementación del Punto 2 del Acuerdo Final de Paz en el Valle del Cauca ha tenido un avance complejo debido a la falta de conocimiento acerca de los delitos electorales, dificultad para acceder a los medios u organismos de denuncia, déficit en el aparato Estatal para garantizar vigilancia en los territorios de difícil acceso, carencia de veedurías, y falta de procesos de observación electoral por parte de la ciudadanía.

Por otro lado, basta con analizar las cifras de abstención electoral en los municipios del departamento, que asciende a más del 70%, y el porcentaje de los jurados que asistieron a las capacitaciones, para entrever la baja participación y formación de la ciudadanía en el desarrollo de las contiendas electorales, sus delitos, y formas de preverlo y denunciarlo, como consecuencia de procesos pedagógicos insuficientes por parte de organismos estatales como el CNE, el Ministerio del Interior, la Registraduría, entre otros.

Así mismo, la falta de participación o de información respecto a la existencia de procesos ciudadanos frente a las elecciones, deja ver la carencia de una cultura electoral y política que involucre a la ciudadanía de forma activa, como salvaguarda de los procedimientos electorales, y que busque la garantía de una jornada electoral transparente.

Para finalizar, se recomienda que las instituciones con acciones misionales dirigidas al proceso electoral, sean quienes promocionen y promuevan la participación ciudadana, iniciando procesos de formación y pedagogía no solo durante el periodo electoral, sino, también, antes y después del mismo, para incentivar una cultura ciudadana activa políticamente entre los períodos legislativos. Por otro lado, también se sugiere que estos organismos hagan mayor presencia en las zonas rurales del departamento, ya que se evidenció durante el escrito, que la presencia institucional en estas zonas es débil y requiere una mayor atención, especialmente en temas de transparencia.

REFERENCIAS

ÁVILA, A. VELAZCO, J. (2012). Parapolíticos, narcos, guerrilleros y votos: revisitando el problema de la teoría democrática a partir del caso colombiano. *Papel Político*, 17(2), 371-421. Retrieved, 2022, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-44092012000200002&lng=en&tlng=es.

COLOMER, J. M. (2009). Diseño institucional para democracias duraderas: Un enfoque cuantitativo.

Defensoría del Pueblo. ALERTA TEMPRANA N° 004-2022 Documento de Advertencia por Proceso Electoral 2022

DUQUE, J. (2019). Democracia electoral fraudulenta. La trashumancia electoral como estrategia para ganar elecciones locales en Colombia. *Estudios Políticos* (Universidad de Antioquia), 55, pp. 61-86. <http://doi.org/10.17533/udea.espo.n55a04>

DUQUE, J. (2016). Las urnas contaminadas. Elecciones, fraude y manipulación en la democracia colombiana 1990-2015.

INDEPAZ, (2022). Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022 <https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/>

LEHOUCQ, F. (2007). ¿ Qué es el fraude electoral? Su naturaleza, sus causas y consecuencias. *Revista mexicana de sociología*, 69(1), 1-38.

GALLEGO, J. (2018) caracterización de clientelismo armado en entrevista concedida a Ángela Constanza Jerez, publicada en la revista Divulgación Científica de la Universidad del Rosario el 30 de agosto de 2018 y recuperada de: <http://www.urosario.edu.co/Investigacion/Divulgacion-cientifica-Ed-02-2018/Economia-y-Politica/Clientelis-mo-armado-grupos-ilegales-detras-del-tro>

MONTENCIONOS, E. Análisis del comportamiento electoral: De la elección racional a la teoría de redes. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)* [en línea]. 2007, XIII(1), 9-22[fecha de Consulta 23 de Septiembre de 2022]. ISSN: 1315-9518. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28013102Montecinos>

Egon Análisis del comportamiento electoral: De la elección racional a la teoría de redes. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)* [en línea]. 2007, XIII(1), 9-22[fecha de Consulta 23 de Septiembre de 2022]. ISSN: 1315-9518. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28013102>

PAYNE, J. M. (2003). La política importa: democracia y desarrollo en América Latina (Vol. 1). Idb.

Redacción Judicial (2016) El Espectador: Condenan a Juan Carlos Martínez Sinisterra por fraude electoral para Gobernación del Valle del Cauca recuperado en <https://www.elespectador.com/judicial/condenan-a-juan-carlos-martinez-sinisterra-por-fraude-electoral-para-gobernacion-del-valle-del-cauca-article-628446/>

REGISTRADURÍA (2022) Información jurados de votación. Elecciones Congreso de la República 2022

REGISTRADURÍA (2022) Inscripción final de cédulas. Elecciones Congreso de la República 2022

REGISTRADURÍA (2022) Censo electoral total Valle del Cauca. Votación elecciones Congreso de la República 2022

RODRIGUEZ, M. (2008)La parapolítica. La infiltración paramilitar en la clase política colombiana recuperado en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6089570>

Unidad de Recepción Inmediata para la transparencia electoral. (URIEL) INFORME 01 DE ENERO – 31 DE DICIEMBRE DE 2021. recuperado en https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/informe_final_uriel_01_enero_-_31_de_diciembre_de_2021-1-1-1.pd

Unidad de Recepción Inmediata para la transparencia electoral. (URIEL). Informe Uriel elecciones congreso de la república 2022. Consolidado hasta el 30 de agosto



CAPÍTULO 4

RESULTADOS ELECTORALES EN EL VALLE DEL CAUCA 2022

MELISSA RAMÍREZ

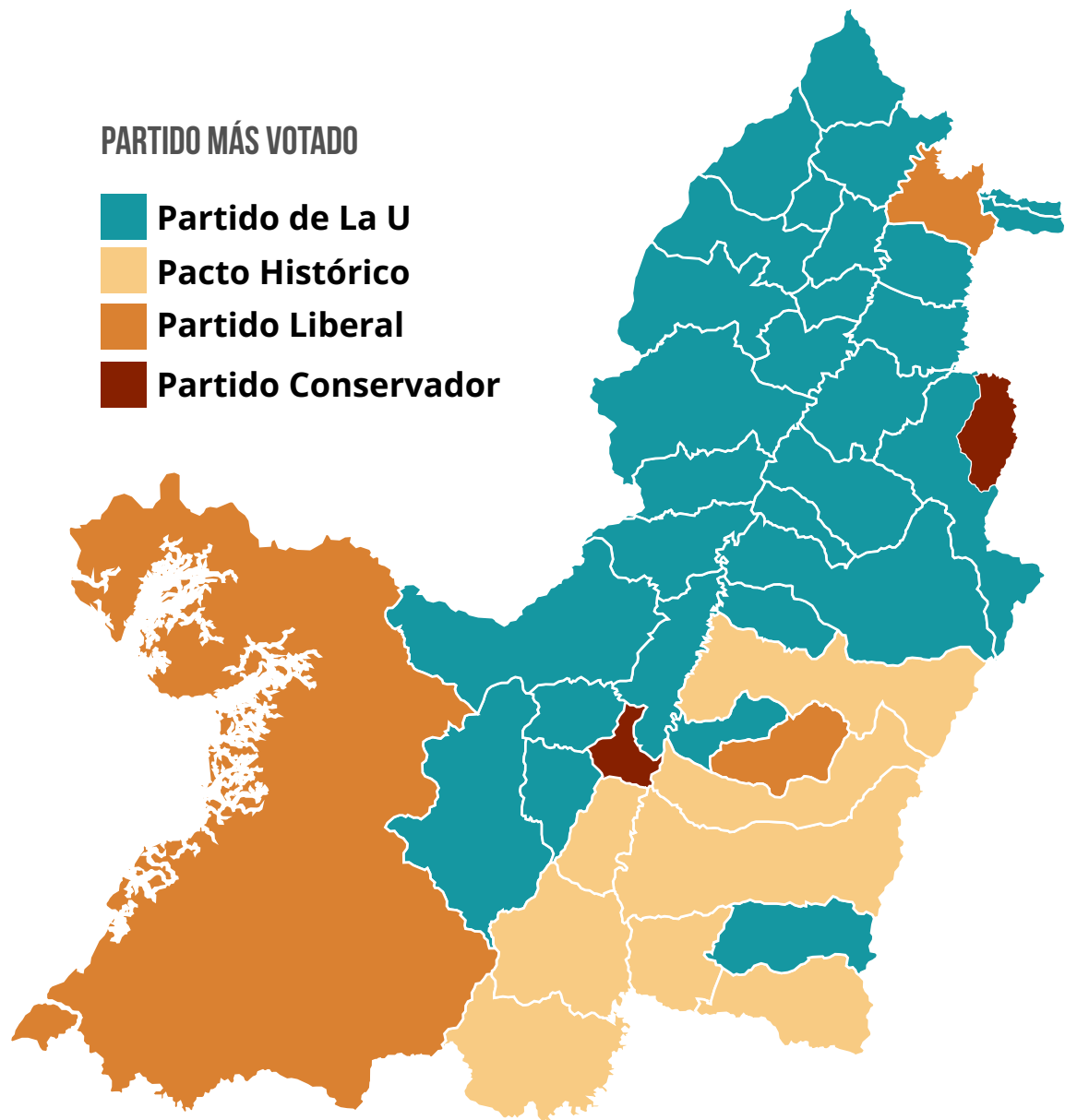
Observatorio para la Paz del Valle del Cauca
Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación

El 2022 fue un año electoral significativo para el Valle del Cauca, debido a la pandemia ocasionada por el virus de Covid-19, y al estallido social del año 2021, donde el departamento y principalmente su capital, fueron epicentros de distintas dinámicas asociadas tanto a la protesta social como a la represión policial. Tras estos hechos, los vallecaucanos ejercieron su derecho al voto para escoger a sus representantes en las circunscripciones nacionales y territoriales, así como la elección del Presidente de la República. A esto se le suma que el 2022 fue el primer año en donde se escogieron los representantes a las CTEP, como resultado de la implementación del Punto 2 del Acuerdo Final de Paz.

En este sentido, la primera parte del presente capítulo responderá a la pregunta ¿Cómo votó el Valle del Cauca en las elecciones legislativas y presidenciales del 2022? Seguidamente, se identificarán cuáles fueron los congresistas elegidos por el Valle del Cauca en las circunscripciones nacional, territorial y las CTEP 1 y 9. Se debe aclarar que el objeto de este apartado no consiste en realizar un análisis de las tendencias electorales en el Valle del Cauca, ni explicar el porqué se escogieron los candidatos ganadores, sino de presentar las cifras referente a cómo votó el departamento.

ASÍ VOTÓ EL VALLE DEL CAUCA AL SENADO DE A REPÚBLICA 2022-2026

FIGURA 1
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A SENADO 2022-2026 - PARTIDOS MÁS VOTADO POR MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA



Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

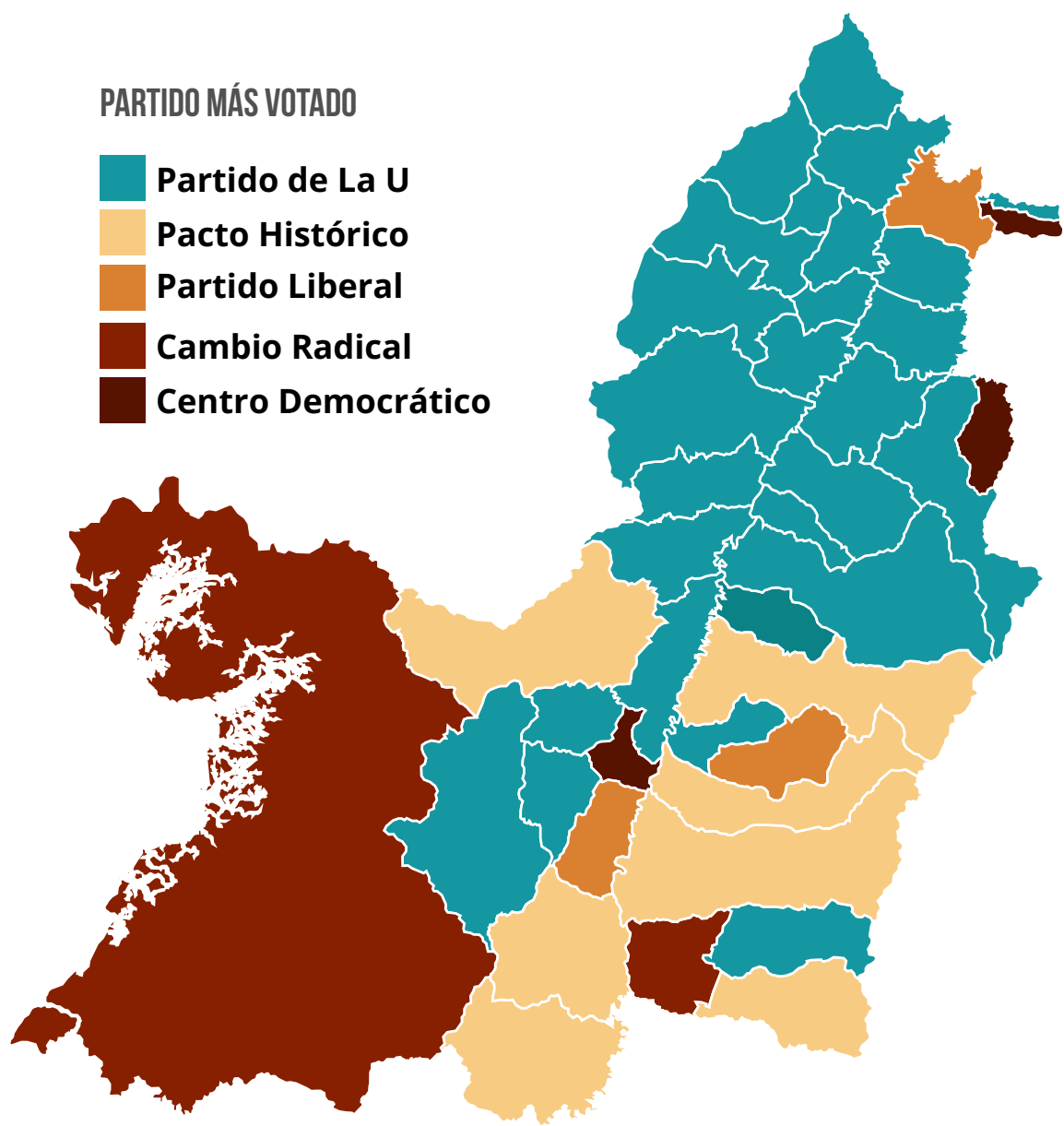
Para la **Circunscripción Nacional**, hubo un total de 1.524.491 votantes, que corresponden al 41,54% del censo electoral. La cantidad de votos no marcados fue de 38.186, de votos nulos fue de 62.954, 1.423.351 fueron votos válidos y de ellos 1.337.851 a partidos y candidatos, y 85.500 fueron por el voto en blanco.

Para la **Circunscripción Indígena**, hubo un total de 44.504 votantes. La cantidad de votos no marcados fue de 6.392, los votos nulos fueron 9.625, hubo 28.487 votos válidos, y de ellos, 15.005 a partidos y candidatos, y 13.482 en blanco.

En cuanto a los candidatos vallecaucanos electos para el Senado de la República, fueron escogidos Roy Barreras, Wilson Arias y Alexander López por el Pacto Histórico. Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y José Luis Pérez, por Cambio Radical. Juan Carlos Garcés y Norma Hurtado, por el partido de la U. Y María Fernanda Cabal fue electa por el partido Centro Democrático.

ASÍ VOTÓ EL VALLE DEL CAUCA A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 2022-2026

FIGURA 2
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 2022-2026 - PARTIDOS MÁS VOTADOS POR MUNICIPIO DEL VALLE DEL CAUCA



Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

Para la **Circunscripción Territorial Departamental**, hubo un total de 1.515.019 votantes, que corresponden al 41,28% del censo electoral. La cantidad de votos no marcados fue de 25.360, de votos nulos fue de 64.736, fueron 1.424.923 votos válidos, y de ellos 1.347.304 a partidos y candidatos, y 77.619 fueron votos en blanco.

Respecto a la distribución de curules por partidos, la Coalición del **Pacto Histórico** logró cinco con: José Alberto Tejada, Gloria Elena Arizabaleta, Cristóbal Caicedo Angulo, Alejandro Ocampo, Alfredo Mondragón

Garzón. El **Partido de la U** obtuvo tres curules con: Jorge Eliecer Tamayo, Julián David López y Víctor Manuel Salcedo. El **Partido Liberal** logró dos curules con Álvaro Monedero y Leonardo Arroyave. El **Centro Democrático** obtuvo una curul con Christian Garcés. El Partido **Alianza Verde** una curul con Duvalier Sánchez. Y el partido **Cambio Radical** una curul con Hernando González.

ELECTOS CIRCUNSCRIPCIONES TRANSITORIAS ESPECIALES DE PAZ 2022-2026

Circunscripción 1 - Alto Patía

La Circunscripción 1 comprende 24 municipios distribuidos entre los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En éste último, se encuentran los municipios de Florida y Pradera.

Toda la circunscripción tuvo un total de 97.852 votantes, de los cuales los votos no marcados fueron 12.036, los votos nulos fueron 4.870, se tuvieron 80.946 votos válidos y de ellos 72.518 a partidos y candidatos, y 8.428 fueron en blanco.

En Pradera, participaron 2.357 de 4.917 ciudadanos habilitados para votar. Se informó el 100% de las 48 mesas habilitadas, teniendo como votos no marcados 584, votos nulos 93, se registraron 1.680 votos válidos y de ellos 1.394 a partidos y candidatos, y 286 fueron en blanco. El candidato con más votaciones fue Rubén Darío Sánchez Castro, de la Fundación Observatorio De Movimientos Sociales Paces y Conflictos Wramba Fxiw, con 498 votos.

Por su parte, en Florida participaron 7.072 de 12.944 ciudadanos habilitados para votar. Se informó el 100% de las 51 mesas habilitadas, teniendo 524 votos no marcados, la cantidad de votos nulos fue de 316, 6.232 fueron votos válidos y de ellos 5.632 a partidos y candidatos, y hubo 600 en blanco. El candidato con más votaciones fue igualmente Ruben Darío Sánchez Castro del Observatorio de Movs. Soc. Paces Conflictos Wramba Fxiw, con 2.752 votos.

No obstante, por la CTEP 1 fue escogido Juan Pablo Salazar Rivera, de la Asociación Agropecuaria y Campesina ASOINTEC, con 9.310 votos. Juan Pablo obtuvo 16 votos en Pradera y 197 votos en Florida. Durante su campaña propuso impulsar una economía sostenible en los territorios, la defensa de los recursos naturales, exigir la implementación de la Reforma Rural Integral, e instar a la implementación del Acuerdo de Paz.

Circunscripción 9 - Pacífico Medio

La Circunscripción 9 comprende los territorios de Buenaventura, Guapí, López de Micay y Timbiquí, y tuvo un total de 18.319 votantes. La cantidad de votos no marcados fue de 608, de votos nulos fue de 324, se tuvieron 17.387 votos válidos y de ellos 17.143 a partidos y candidatos, y 244 fueron en blanco.

En Buenaventura, participaron 6.994 de los 27.894 ciudadanos habilitados para votar. Se informó el 48% de las mesas habilitadas, de las cuales 237 fueron votos no marcados, 151 fueron votos nulos, se tuvieron 6.606 votos válidos y de ellos 6.465 a partidos y candidatos, y se registraron 141 en blanco. La candidata con más votaciones fue Natali Córdoba Alegría del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Agua Clara, quien recibió 1.390 votos.

Para la CTEP 9 se registraron 4.950 votos, eligiendo a Orlando Castillo Advincula por el Consejo Comunitario del Río Naya, quien obtuvo tan sólo 664 votos en Buenaventura. Castillo es reconocido como líder del espacio comunitario Puente Nayero, en la zona urbana de Buenaventura. Durante su campaña propuso impulsar los temas relacionados con la Ley 70 de 1993, lograr que las universidades lleguen a las zonas rurales, potenciar los espacios de los pescadores artesanales, entre otras iniciativas.

MUJERES ELECTAS EN EL VALLE DEL CAUCA

Cámara de Representantes

Gloria Elena Arizabaleta fue la representante electa por el Pacto Histórico. Cuenta con diez años de experiencia en la Fiscalía General de la Nación, y en el 2020 fue la Directora Nacional de apoyo de investigación y análisis para la seguridad ciudadana de dicha institución. Se ha desempeñado en otros cargos del sector público como la Aeronáutica Civil, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, y en la EPS Cali Salud.⁹

Senado

Norma Hurtado fue la senadora elegida por el Partido de la U. Fue representante a la Cámara en el período 2018-2022, e hizo parte de la Comisión Séptima encargada de temas relacionados con el sector salud, laboral, mujeres, vivienda, deporte, entre otros. Además, es miembro de la Comisión de Equidad de Género del Congreso de la República, desde donde lidera importantes iniciativas en pro de la prevención y atención

9. Para más información, consulte: <https://mobile.twitter.com/gloarizabaleta>

de las violencias basadas en género, así como de fortalecimiento de la participación de la mujer en la vida política y social del país.¹⁰

María Fernanda Cabal, por su parte, fue la senadora reelegida por el Centro Democrático. En el año 2006 fué directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, en 2014 fue electa a la Cámara de Representantes por Bogotá. Aportó a la creación del Programa de Acompañamiento a las Víctimas Ganaderas de la Violencia, PAVIC, que incluyó a más de 6.000 ganaderos.¹¹

¿CÓMO VOTÓ EL VALLE DEL CAUCA EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2022?

Resultados Primera Vuelta

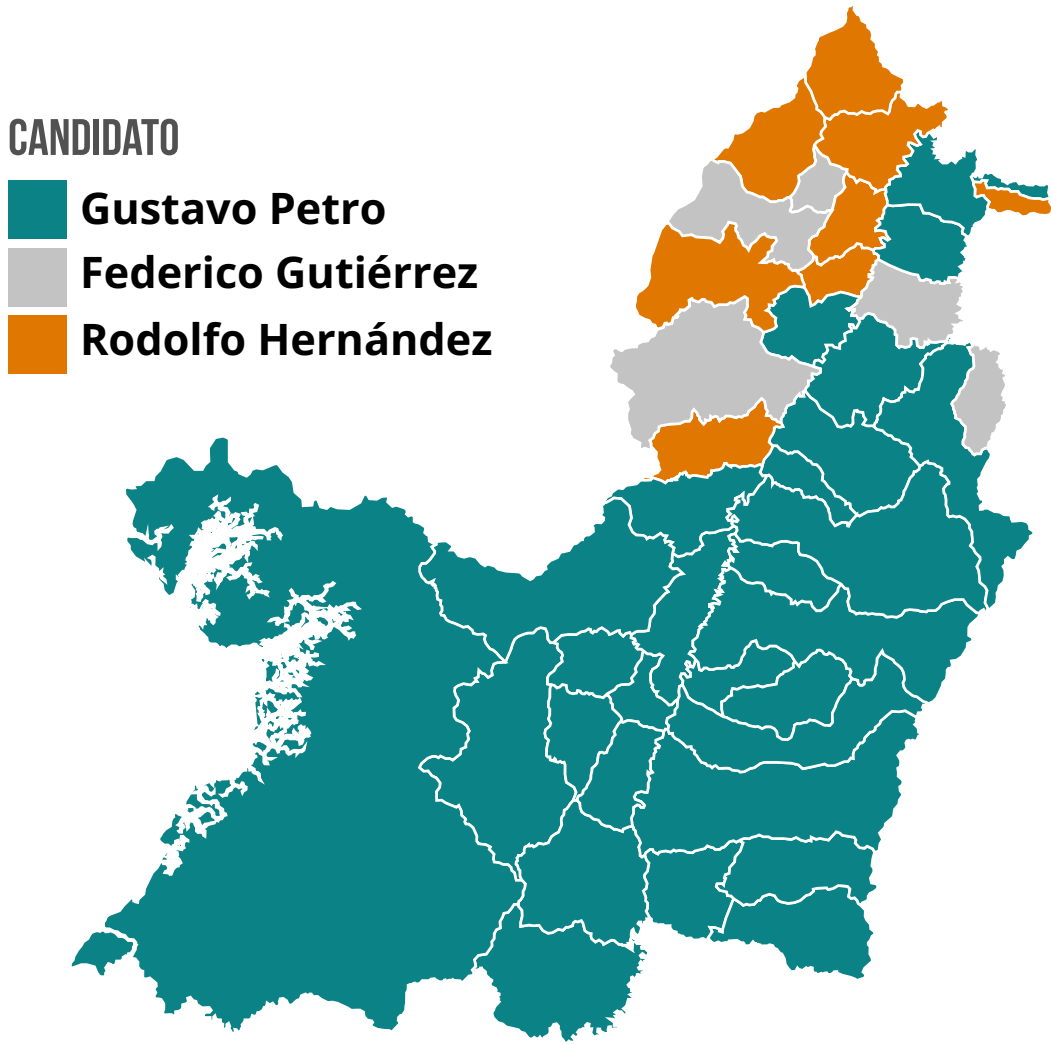
TABLA 1
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRIMERA VUELTA 2022 -
CANDIDATO GANADOR POR MUNICIPIO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIOS	GANADOR	PORCENTAJE
ALCALÁ	RODOLFO HERNÁNDEZ	35,85%
ANDALUCÍA	GUSTAVO PETRO	51,95%
ANSERMANUEVO	RODOLFO HERNÁNDEZ	41,88%
ARGELIA	FEDERICO GUTIÉRREZ	40,48%
BOLÍVAR	FEDERICO GUTIÉRREZ	34,82%
BUENAVENTURA	GUSTAVO PETRO	78,30%
BUGA	GUSTAVO PETRO	55,86%
BUGALAGRANDE	GUSTAVO PETRO	60,50%
CAICEDONIA	FEDERICO GUTIÉRREZ	34,83%
CALI	GUSTAVO PETRO	53,36%
CALIMA (DARIÉN)	GUSTAVO PETRO	41,95%
CANDELARIA	GUSTAVO PETRO	65,50%
CARTAGO	GUSTAVO PETRO	37,16%
DAGUA	GUSTAVO PETRO	41,05%
EL ÁGUILA	RODOLFO HERNÁNDEZ	44,99%
EL CAIRO	RODOLFO HERNÁNDEZ	40,22%
EL CERRITO	GUSTAVO PETRO	65,31%
EL DOVIO	RODOLFO HERNÁNDEZ	38,57%
FLORIDA	GUSTAVO PETRO	71,11%
GINEBRA	GUSTAVO PETRO	48,85%
GUACARÍ	GUSTAVO PETRO	64,99%
JAMUNDÍ	GUSTAVO PETRO	57,49%
LA CUMBRE	GUSTAVO PETRO	41,88%
LA UNIÓN	RODOLFO HERNÁNDEZ	46,92%
LA VICTORIA	FEDERICO GUTIÉRREZ	34,92%
OBANDO	GUSTAVO PETRO	44,64%
PALMIRA	GUSTAVO PETRO	55,33%
PRADERA	GUSTAVO PETRO	63,90%
RESTREPO	GUSTAVO PETRO	38,07%
RIOFRÍO	GUSTAVO PETRO	37,15%
ROLDANILLO	GUSTAVO PETRO	37,32%
SAN PEDRO	GUSTAVO PETRO	45,73%
SEVILLA	GUSTAVO PETRO	36,73%
TORO	RODOLFO HERNÁNDEZ	44,18%
TRUJILLO	RODOLFO HERNÁNDEZ	33,98%
TULUÁ	GUSTAVO PETRO	43,12%
ULLOA	GUSTAVO PETRO	34,35%
VERSALLES	FEDERICO GUTIÉRREZ	39,45%
VIJES	GUSTAVO PETRO	53,33%
YOTOCO	GUSTAVO PETRO	48,25%
YUMBO	GUSTAVO PETRO	67,32%
ZARZAL	GUSTAVO PETRO	60,75%

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

10. Para más información, consulte: <https://es-la.facebook.com/normahurtados>
11. Para más información, consulte: <https://mariafernandacabal.com/propuestas-al-senado/>

FIGURA 3
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES PRIMERA VUELTA
2022 - CANDIDATO GANADOR POR MUNICIPIO DEL VALLE DEL CAUCA



Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

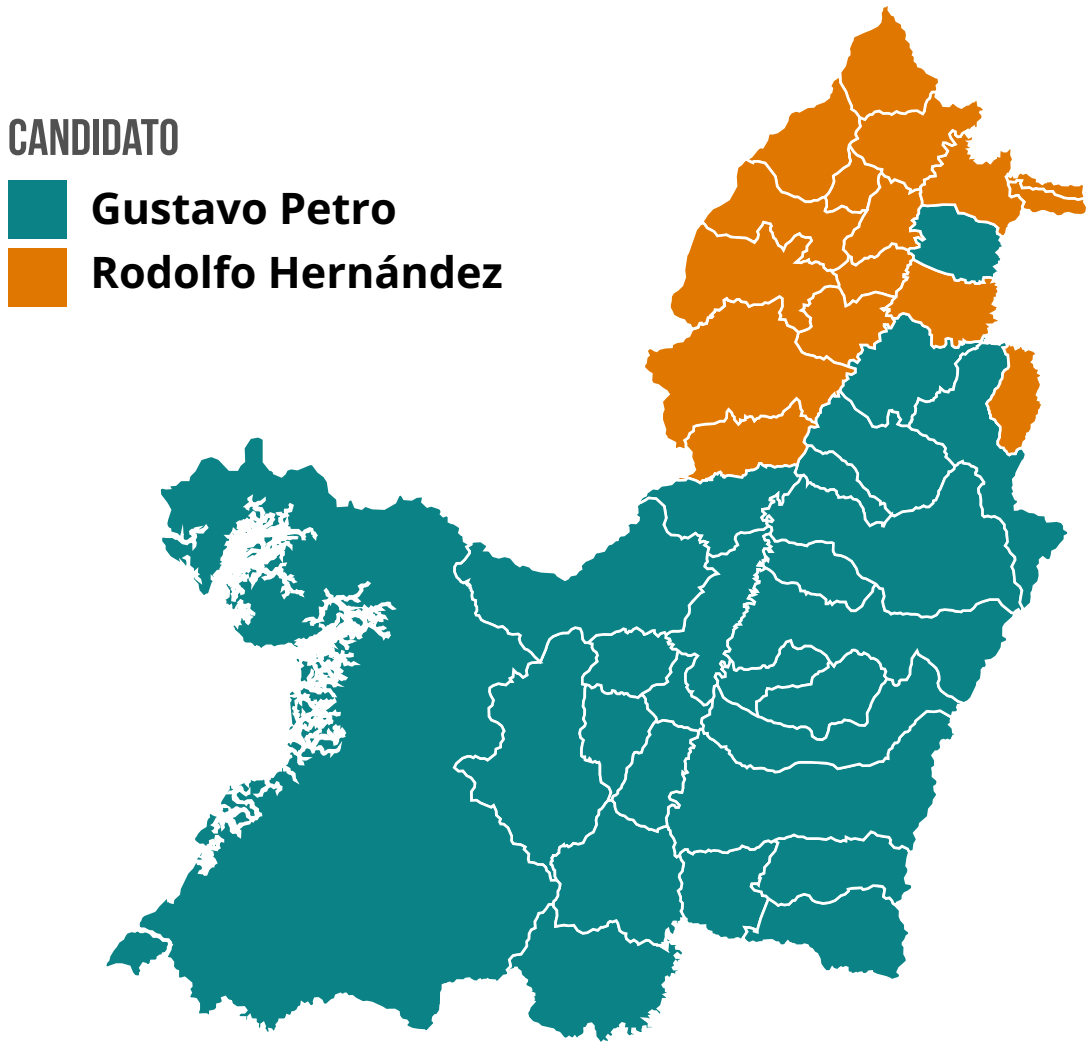
Resultados Segunda Vuelta

TABLA 2
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SEGUNDA VUELTA 2022 -
CANDIDATO GANADOR POR MUNICIPIO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIOS	GANADOR	PORCENTAJE
ALCALÁ	RODOLFO HERNÁNDEZ	54,83%
ANDALUCÍA	GUSTAVO PETRO	62,23%
ANSERMANUEVO	RODOLFO HERNÁNDEZ	63,03%
ARGELIA	RODOLFO HERNÁNDEZ	76,01%
BOLÍVAR	RODOLFO HERNÁNDEZ	59,52%
BUENAVENTURA	GUSTAVO PETRO	86,35%
BUGA	GUSTAVO PETRO	66,78%
BUGALAGRANDE	GUSTAVO PETRO	69,26%
CAICEDONIA	RODOLFO HERNÁNDEZ	59,99%
CALI	GUSTAVO PETRO	63,76%
CALIMA (DARIÉN)	GUSTAVO PETRO	53,38%
CANDELARIA	GUSTAVO PETRO	75,98%
CARTAGO	RODOLFO HERNÁNDEZ	49,51%
DAGUA	GUSTAVO PETRO	52,02%
EL ÁGUILA	RODOLFO HERNÁNDEZ	72,96%
EL CAIRO	RODOLFO HERNÁNDEZ	69,85%
EL CERRITO	GUSTAVO PETRO	73,79%
EL DOVIO	RODOLFO HERNÁNDEZ	59,46%
FLORIDA	GUSTAVO PETRO	78,91%
GINEBRA	GUSTAVO PETRO	57,45%
GUACARÍ	GUSTAVO PETRO	74,23%
JAMUNDÍ	GUSTAVO PETRO	69,02%
LA CUMBRE	GUSTAVO PETRO	52,56%
LA UNIÓN	RODOLFO HERNÁNDEZ	65,71%
LA VICTORIA	RODOLFO HERNÁNDEZ	63,06%
OBANDO	GUSTAVO PETRO	58,70%
PALMIRA	GUSTAVO PETRO	66,56%
PRADERA	GUSTAVO PETRO	76,36%
RESTREPO	GUSTAVO PETRO	49,53%
RIOFRÍO	RODOLFO HERNÁNDEZ	50,27%
ROLDANILLO	RODOLFO HERNÁNDEZ	49,43%
SAN PEDRO	GUSTAVO PETRO	57,60%
SEVILLA	GUSTAVO PETRO	50,28%
TORO	RODOLFO HERNÁNDEZ	66,57%
TRUJILLO	RODOLFO HERNÁNDEZ	59,97%
TULUÁ	GUSTAVO PETRO	54,61%
ULLOA	RODOLFO HERNÁNDEZ	52,28%
VERSALLES	RODOLFO HERNÁNDEZ	68,94%
VIJES	GUSTAVO PETRO	64,08%
YOTOCO	GUSTAVO PETRO	59,90%
YUMBO	GUSTAVO PETRO	76,47%
ZARZAL	GUSTAVO PETRO	70,81%

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

FIGURA 4
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES SEGUNDA VUELTA
2022 - CANDIDATO GANADOR POR MUNICIPIO DEL VALLE DEL CAUCA



Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2022).

Tanto en primera como en segunda vuelta, se evidencia la tendencia de que en algunos municipios del norte del Valle del Cauca, se vota por candidatos ubicados en el espectro ideológico de la derecha o centro-derecha. De lo anterior, sin embargo, se reitera que el objetivo del presente capítulo es descriptivo, y no se pretende analizar las preferencias de los electores del Valle del Cauca en el marco de las elecciones presidenciales de 2022.

APUNTES FINALES

El contenido de este informe ofrece un panorama actual de la dinámica electoral en el Valle del Cauca, como herramienta para promover el análisis respecto a la apertura democrática, la violencia política, y la transparencia electoral en el territorio colombiano. Permitiendo orientar, de esta forma, la toma de decisiones institucionales en pro de la construcción de una paz estable y duradera.

REFERENCIAS

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados preconteo al Senado de la República en el Valle del Cauca. Recuperado de <https://resultadosprecongreso.registraduria.gov.co/senado/32/colombia/valle> (consultado el 14 de marzo de 2022).

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados preconteo a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Recuperado de <https://resultadosprecongreso.registraduria.gov.co/camara/32/colombia/valle> (consultado el 14 de marzo de 2022).

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados preconteo a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz No.9-Buenaventura. Recuperado de <https://resultadosprecongreso.registraduria.gov.co/citrep/35/colombia/circunscripcion-9-cauca---val/buenaventura> (consultado el 14 de marzo de 2022).

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados preconteo a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz No.1-Florida. Recuperado de <https://resultadosprecongreso.registraduria.gov.co/citrep/73/colombia/circunscripcion-1-cauca--nari/florida> (consultado el 14 de marzo de 2022).

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados preconteo a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz No.1-Pradera. Recuperado de <https://resultadosprecongreso.registraduria.gov.co/citrep/121/colombia/circunscripcion-1-cauca--nari/pradera> (consultado el 14 de marzo de 2022).

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados preconteo en la primera vuelta presidencial en el Valle del Cauca. Recuperado de <https://resultadosprepresidente1v.registraduria.gov.co/presidente/32/colombia/valle>

Registraduría Nacional del Estado Civil. Resultados preconteo en la segunda vuelta presidencial en el Valle del Cauca. Recuperado de <https://resultadosprepresidente2v.registraduria.gov.co/presidente/32/colombia/valle>

DINÁMICA ELECTORAL

EN EL VALLE DEL CAUCA 2022

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PUNTO 2 DEL ACUERDO DE PAZ



**GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA**
Secretaría de Paz Territorial
y Reconciliación



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali



**OBSERVATORIO
para LA PAZ**
VALLE